

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

G/SCM/N/71/CRI
15 de marzo de 2002

(02-1356)

Comité de Subvenciones y
Medidas Compensatorias

Original: español

SUBVENCIONES

Notificación nueva y completa de conformidad con el párrafo 1 del artículo XVI
del GATT de 1994 y el artículo 25 del Acuerdo sobre Subvenciones
y Medidas Compensatorias

COSTA RICA

Se ha recibido de la Misión Permanente de la República de Costa Rica la siguiente comunicación, de fecha 5 de marzo de 2002.

ÍNDICE

	<u>Página</u>
Notificación	2

ANEXOS

Ley No. 7210	9
Decreto No. 29606-H.....	28
Ley No. 7557	57
Decreto No. 25270-H.....	61
Decreto No. 26285-H.....	72
Ley No. 7467	92
Ley No. 7535	95
Ley No. 7638	130
Ley No. 4924	137
Ley No. 7830	147
Decreto No. 27329-H.....	156
Decreto No. 29055-H.....	158

A. EL RÉGIMEN DE ZONA FRANCA

1. Descripción de la subvención

El Régimen de Zonas Francas es el conjunto de incentivos y beneficios que el Estado otorga a las empresas que realicen inversiones nuevas en el país, siempre y cuando cumplan los requisitos y las obligaciones establecidas en la Ley No. 7210, sus reformas y su reglamento. Entre los requisitos para ser beneficiarios se encuentra el requerimiento de que al menos se exporte el 75% de su producción. El reglamento determina qué se entiende por inversiones nuevas en el país. El lugar donde se establezca un grupo de empresas beneficiadas con este Régimen, se denomina "zona franca" y será un área delimitada, sin población residente, autorizada por el Poder Ejecutivo para funcionar como tal.

2. Período de la notificación

La presente notificación presenta una descripción del Régimen de Zona Franca correspondiente a lo existente el 1 de setiembre del 2001. Como base para el cálculo de las estadísticas utilizadas para la determinación de la cuantía de la subvención se tomó el año calendario 2001.

3. Objetivo de política

El objetivo fundamental de la Ley es fomentar el desarrollo socioeconómico del país mediante la atracción de la inversión extranjera, la inversión nacional y la promoción de las exportaciones. El régimen de zonas francas constituye un instrumento económico importante para elevar la calidad de vida de los costarricenses, especialmente a través de la generación de fuentes de trabajo y del fortalecimiento del desarrollo humano, con énfasis en las zonas de menor desarrollo del país. Este tipo de régimen propicia el establecimiento de empresas que realizan una amplia gama de operaciones y procesos productivos, los cuales contribuyen a generar riqueza, conocimiento tecnológico y aumentan la competitividad internacional del país.

4. Fundamento y legislación

Ley de Régimen de Zonas Francas, No. 7210 del 23 de noviembre de 1990 (se anexa el texto completo) y sus reformas¹.

Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas – Decreto Ejecutivo No. 29606-H-COMEX del 18 de junio del 2001 (se anexa el texto completo).

Ley General de Aduanas No. 7557 del 20 de Octubre de 1995, Sección I, Capítulo V (Régimen de Zona Franca) (se anexan las partes referidas²) y sus reformas³.

Reglamento a la Ley General de Aduanas, Capítulo X (Régimen de Zona Franca), Decreto Ejecutivo No.25270-H del 28 de Junio de 1996 (se anexan las partes referidas⁴) y sus reformas⁵.

¹ Las reformas a la Ley 7210 del 23 de noviembre de 1990 corresponden a: Ley 7467 del 20 de diciembre de 1994, Ley 7535 del 1 de agosto de 1995, Ley No. 7638 del 30 de octubre de 1996, Ley No. 4924 del 17 de setiembre de 1997 y Ley No. 7830 del 22 de setiembre de 1998 (se anexan los textos completos de las legislaciones referidas).

² El texto completo está disponible para consulta en los archivos de la División de Normas -- Sra. S. Aspinall, despacho 1028, teléfono: 739 51 09)

³ Las reformas a la Ley General de Aduanas No. 7557 del 20 de octubre de 1995 corresponden a: Ley No.7900 del 3 de agosto de 1999(disponible para consulta en los archivos de la División de Normas.

⁴ El texto completo está disponible para consulta en los archivos de la División de Normas.

5. Forma de la subvención

La subvención consiste básicamente en la exención del pago de todo tributo y derecho consular e impuestos. Esta subvención se da de la forma en que se detalla seguidamente.

Los incentivos otorgados por este régimen son:

- a) Exención de todo tributo y derecho consular sobre las importaciones de materias primas, productos elaborados y semielaborados, componentes y partes, materiales de empaque y envase, así como otras mercaderías y bienes requeridos para su operación.
- b) Exención de todo tributo o derecho consular sobre la importación de maquinaria, equipo, accesorios y repuestos, así como los vehículos automotores necesarios para su operación, producción, administración y transporte.
- c) Exención de todo tributo y derecho consular sobre la importación de combustibles, aceites y lubricantes requeridos para la operación de estas empresas.
- d) Exención de todo tributo asociado con la exportación o reexportación de productos. Esta exención se otorgará para la reexportación de la maquinaria de producción y equipo de las Zonas, ingresadas al amparo de la ley.
- e) Exención del pago de impuestos sobre el capital y el activo neto y del pago del impuesto territorial.
- f) Exención del impuesto de ventas y consumo sobre las compras de bienes y servicios.
- g) Exención de todo tributo que pese sobre las remesas al extranjero.
- h) Exención de todos los tributos a las utilidades, así como de cualquier otro, cuya base imponible se determine en relación con las ganancias brutas o netas, los dividendos abonados a los accionistas o ingresos o ventas.
- i) Exención de todo tributo y patente municipal.
- j) Exención de todo tributo sobre la importación y exportación de muestras comerciales o industriales.
- k) Para el mejor desarrollo de sus operaciones, las empresas acogidas al Régimen de Zona Franca podrán realizar libremente toda clase de actos y contratos en moneda extranjera referentes a sus transacciones internacionales o a aquellas efectuadas con las demás empresas establecidas en el Régimen de Zona Franca.

⁵ Las reformas al Reglamento a la Ley General de Aduanas, Capítulo X (Régimen de Zona Franca), Decreto Ejecutivo No.25270-H del 28 de Junio de 1996 corresponden a: Decreto Ejecutivo 25295 del 17 de junio de 1996 (disponible para consulta en los archivos de la División de Normas), Decreto Ejecutivo 26285 del 18 de agosto de 1997 (se anexa el texto completo), Decreto Ejecutivo 26961 del 30 de marzo de 1998 (disponible para consulta en los archivos de la División de Normas), Decreto 27717 del 23 de febrero de 1999 (disponible para consulta en los archivos de la División de Normas), Decreto Ejecutivo 28242 del 30 de setiembre de 1999 (disponible para consulta en los archivos de la División de Normas) y Decreto Ejecutivo 28976 del 27 de setiembre del 2000 (disponible para consulta en los archivos de la División de Normas).

- l) Las empresas ubicadas en zonas de menor desarrollo relativo tendrán derecho a una bonificación equivalente al diez por ciento de la suma pagada por salarios durante el año inmediato anterior, este porcentaje disminuirá dos puntos porcentuales por año hasta su terminación en el quinto año.
- m) Las empresas procesadoras de exportación beneficiarias del Régimen de Zonas Francas que al cumplir cuatro años de operar bajo dicho Régimen reinviertan en el país, podrán recibir una exención adicional del pago del impuesto sobre la renta según el porcentaje que represente la reinversión de la inversión original.

Las exenciones anteriormente mencionadas quedan sujetas al cumplimiento de ciertos requisitos específicos establecidos por Ley y Reglamento, así como a los compromisos internacionales suscritos y aprobados por el país.

6. Beneficiarios y mecanismo

Pueden acogerse al Régimen de Zonas Francas los siguientes tipos de empresas:

- a) Industrias procesadoras de exportación que producen, procesan o ensamblan para la exportación o reexportación.
- b) Empresas comerciales de exportación, no productoras, que simplemente manipulan, reempacan o redistribuyen mercaderías no tradicionales y productos para la exportación o reexportación.
- c) Industrias y empresas de servicios que los exporten a personas físicas y jurídicas, domiciliadas en el exterior o que lo provean a compañías beneficiarias del Régimen de Zonas Francas; siempre y cuando, en este último caso, los servicios estén directamente vinculados con el proceso de producción de las compañías beneficiarias del Régimen de Zonas Francas.
- d) Empresas administradoras de parques destinados a la instalación de empresas bajo el Régimen de Zonas Francas, siempre que los parques cumplan condiciones mínimas de infraestructura y disponibilidad de servicios, según el reglamento de esta ley.
- e) Empresas o entidades que se dediquen a la investigación científica para el mejoramiento del nivel tecnológico de la actividad industrial o agroindustrial y del Comercio Exterior del país.
- f) Empresas que operen astilleros y diques secos o flotantes para la construcción, reparación o mantenimiento de las embarcaciones.

Las empresas comerciales de exportación no gozan de las exoneraciones incluidas en los incisos g) y h) de la sección A.5. de la presente notificación. Sobre lo cual, cabe señalar, que la gran mayoría de las empresas bajo el Régimen de Zona Franca son industrias procesadoras de exportación y no empresas comerciales de exportación.

Las entidades bancarias, financieras y aseguradoras que se instalen en las zonas francas no podrán gozar de los beneficios de este Régimen. Tampoco podrán acogerse al Régimen las personas físicas o jurídicas dedicadas a prestar servicios profesionales.

Existen diferentes etapas para otorgar el Régimen:

- a) La persona física o jurídica interesada en ingresar al Régimen de Zonas Francas, deberá presentar la solicitud respectiva a la Corporación⁶ (Estas facultades y deberes corresponden actualmente a la Promotora de Comercio Exterior, PROCOMER según el artículo 13, inciso a), de la N° 7638 de 30 de octubre de 1996)), la cual deberá estar debidamente autenticada por un notario público, y estar acompañada de información detallada sobre la contaminación producida por el proceso y sus desechos, así como de los documentos que solicite la Junta Directiva de la Corporación, todo de acuerdo con los instructivos que al efecto proporcionará la Corporación.
- b) La Corporación analizará la solicitud y la información suministrada, siempre y cuando estuviera completa y enviará un dictamen a la Junta Directiva, la que deberá resolver, a más tardar, en la sesión ordinaria subsiguiente a la recepción del dictamen o en una sesión extraordinaria, si así lo acuerdan cuatro de sus miembros.
- c) La Corporación solicitará, cuando lo estime conveniente, el dictamen especializado a las diferentes instituciones del Estado, para un mejor análisis de la solicitud de las empresas.
- d) Si la recomendación es acogida, el Poder Ejecutivo la aprobará mediante un acuerdo que contendrá los asuntos que el Reglamento de esta ley determine.

7. Estimación de la subvención

Por tratarse de una subvención que incorpora la exención de un grupo diversos de tributos y derecho consular, que varían de conformidad con el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos, no se dispone de información completa para estimar el monto de la subvención.

8. Duración de la subvención

Los beneficios de éste Régimen rigen a partir del momento en que se otorga el Régimen de Zona Franca a la empresa que así lo solicitó. Salvo la revocación del Régimen por parte del Ministerio de Comercio Exterior, la renuncia por parte de la empresa acogida al mismo y las excepciones específicas para algunos de los incentivos, que se detallan a continuación, el Régimen de Zona Franca tiene carácter indefinido.

De los incentivos señalados en el numeral 5 de la presente notificación, los siguientes cuentan con un plazo específico de vencimiento:

- Exención de los impuestos sobre el capital y activo neto, del pago del impuesto territorial por un período de diez años.⁷
- Exención de todos los tributos a las utilidades, así como de cualquier otro, cuya base imponible se determine en relación con las ganancias brutas o netas, los dividendos abonados a los accionistas o ingresos o ventas⁸, de conformidad con las siguientes diferenciaciones:
 - a) Para las empresas ubicadas en zonas de “mayor desarrollo relativo”, la exención será de un ciento por ciento hasta por un período de ocho años y de un cincuenta por ciento en los siguientes cuatro años.

⁶ Corporación se refiere a la “Corporación de la Zona Franca de Exportaciones S.A.” de conformidad con la Ley General de Aduanas No. 7557 del 20 de Octubre de 1995.

⁷ Corresponde al inciso e) de la sección 5 de la presente notificación.

⁸ Corresponde al inciso h) de la sección 5 de la presente notificación

- b) Para las empresas ubicadas en zonas de “menor desarrollo relativo”, la exención será de un cien por ciento hasta por un período de doce años y de un cincuenta por ciento en los siguientes seis años.
 - c) Para las empresas procesadoras de exportación que realicen reinversiones en el país después de cumplir cuatro años de operar bajo el Régimen, es posible una exención adicional del setenta y cinco por ciento hasta por cuatro años, dependiendo del monto de la reinversión.
- Exención de todo tributo y patente municipal por un período de diez años.⁹

9. Efectos comerciales de la subvención

En la actualidad, existen 299 empresas que disfrutan de los beneficios de Zona Franca. Estas firmas en conjunto generaron el 47% del total exportado por Costa Rica durante el 2001, mientras que en 1991, 81 empresas acogidas a este régimen exportaban solo un 9,3% del total.

El dinamismo mostrado por las firmas de Zona Franca es evidente no solamente desde punto de vista de la magnitud de las exportaciones, las cuales se han multiplicado 13 veces durante la última década, sino por el efecto positivo que genera para la economía desde el punto de vista de la generación de empleo. Zona Franca mantiene a más de 34.000 trabajadores directos, de los cuales cerca de las tres cuartas partes corresponden a operarios o población con un bajo grado de escolaridad.

Además de este favorable impacto socioeconómico, la instalación de empresas de alta tecnología ha propiciado la transferencia tecnológica y el desarrollo de una importante industria del conocimiento en el mercado local; así como una fuerza laboral especializada y altamente competitiva.

Costa Rica: Exportaciones Totales y de Zona Franca
En millones de US\$

	1999	2000	2001
Zona Franca	3.591,9	2.980,2	2.377,5
Exportaciones totales	6.719,0	5.897,5	5.040,0

B. EL RÉGIMEN DE PERFECCIONAMIENTO ACTIVO

1. Descripción de la subvención

El régimen de perfeccionamiento activo es el régimen aduanero que permite recibir mercancías en el territorio aduanero nacional, con suspensión de toda clase de tributos y bajo rendición de garantía. Estas mercancías deben ser reexportadas, dentro de los plazos que determinen los reglamentos, después de ser sometidas a un proceso de transformación, reparación, reconstrucción, montaje, ensamblaje o incorporadas en conjuntos, maquinaria, equipo de transporte en general o aparatos de mayor complejidad tecnológica y funcional o utilizadas para otros fines análogos, en las condiciones establecidas reglamentariamente y en las disposiciones que, al efecto, emita el órgano administrador competente.

⁹ Corresponde a los incisos i) y m) de la sección 5 de la presente notificación.

La solicitud de un período de transición para el Régimen de Perfeccionamiento Activo se refiere únicamente a las exenciones de cargas a la importación e impuestos indirectos que constituyan alguno de los supuestos previstos en los párrafos g), h) o i) del Anexo I del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias.

2. Período de la notificación

La presente notificación presenta una descripción del Régimen de Perfeccionamiento Activo correspondiente a lo existente el 1 de setiembre del 2001. Como base para el cálculo de las estadísticas utilizadas para la determinación de la cuantía de la subvención se tomó el año calendario 2001.

3. Objetivo de política

El régimen de perfeccionamiento activo pretende fomentar la producción, el empleo y las inversión extranjera y nacional, lo cual contribuye ineludiblemente a incrementar las exportaciones y el consumo local. Todos estos elementos convergen en el logro de objetivos de desarrollo nacional, tales como, mejorar el nivel de vida de la población, aumentar sus niveles de ingreso, reducir el desempleo y mejorar la productividad y competitividad del país en el plano internacional.

4. Fundamento y legislación

Ley General de Aduanas No. 7557 del 20 de Octubre de 1995 Capítulo VI (Regímenes de Perfeccionamiento) (se anexan las partes referidas¹⁰) y sus reformas¹¹.

Reglamento a la Ley General de Aduanas, Capítulo XIII (Régimen de Perfeccionamiento Activo), Decreto Ejecutivo No.25270-H del 28 de Junio de 1996 (se anexan las partes referidas¹²) y sus reformas¹³.

Reglamento de los Regímenes de Perfeccionamiento Activo y Devolutivo de Derechos – Decreto Ejecutivo No. 26285-H-COMEX del 19 de Agosto de 1997 (se anexa el texto completo) y sus reformas¹⁴.

5. Forma de la subvención

El régimen de perfeccionamiento activo permite recibir mercancías en el territorio aduanero nacional con suspensión de toda clase de tributos y bajo rendición de garantía. Estas mercancías deben ser reexportadas, dentro de los plazos que determinen los reglamentos, después de ser sometidas a un proceso de transformación, reparación, reconstrucción, montaje, ensamblaje o incorporadas en conjuntos, maquinaria, equipo de transporte en general o aparatos de mayor complejidad tecnológica y funcional o utilizadas para otros fines análogos, en las condiciones establecidas reglamentariamente y en las disposiciones que, al efecto, emita el órgano administrador competente.

¹⁰ El texto completo está disponible para consulta en los archivos de la División de Normas.

¹¹ Cfr. Nota 3.

¹² El texto completo está disponible para consulta en los archivos de la División de Normas.

¹³ Cfr. Nota 5.

¹⁴ Las reformas al Reglamento de los Regímenes de Perfeccionamiento Activo y Devolutivo de Derechos – Decreto Ejecutivo No. 26285-H-COMEX del 19 de Agosto de 1997 corresponden a: Decreto Ejecutivo 27329 del 26 de agosto de 1998 y Decreto Ejecutivo 29055 del 31 de octubre del 2000 (se anexan los textos completos).

6. Beneficiarios y mecanismo

Para acogerse al Régimen las empresas deberán optar por una de las modalidades existentes:

- a) Modalidad ciento por ciento reexportación: las empresas que se acojan a esta modalidad no podrán vender sus productos en el mercado local.
- b) Modalidad reexportación y venta local: bajo esta modalidad las empresas podrán vender las mercancías en el mercado local o simplemente reexportarlas.

Las empresas que operen bajo la modalidad de venta local deberán pagar la totalidad de los impuestos correspondientes a la importación definitiva de las mercancías. Asimismo, deberán cancelar, al momento del internamiento de la maquinaria y equipo bajo el régimen, la parte de los impuestos correspondientes, de conformidad con el porcentaje de ventas en el mercado local, sobre el total de las ventas de la empresa.

Los beneficiarios del Régimen están obligados a: presentar informes de todas sus operaciones a la Gerencia de PROCOMER; llevar un registro de las operaciones efectuadas bajo ese régimen; previo al inicio de operaciones, solicitar a la Dirección General de Aduanas la autorización para operar como auxiliar de la función pública aduanera; mantener las mercancías ingresadas bajo el régimen en los locales o plantas autorizadas; llevar por separado un control de inventarios y los registros contables de las operaciones realizadas al amparo del régimen; cumplir con la legislación aduanera; etc.

7. Estimación de la subvención

No se dispone de información para estimar el monto del subsidio otorgado a través de este régimen.

8. Duración de la subvención

Los beneficios de Régimen rigen a partir de la emisión de la autorización de iniciar actividades bajo el Régimen de Perfeccionamiento Activo. Salvo la revocatoria de la autorización del Régimen por parte del Ministerio de Comercio Exterior o su renuncia por parte de la empresa acogida al mismo, los beneficios otorgados por éste Régimen son de carácter indefinido.

9. Efectos comerciales de la subvención

El régimen de Perfeccionamiento Activo proporciona empleo a alrededor de 17.000 personas y aporta cerca de un 7% de las exportaciones totales de Costa Rica.

La mayor parte de las exportaciones amparadas al Régimen de Perfeccionamiento Activo se dirigen al mercado norteamericano y en menor medida a Suramérica y a la región centroamericana.

Cabe señalar que una parte considerable de las firmas bajo este régimen se localizan en zonas de poco desarrollo urbano, por lo que representan una fuente de empleo muy importante para la zona.

Costa Rica: Exportaciones Totales y de Perfeccionamiento Activo
En millones de US\$

	1999	2000	2001
Perfeccionamiento activo	370,5	392,3	345,0
Exportaciones totales	6.719,0	5.897,5	5.040,0

Ley de Régimen de Zonas Francas

No. 7210

Capítulo 1. Zonas Francas de Exportación

Artículo 1

El Régimen de Zonas Francas es el conjunto de incentivos y beneficios que el Estado otorga a las empresas que realicen inversiones nuevas en el país, siempre y cuando cumplan los demás requisitos y las obligaciones establecidos en esta ley y sus reglamentos. El reglamento determinará qué se entenderá por inversiones nuevas en el país. Las empresas beneficiadas con este Régimen se dedicarán a la manipulación, el procesamiento, la manufactura, la producción, la reparación y el mantenimiento de bienes y la prestación de servicios destinados a la exportación o reexportación, excepto lo previsto en los artículos 22 y 24 de esta ley. El lugar donde se establezca un grupo de empresas beneficiadas con este Régimen, se denomina "una franca" y será un área delimitada, sin población residente, autorizada por el Poder Ejecutivo para funcionar como tal. El Régimen de Zonas Francas se otorgará solo a empresas con proyectos cuya inversión nueva inicial en activos fijos sea de al menos ciento cincuenta mil dólares estadounidenses (US\$150.000,00) o su equivalente en moneda nacional.

Las pequeñas empresas que se asocien para realizar, conjunta y directamente, actividades procesadoras para la exportación, podrán alcanzar el monto mínimo de inversión indicado en este artículo, sumando el monto de la inversión de cada empresa asociada, conforme lo disponga el reglamento de esta ley. Para estos efectos, se entenderá por pequeñas empresas las que empleen a un máximo de veinte trabajadores.

Las empresas que califiquen en el Régimen de Zonas Francas tendrán que cumplir todas las normas de protección del medio ambiente que la legislación costarricense y la internacional disponen para el desarrollo sostenible de las actividades -económicas.

(Modificado por ley 7830 del 8 de octubre de 1998)

Capítulo 2. De la Corporación

Artículo 2

Se reconoce el carácter de empresa privada del Estado, de capital mixto, a la Corporación de la Zona Franca de Exportación, Sociedad Anónima, la cual se encuentra inscrita en el Registro Público, Sección Mercantil, al tomo No. 183, folio No. 392, asiento No. 399. La Corporación se registrará por esta ley, sus reglamentos y la legislación mercantil común.

La fiscalización de la Corporación estará a cargo de la Contraloría General de la República cuyas resoluciones serán de acatamiento obligatorio.

Artículo 3

El objetivo de la Corporación será la promoción, la administración y la supervisión del régimen de zona franca.

Artículo 4

La Corporación queda facultada para:

- a) Estimular la formación y el establecimiento de Zonas Francas.
- b) Recomendar, canalizar y regular los respectivos permisos de las empresas que deseen establecerse en las Zonas Francas, en coordinación con las instituciones gubernamentales correspondientes.
- c) Asumir, excepcional y temporalmente, la administración de las zonas francas, cuando el otorgamiento del Régimen de Zonas Francas le sea suspendido o revocado a una empresa administradora.
- ch) Dar en arrendamiento propiedades y tierras, propias o que le hayan sido dadas en administración, para que las empresas puedan construir, hacer construir o modificar por cuenta propia, los edificios diseñados para llenar sus requisitos específicos. Las construcciones y mejoras realizadas en inmuebles de la Corporación, al término del arrendamiento, pasarán a ser propiedad de ésta, si el propietario no pudiera dismantelarlas y llevárselas por su cuenta, dentro del plazo señalado por ella.
- d) Vender propiedades y terrenos de la Corporación, cuyo precio no podrá ser inferior al monto determinado por avalúo practicado al efecto por la Dirección General de Tributación Directa.
- e) Coordinar con las instituciones pertinentes el establecimiento de las facilidades aduaneras, de seguridad y de salubridad necesarias, de acuerdo con los requerimientos y recomendaciones de los Ministerios de Hacienda y de Salud, y del Instituto Nacional de Seguros, según sea el caso.
- f) Construir, contratar y coordinar con las instituciones estatales respectivas, la construcción de instalaciones de infraestructura y servicios públicos necesarios, para el debido cumplimiento de sus fines.
- g)
- h) Establecer un depósito de garantía, conforme con lo dispuesto en el artículo 9, inciso ch) de esta ley, el cual deberán rendir a favor de la Corporación las empresas acogidas al Régimen de Zona Franca. Dicha garantía podrá ser utilizada por la Corporación para cancelar deudas que la empresa garante haya contraído con ella y que al momento de la revocatoria del Acuerdo Ejecutivo aún no haya cancelado.
- i) Comprobar que las empresas administradoras de las Zonas Francas construyan los centros infantiles necesarios dentro del parque industrial respectivo, para los hijos de los trabajadores en edades comprendidas entre cero y los cinco años. Los administradores del parque arrendarán este servicio a las empresas instaladas en él.

Asimismo, procurarán la construcción de zonas de recreo en cada parque para uso de los trabajadores.
- j) Contratar el personal que requiera para su normal funcionamiento.
- k) Ejecutar cualesquiera otros actos lícitos, que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines.

(Modificado por ley No. 7830 del 8 de octubre de 1998)

(Reformado por ley No. 7467 de 20 de diciembre de 1994)

Artículo 5

La Corporación queda obligada a acatar, en lo pertinente, las directrices que sobre desarrollo y atracción de inversión extranjera, emita el Poder Ejecutivo.

Artículo 6

El Estado mantendrá en su poder como mínimo el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital accionario de la Corporación y podrá ceder, a título oneroso, a empresarios privados, el cuarenta y nueve por ciento (49%) restante. Ninguna persona física o jurídica o grupo de interés económico podrá ser dueño de más del cinco por ciento (5%) de las acciones de la Corporación.

Para los efectos de este artículo, se entiende por " grupo de interés económico " cualquier conjunto de sociedades que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones: que tenga un centro único de decisión o de control contable; que existan garantías cruzadas entre ellas o que haya dependencia de una o varias sociedades respecto de la otra u otras. Se considera también " grupo de interés económico ", para los efectos de este artículo, el conformado por personas físicas que sean cónyuges ascendientes, descendientes o hermanos o que tengan entre sí parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad inclusive. Las acciones serán nominativas.

La cesión que haga el Estado de sus acciones deberá realizarse por el valor de mercado de estos títulos al momento de la transacción, según fijación que haga la Contraloría General de la República. Para determinar dicho valor, deberán tomarse en cuenta, al menos, las siguientes variables: utilidad por acción y valor en libros de la acción.

El producto de la cesión que haga el Estado de sus acciones se destinará a la Corporación.

Artículo 7

Todos los incentivos y beneficios contemplados en esta ley, a favor de las empresas sometidas al Régimen de Zona Franca, se otorgarán a la Corporación, que también quedará exenta del pago de tributos y derechos que deba pagar, por la parte que le corresponda, en cualquier contrato que ejecute.

Capítulo 3. De la organización de la Corporación

Artículo 8

La Junta Directiva de la Corporación de Zonas Francas se integrará por:

- a) El Ministro de Comercio Exterior, quien presidirá.
- b) Un representante del Poder Ejecutivo, designado por el Consejo de Gobierno.
- c) Un representante de la Cámara de Industrias.
- ch) Un representante de la Cámara de Exportadores.
- d) Un representante de la Unión de Gobiernos Locales.
- e) Un representante de los accionistas.

Los miembros a que se refieren los apartes c); ch) y d) serán escogidos por el Consejo de Gobierno de una terna que le propondrá cada una de las cámaras y la Unión de Gobiernos Locales, respectivamente.

Los directivos deberán tener experiencia, al menos, en una de las siguientes actividades: administrativas, industriales, comerciales, exportadoras y, además, ser de reconocida solvencia moral.

El Ministro de Comercio Exterior sólo podrá ser representado por quien lo sustituya temporalmente en su cargo o por el Viceministro de Comercio Exterior.

Salvo el Ministro de Comercio Exterior que ejercerá el cargo exoficio, los miembros de la Junta Directiva permanecerán en sus puestos por un período de dos años, prorrogables una vez.

Los miembros de la Junta Directiva elegirán de su seno, un vicepresidente, un secretario y tres vocales, quienes serán nombrados por un año y podrán ser reelectos sucesivamente. Todos tendrán voz y voto. En caso de empate, el Presidente resolverá con doble voto. El monto de la dieta que devengarán, por sesión, será determinado por la Asamblea de accionistas.

El representante de los accionistas será nombrado por la Asamblea de accionistas de la Corporación.

Artículo 9

Corresponderá a la Junta Directiva:

- a) Señalar políticas de la Corporación.
- b) Recomendar al Poder Ejecutivo el otorgamiento y la revocatoria del Régimen de Zona Franca a las empresas, cuando lo estime procedente.
- c) Establecer los derechos que se cobrarán por el uso del Régimen de Zona Franca, cuyos montos serán fijados en el Reglamento de esta ley.
- ch) Establecer por reglamento el monto, forma y condiciones del depósito de garantía que deben rendir las empresas amparadas al Régimen.
- d) Nombrar al Gerente General de la Corporación.
- e) Nombrar al Auditor Interno de la Corporación por tiempo indefinido, quien no podrá ser destituido sino en virtud de justa causa y con la aprobación de la Contraloría General de la República.
- f) Contratar los servicios de auditoría externa.
- g) Sugerir modificaciones a la legislación y reglamentos vigentes.

Artículo 10

El Gerente General ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la Corporación, con las facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma. Su nombramiento será por cuatro años y podrá ser reelegido por períodos sucesivos.

El Gerente General deberá resolver todos los asuntos propios de la administración de la Corporación y en los casos en que lo considere necesario los elevará a conocimiento de la Junta Directiva. Además, participará en las sesiones de la Junta Directiva, con voz, pero sin voto, salvo en las que se discuta su nombramiento, reelección o destitución, a las que no asistirá.

Capítulo 4. Relaciones con otras instituciones

Artículo 11

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes dará prioridad al mejoramiento de aeropuertos, carreteras, calles y demás vías de comunicación que se encuentren localizadas en las cercanías de las Zonas Francas.

Artículo 12

La vigilancia y control del régimen fiscal de las Zonas Francas corresponderá al Ministerio de Hacienda, conforme a esta ley, a sus reglamentos y demás legislación fiscal.

Artículo 13

Declárase Zona Aduanera Primaria, las áreas donde se ubiquen las empresas acogidas al Régimen de Zonas Francas

Unicamente requerirán el uso del agente aduanero aquellas operaciones que realicen las empresas amparadas al Régimen de Zona Franca en el territorio aduanero nacional.

(Modificado por ley 7830 del 8 de octubre de 1998)

Artículo 14

Los administradores de los parques y las empresas amparadas por el Régimen de Zona Franca proveerán a la Dirección General de Aduanas las facilidades y asistencia requeridas, por ésta, para el cumplimiento de sus responsabilidades, relativas a la fiscalización e inspección de los materiales y mercaderías que entren y salgan de las Zonas Francas.

Igualmente, esos administradores suministrarán al Ministerio de Comercio Exterior y a PROCOMER las facilidades y la asistencia que estas entidades requieran ara ejercer sus funciones relativas a las empresas beneficiarias del Régimen de Zonas Francas."

(Modificado por ley No. 7830 del 8 de octubre de 1998)

Artículo 15

El Ministerio de Salud resolverá, en un plazo de veinte días hábiles, las solicitudes para obtener los permisos sanitarios para la instalación y funcionamiento de las empresas acogidas al Régimen de Zona Franca. Si transcurrido ese plazo, dicho Ministerio no se hubiera pronunciado, la solicitud se considerará aprobada.

Artículo 16

La propiedad de las mermas, los subproductos y desperdicios que desechen las empresas acogidas al Régimen de Zonas Francas, corresponderá prioritariamente a la municipalidad del cantón

donde dichas empresas se ubiquen, siempre que puedan ser tratados a nivel local o nacional y no causen peligro a la población; en estos casos, las municipalidades quedan autorizadas para venderlos de modo directo. Si las mermas, los subproductos y desperdicios no pueden tratarse a nivel local o nacional, será responsabilidad de la empresa darles el tratamiento debido.

Cuando algún productor o vendedor de bienes similares a los desechados por las empresas acogidas al Régimen de Zonas Francas, se sienta lesionado en sus intereses por el manejo de las mermas, los subproductos y desperdicios por parte de la municipalidad, podrá presentar reclamo ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Este Ministerio resolverá el conflicto a favor del reclamante, si determina que él se encuentra en una situación de evidente desventaja. Para resolver estos conflictos, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio dictará, vía reglamento, el procedimiento que debe seguirse.

(Modificado por ley No. 7830 del 8 de octubre de 1998)

Capítulo 5. Los Beneficiarios

Artículo 17

Las empresas que se acojan al Régimen de Zonas Francas se clasificarán de la siguiente manera:

- a) Industrias procesadoras de exportación que producen, procesan o ensamblan para la exportación o reexportación.
- b) Empresas comerciales de exportación, no productoras, que simplemente manipulan, reempacan o redistribuyen mercaderías no tradicionales y productos para la exportación o reexportación.
- c) Industrias y empresas de servicios que los exporten a personas físicas y jurídicas, domiciliadas en el exterior o que los provean a compañías beneficiarias del Régimen de Zonas Francas; siempre y cuando, en este último caso, los servicios estén directamente vinculados con el proceso de producción de las compañías beneficiarias del Régimen de Zonas Francas

Las entidades bancarias, financieras y aseguradoras que se instalen en las zonas francas, no podrán acogerse a los beneficios de este Régimen. Tampoco podrán acogerse al Régimen las personas físicas o jurídicas dedicadas a prestar servicios profesionales.

- ch) Empresas administradoras de parques destinadas a la instalación de empresas bajo el Régimen, de Zonas Francas, siempre que los parques cumplan condiciones mínimas de infraestructura y disponibilidad de servicios, según el reglamento de esta ley. Estas empresas gozarán de las exoneraciones indicadas en el artículo 20, siempre que en el parque industrial que, desarrollen se instalen únicamente empresas acogidas al Régimen de Zonas Francas. De llegar a Instalarse en el parque empresas no acogidas al Régimen de Zonas Francas, la empresa administradora perderá, a partir de ese momento, la exoneración indicada en el inciso g) del artículo 20 y, en cuanto a las demás exoneraciones, se reducirán en la proporción correspondiente como si se tratara de ventas en el territorio aduanero nacional en los términos del artículo 22.

- d) Empresas o entidades que se dediquen a la investigación científica para el mejoramiento del nivel tecnológico de la actividad industrial o agroindustrial y del Comercio Exterior del país.
- e) Empresas que operen astilleros y diques secos o flotantes para la construcción, reparación o mantenimiento de las embarcaciones.

(Modificado por ley No. 7830 del 8 de octubre de 1998)

Artículo 18

Las personas físicas o jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, con actividades en las Zonas Francas, contempladas en esta ley y las que resultaran incluidas en el respectivo acuerdo ejecutivo, podrán:

- a) Introducir, almacenar, exhibir, empacar, desempacar, manufacturar, procesar, producir, montar, ensamblar, refinar, destilar, purificar, mezclar, transformar y manipular toda clase de mercaderías, productos, materias primas, componentes, materia de empaques, envases y otros efectos comerciales destinados a la exportación o reexportación, con excepción de aquellos cuya importación, comercialización o manufactura están prohibidos por las leyes de la República, con la salvedad de lo estipulado en los artículos 22 y 24 de esta ley.
- b) Prestar y contratar servicios a las empresas de las Zonas Francas y a personas físicas o jurídicas domiciliadas en el extranjero, tales como: financiamiento, seguros, embarque, expedición, documentación, abastecimiento, arrendamiento de edificios, mantenimiento y cualesquiera otros que sean convenientes para el desarrollo de la Zona Franca o del régimen en general.

Las empresas que se dediquen a la prestación de servicios bancarios o financieros, deberán registrarse por la normativa del Sistema Bancario Nacional y conexa, así como por la reglamentación que al efecto exista.

- c) En general, ejecutar toda clase de actos necesarios para el establecimiento y operación de las Zonas Francas, siempre y cuando no contravengan las leyes costarricenses.
- ch) Excepcionalmente, solo cuando las características del proceso productivo o la naturaleza del proyecto impidan desarrollarlo dentro de un parque industrial, podrá otorgarse el Régimen de Zonas Francas a empresas procesadoras de exportación, para que se establezcan fuera de un parque industrial, siempre y cuando la inversión inicial en activos fijos sea al menos de dos millones de dólares estadounidenses (US\$2.000.000,00) o su equivalente en moneda nacional, y se cumplan los demás requisitos reglamentarios. Para otorgar el Régimen de Zonas Francas fuera de un parque industrial, el Ministerio de Comercio Exterior deberá contar con el dictamen favorable del Ministerio de Hacienda. Este último deberá pronunciarse dentro de los quince días hábiles siguientes al recibo de la copia de la solicitud respectiva. Transcurrido este plazo sin respuesta, el dictamen del Ministerio de Hacienda se entenderá como favorable.

Asimismo, excepcionalmente, por razones de disponibilidad de mano de obra, transporte o manejo de materia prima por otro motivo, calificados vía reglamento y previa autorización expresa de PROCOMER, las empresas acogidas al Régimen de Zonas Francas ubicadas en un parque industrial,

podrán instalar fuera de él plantas satélite, las que se acogerán a los términos del Acuerdo Ejecutivo que autoriza a la empresa. La planta instalada en el parque deberá realizar una proporción significativa de su producción total en relación con el número de plantas que se instalen fuera del parque y deberá sujetarse a los criterios que PROCOMER emita para el efecto. Igualmente, todas las importaciones de materia prima, maquinaria y otros, así como la exportación del producto final, deberán tramitarse desde la planta establecida en el parque industrial, salvo casos especiales debidamente justificados que autorice PROCOMER.

No podrá otorgarse el Régimen de Zonas Francas en los dos casos mencionados en los párrafos anteriores, si las empresas no cuentan con los controles fiscales ni aduaneros pertinentes.

(Modificado por ley No. 7830 del 8 de octubre de 1998)

Capítulo 6. Obligaciones de las empresas

Artículo 19

Los beneficiarios del Régimen de Zona Franca tendrán las siguientes obligaciones:

- a) Llevar y anotar, en libros y registros específicos autorizados por la Corporación, las operaciones de la empresa, relativas a los bienes que gozan de exenciones de impuestos autorizados por el Ministerio de Hacienda, los cuales estarán sujetos a la inspección de la Corporación y de las autoridades fiscales.
- b) Proporcionar, a las autoridades competentes, los informes que se les soliciten sobre el uso y destino de los artículos que importen al amparo de esta ley, así como permitirles las comprobaciones del caso, cuando las autoridades lo estimen conveniente.
- c) Facilitar gratuitamente o prestar, al organismo oficial que lo solicite, muestras de artículos que producen para ser exhibidos en las exposiciones internacionales en que participe el país.
- ch) Suscribir un Contrato de Operaciones con la Corporación.
- d) Proporcionar los informes con respecto a los niveles de empleo, inversión, valor agregado nacional u otros que se indiquen en el Acuerdo Ejecutivo de otorgamiento del Régimen. El cumplimiento de esta obligación será requisito esencial para gozar de los incentivos contemplados en esta ley.
- e) Utilizar las declaraciones aduaneras, los precintos y demás instrumentos exigidos, legal o reglamentariamente, para la documentación o el control de sus operaciones.
- f) Las empresas administradoras de parques, las empresas a las que se les otorgue el Régimen de Zonas Francas fuera del parque industrial y las plantas satélite, deberán establecer los controles necesarios en relación con el ingreso y la salida de mercancías, contrataciones y demás normas que establezcan las leyes y los reglamentos aplicables."
- g) Cumplir con las demás obligaciones y condiciones que se les impongan a los beneficiarios, en el Acuerdo Ejecutivo de otorgamiento del Régimen de Zona Franca, los reglamentos a esta ley y los Contratos de Operación que firmen con la Corporación.

(Modificado por ley No. 7830 del 8 de octubre de 1998)

Capítulo 7. De los incentivos

Artículo 20

Las empresas acogidas al Régimen de Zonas Francas gozarán de los siguientes incentivos, con las salvedades que a continuación se indican:

- a) Exención del pago de todo tributo y derecho consular sobre la importación de materia prima, productos elaborados o semielaborados, componentes y partes, materiales de empaque y envase, así como de otras mercaderías y bienes requeridos para su operación.

Cuando existan materias primas nacionales, las empresas deberán utilizarlas prioritariamente, si la Dirección General de Industria determina objetivamente que reúnen las mismas condiciones de precio, calidad y oportunidad de entrega requeridas por aquellas. Esta evaluación se hará, si el productor local de la materia prima eleva la solicitud respectiva, ante la Dirección General de Industria y, con posterioridad al otorgamiento del Régimen de Zona Franca, a la empresa en cuestión.

- b) Exención de todo tributo y derecho consular que afecte la importación de maquinaria y equipo, lo mismo que sus accesorios y repuestos, así como la importación de vehículos automotores necesarios para su operación, producción, administración y transporte.

Los vehículos y partes de vehículos que podrán exonerarse serán los siguientes:

- Chasis con cabina de una a dos toneladas de capacidad de carga.
- Camiones o chasis para camiones.
- " Pick - up " de una o dos toneladas de capacidad de carga.
- Vehículos con una capacidad mínima para quince pasajeros.

Estas exenciones estarán condicionadas al pleno acatamiento del Acuerdo Ejecutivo que otorga la exención respectiva.

La maquinaria o equipo que tuviera más de cinco años de haberse importado con franquicia, podrá transferirse, cambiarse de destino o internarse en el territorio aduanero nacional, libremente, sin necesidad de pagar ningún tributo.

Los vehículos, que adquieran las empresas amparadas al Régimen de Zona Franca, podrán transitar por el territorio nacional para lo cual obtendrán las autorizaciones correspondientes de las autoridades respectivas.

Si personas que operan dentro del territorio aduanero nacional, adquieren estos vehículos, deberán pagar los impuestos correspondientes tanto de traspaso como de nacionalización, sin que se exima su pago, de conformidad con el párrafo anterior, por el transcurso del tiempo.

Debe entenderse que, si la persona que adquiere un vehículo de una empresa acogida al Régimen de Zona Franca goza de exenciones para tal adquisición, puede acogerse a ellas.

- c) Exención de todo tributo y derecho consular que pese sobre la importación de los combustibles, aceites y lubricantes requeridos para la operación de estas empresas. Tal exención se otorgará únicamente cuando estos bienes no se produzcan dentro del país en la calidad, cantidad y oportunidad necesarias. Para importarlos, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio deberá otorgar la autorización previa y pronunciarse, mediante resolución razonada, en un plazo máximo de quince días hábiles.
- ch) Exención de todo tributo asociado con la exportación o reexportación de productos. Esta exención se otorgará para la reexportación de la maquinaria de producción y equipos de las Zonas, ingresados al amparo de esta ley.
- d) Exención, por un período de diez años a partir de la iniciación de las operaciones, del pago de impuestos sobre el capital y el activo neto, del pago del impuesto territorial y del impuesto de traspaso de bienes inmuebles.
- e) Exención del impuesto de ventas y consumo sobre las compras de bienes y servicios.
- f) Exención de todo tributo que pese sobre las remesas al extranjero.
- g) Exención de todos los tributos a las utilidades, así como de cualquier otro, cuya base imponible se determine en relación con las ganancias brutas o netas, los dividendos abonados á los accionistas o ingresos o ventas, de conformidad con las siguientes diferenciaciones:

1º Para las empresas ubicadas en zonas de "mayor desarrollo relativo", la exención será de un ciento por ciento (100%) hasta por un período de ocho años y de un cincuenta por ciento (50%) en los siguientes cuatro años.

2º Para las empresas ubicadas en zonas de "menor desarrollo relativo", la exención será de un ciento por ciento (100%) hasta por un período de doce años y de un cincuenta por ciento (50%) en los siguientes seis años.

Los plazos se contarán a partir de la fecha de inicio de las operaciones productivas de la empresa beneficiaria, siempre que dicho plazo no exceda de dos años a partir de la publicación del respectivo acuerdo ejecutivo.

Las exenciones contempladas en este inciso no se aplicarán cuando los beneficiarios potenciales puedan descontar, en su país de origen, los impuestos exonerados en Costa Rica.

Para definir "zona de mayor o de menor desarrollo relativo" la Corporación deberá acatar lo dispuesto por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica para tal efecto.

- h) Exención de todo tributo y patente municipales por un período de diez años. Las empresas a que se refiere este artículo deberán cancelar los servicios municipales de que hagan uso. En este caso, la municipalidad respectiva podrá cobrar hasta el doble de las tarifas establecidas por ley para esos servicios. No obstante lo anterior, las empresas establecidas en las Zonas Francas quedan autorizadas para contratar esos servicios con cualquier persona física o jurídica.

- i) Exención de todo tributo sobre la importación y exportación de muestras comerciales o industriales, previa autorización de la Corporación.
- j) Para el mejor desarrollo de sus operaciones, las empresas acogidas al Régimen de Zona Franca podrán realizar libremente toda clase de actos y contratos en moneda extranjera - en cuyo caso, los importes correspondientes deberán pagarse necesariamente en ese tipo de moneda - referentes a sus transacciones internacionales o a aquellas efectuadas con las demás empresas establecidas en el Régimen de Zona Franca.

Las empresas acogidas al Régimen de Zona Franca gozarán de la libre tenencia y manejo de divisas que adquieran según lo dispuesto en el párrafo anterior o se deriven de su actividad ordinaria y se les exceptuará de la aplicación del reglamento cambiario. El Banco Central deberá establecer la reglamentación de este beneficio y de las actividades que de él se deriven. Este reglamento será requisito indispensable para el goce de tal beneficio.

Las necesidades de moneda nacional que tengan estas empresas deberán ser tramitadas únicamente por medio de los bancos comerciales autorizados, para lo cual las monedas extranjeras de que dispongan para tal efecto serán convertidas en moneda nacional.

- k) Las empresas que se establezcan en las zonas francas ubicadas en las zonas de "menor desarrollo relativo", según la calificación del Ministerio de Comercio Exterior, previo informe del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, tendrán derecho a recibir una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) de la suma pagada por salarios durante el año inmediato anterior, una vez deducido el monto pagado a la Caja Costarricense de Seguro Social sobre esos salarios, y conforme a la certificación de la planilla reportada a la Caja. Estas empresas podrán solicitar acogerse al beneficio de esta ley, dentro de los cinco años posteriores a la entrada en vigencia de lo dispuesto en este inciso. El beneficio se otorgará por cinco años y decrecerá dos puntos porcentuales hasta su liquidación en el último año. Esta bonificación se emitirá contra el presupuesto nacional en las condiciones que determine el reglamento de esta ley.

El Poder Ejecutivo, para dar contenido a este beneficio, incluirá una partida presupuestaria anual por un monto de cuarenta millones de colones (¢ 40.000.000) para el primer año de la ejecución; esa suma se ajustará, cada año, por el incremento porcentual del monto total de las planillas de las empresas calificadas para recibir esta bonificación en el año inmediato anterior.

Si se agota el monto anual de esa partida, a las solicitudes que no hayan sido cubiertas se les podrá conceder el beneficio en el período siguiente.

La forma de emisión y las condiciones referentes a la bonificación aquí creada, se estipularán en el Reglamento de esta Ley.

- l) Las empresas procesadoras de exportación beneficiarias del Régimen de Zonas Francas que al cumplir cuatro años de operar bajo dicho Régimen reinviertan en el país, podrán recibir una exención adicional del pago del impuesto sobre la renta, de conformidad con los parámetros siguientes:

1º Si la reinversión excede del veinticinco por ciento (25%) de la inversión original, la exención será por un año adicional.

2° Si la reinversión excede del cincuenta por ciento (50%) de la inversión original, será por dos años adicionales.

3° Si la reinversión excede del setenta y cinco por ciento (75%) de la inversión original, será por tres años adicionales.

4° Si la reinversión excede del ciento por ciento (100%) de la inversión original, será por cuatro años adicionales.

Las exenciones adicionales serán del setenta y cinco por ciento (75%) del impuesto sobre la renta por pagar. Las exenciones adicionales aquí otorgadas regirán después de cumplido el octavo año de operaciones, sin perjuicio de las exenciones correspondientes al período final de cuatro años otorgado originalmente, el cual regirá una vez que venza el período de la exención adicional aquí regulado. Cuando se trate de empresas instaladas en zonas de "menor desarrollo relativo", la exención adicional otorgada regirá una vez cumplido el decimosegundo año de operaciones, sin perjuicio de las exenciones correspondientes al período final de seis años otorgado originalmente, el cual regirá cuando venza el período de esta exención adicional. La reinversión que da lugar a la exención adicional deberá completarse luego de cumplido el cuarto año y antes de iniciarse el octavo año de operaciones al amparo del Régimen de Zonas Francas.

La exención adicional solo podrá otorgarse a empresas cuya inversión original inicial en activos fijos haya sido al menos de dos millones de dólares estadounidenses (US\$2.000.000,00).

Las empresas indicadas en el inciso b) del artículo 17 no gozarán de las exoneraciones establecidas en los incisos f) y g) de este artículo. Cuando una empresa de las indicadas en otros incisos del artículo 17, distintos del inciso b), realice actividades de comercialización en la misma proporción en que las efectúe se le reducirá la exoneración del impuesto sobre la renta, según lo establezca el reglamento de esta ley. La realización de actividades de comercialización por parte de las empresas no comercializadoras acogidas al Régimen, únicamente podrá ser complementaria, no principal y, requerirá la autorización previa de PROCOMER.

(Modificado por ley No. 7830 del 8 de octubre de 1998)
(Reformado por ley No. 7467 de 20 de diciembre de 1995)

Artículo 20 bis.

No se otorgará el Régimen de Zonas Francas a personas físicas ni jurídicas para operar ni desarrollar una empresa o proyecto de inversión ya beneficiado de los incentivos del Régimen, aunque haya sido al amparo de una persona física o jurídica distinta, salvo que se demuestre que es un proyecto nuevo o, en casos excepcionales, cuando la naturaleza y magnitud de las inversiones adicionales lo justifiquen; todo a juicio del Ministerio de Comercio Exterior y de conformidad con lo dispuesto, en el reglamento de esta ley.

(Adicionado por ley No. 7830 del 8 de octubre de 1998)

Artículo 21

Además de los incentivos fiscales, antes indicados, las empresas establecidas en las Zonas Francas podrán solicitar a la empresa administradora de cada una de ellas o a la Corporación, los siguientes beneficios:

- a) Asistencia para el entrenamiento, coordinada por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), para empleados y aspirantes a empleados de las empresas establecidas en las

zonas francas. Las empresas ubicadas en zonas francas, en regiones de 'menor desarrollo relativo', podrán acogerse al Programa nacional para la generación de empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para capacitar y brindar trabajo a las personas desempleadas, las subempleadas y las de bajos ingresos de su zona, según se defina en el reglamento que elaborarán, conjuntamente, los Ministerios de Comercio Exterior y de Trabajo y Seguridad Social.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y las empresas suscribieran un convenio que deberá ajustarse a las siguientes disposiciones:

1.- La capacitación, el entrenamiento o el reentrenamiento tendrá un plazo de tres meses, prorrogable por un período igual, cuando la complejidad o la intensidad del proceso lo ameriten, a juicio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, previo informe del Ministerio de Comercio Exterior.

2.- La capacitación estará a cargo de la empresa que se acoja a este beneficio, la cual pondrá a disposición del aprendiz las instalaciones, la maquinaria y el equipo necesarios para capacitarlo. Los cursos serán supervisados por el Instituto Nacional de Aprendizaje, de conformidad con los lineamientos que se establezcan en el convenio respectivo.

3.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social otorgará al aprendiz un subsidio mensual, con cargo al fondo del Programa, durante todo el período de capacitación. El monto de ese subsidio será equivalente al salario mínimo mensual. Por tratarse de un incentivo a la formación técnica, el pago no generará ninguna relación laboral ni otros efectos legales.

4.- La empresa estará obligada a contratar al aprendiz, una vez capacitado o entrenado, siempre y cuando resulte idóneo, en los términos establecidos en el convenio respectivo."

- b) Asistencia en la selección del personal que han de emplear en estas empresas. Se coordinarán las actividades de selección con el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, gremios laborales y otras instituciones locales y estatales.
- c) Asistencia y asesoramiento en sus requerimientos y necesidades ante las instituciones gubernamentales y privadas.
- ch) Asistencia en cuanto a vivienda y necesidades de carácter educacional, para sus empleados y familias, mediante coordinación con las instituciones públicas respectivas.

Artículo 22

Las empresas acogidas al Régimen de Zonas Francas, salvo las indicadas en el inciso b) del artículo 17, podrán introducir en el territorio aduanero nacional hasta un veinticinco por ciento (25%) de sus ventas totales, previo cumplimiento de los requisitos señalados en el reglamento de esta ley. En el caso de las empresas indicadas en el inciso c) del artículo 17 el porcentaje máximo será del cincuenta por ciento (50%).

A los bienes y servicios que se introduzcan en el mercado nacional les serán aplicables los tributos y procedimientos aduaneros propios de cualquier importación similar proveniente del exterior. Además, el porcentaje de exoneración de los tributos sobre importación de maquinaria, equipo y materias primas y los tributos sobre utilidades se reducirá en la misma proporción que represente el valor de los bienes y servicios introducidos en el territorio aduanero nacional, en

relación con el valor total de las ventas y los servicios de la empresa, conforme al reglamento de esta ley.

(Modificado por ley No. 7830 del 8 de octubre de 1998)

Artículo 23

Las empresas nacionales que provean a las empresas establecidas en las Zonas Francas, servicios, materias primas nacionales, productos, partes o componentes, parcial o totalmente elaborados en el país, están exentas del pago de impuestos de ventas y de consumo en estas transacciones.

Asimismo, sus ventas a las empresas en el Régimen de Zona Franca se considerarán como exportaciones, por lo que si tuvieran derecho al Certificado de Abono Tributario u otro incentivo a la exportación, podrán hacerlo efectivo en relación con el monto vendido.

Artículo 24

Todos los materiales, bienes, productos, vehículos, equipos y maquinaria, importados o producidos en las Zonas Francas, de acuerdo con las previsiones de esta ley, pueden ser vendidos, intercambiados y transferidos entre las empresas establecidas bajo este Régimen, mediante autorización de la Corporación. Las empresas establecidas en el Régimen de Zona Franca, bajo la clasificación del inciso a) del artículo 17, podrán subcontratar en el territorio aduanero nacional o, con otras empresas establecidas bajo el Régimen, parte de su producción o de su proceso de producción, en estricta concordancia con lo establecido en el reglamento que regule esta materia.

Asimismo, las empresas establecidas bajo el Régimen de Zona Franca podrán introducir en el territorio aduanero nacional, maquinaria, vehículos o equipo provenientes de las Zonas Francas, cuando esto se haga con el objeto de reparar y modificar dichos bienes.

A este efecto, la Dirección General de Aduanas otorgará el permiso respectivo, previa constitución de una prenda aduanera para garantizar el reingreso de los citados bienes a la Zona Franca o, en su defecto, al pago de los tributos correspondientes.

El reglamento de esta ley establecerá los requisitos, las condiciones y normas de control referente a la venta de bienes y servicios entre las empresas beneficiarias del Régimen de Zonas Francas y las empresas beneficiarias de otros regímenes especiales de importación y exportación.

(Modificado por ley No. 7830 del 8 de octubre de 1998)

Capítulo 8. Procedimiento para otorgar el Régimen

Artículo 25

La persona física o jurídica interesada en obtener el Régimen de Zona Franca, bajo la clasificación de alguna de las categorías que señala el artículo 17 de esta ley, deberá presentar la solicitud respectiva a la Corporación, debidamente autenticada por un notario, acompañada de información detallada sobre la contaminación producida por el proceso y sus desechos, así como de los documentos que solicite la Junta Directiva de la Corporación, todo de acuerdo con los instructivos que al efecto proporcionará la Corporación.

Artículo 26

La Corporación analizará la solicitud y la información suministrada, siempre y cuando estuviere completa y enviará un dictamen a la Junta Directiva, la que deberá resolver, a más tardar, en la sesión ordinaria subsiguiente a la recepción del dictamen o en una sesión extraordinaria, si así lo acuerdan cuatro de sus miembros.

En caso de que la información esté incompleta, la Corporación deberá comunicar al interesado, las observaciones que considere oportunas en un plazo de ocho días hábiles a partir de la presentación de la solicitud. Satisfecho el requerimiento, se continuará con el procedimiento establecido.

La Corporación solicitará, cuando lo estime conveniente, el dictamen especializado a las diferentes instituciones del Estado, para un mejor análisis de la solicitud de las empresas.

Artículo 27

Si la recomendación es acogida, el Poder Ejecutivo la aprobará mediante un acuerdo que contendrá los asuntos que el Reglamento de esta ley determine.

Artículo 28

Una vez publicado el acuerdo ejecutivo, la empresa beneficiaria deberá suscribir con la Corporación un contrato de operaciones, cumplido lo cual, entrarán en vigor los beneficios del régimen.

Si, pasados tres meses desde la publicación del acuerdo ejecutivo, el contrato de operaciones no hubiere sido suscrito por la empresa beneficiaria, la corporación le formulará una prevención final y le otorgará un plazo perentorio de cinco días hábiles. Vencido este plazo, si la empresa no ha suscrito el contrato, caducará la concesión del régimen de zona franca.

(Reformado por ley 7535 de 10/8/95)

Artículo 29

Cuando la Junta Directiva de la Corporación no recomiende una solicitud al Poder Ejecutivo, se podrá interponer recurso de reconsideración dentro de los tres días hábiles siguientes a la respectiva notificación al interesado o a su representante. Tal recurso deberá ser resuelto dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación.

De no prosperar el recurso de reconsideración, se considerará agotada la vía administrativa.

Capítulo 9. Sanciones y revocatoria del Régimen

Artículo 30

Si de las infracciones cometidas, señaladas en el artículo 32 de la presente ley, resultaren hechos punibles, el Ministro de Comercio Exterior comunicará lo conducente al Ministerio Público para que promueva y ejercite las acciones penales pertinentes.

Artículo 31

(Derogado por ley No. 7830 del 8 de octubre de 1998)

Artículo 32

El Ministerio de Comercio Exterior podrá imponer una multa hasta de trescientas veces el salario base, de acuerdo con la definición del artículo 2 de la Ley No. 7337, de 5 de mayo de 1993, podrá suprimir, por un plazo desde un mes hasta un año, uno o varios incentivos de los indicados en el artículo 20 de esta ley, o podrá revocar el Régimen de Zonas Francas sin responsabilidad para el Estado, a las empresas beneficiarias que incurran en alguna de las siguientes infracciones:

- a) Haber suministrado datos falsos en su solicitud para acogerse al Régimen.
- b) Iniciar operaciones fuera del plazo previsto en el Acuerdo Ejecutivo.
- c) Incumplir los nuevos niveles de inversión, empleo, valor agregado nacional u otros contemplados en el respectivo Acuerdo Ejecutivo.
- d) Rendir, fuera de los plazos reglamentarios, el informe anual de actividades cualesquiera otros informes que soliciten PROCOMER el Ministerio de Comercio Exterior. La no presentación del informe anual dentro del plazo establecido para el efecto implicará la suspensión automática, de todos los beneficios del Régimen, hasta que el informe se presente completo.

Realizar ventas en el mercado local sin cumplir los requisitos indicados en el artículo 22 de esta ley.
- f) Pagar a destiempo, el derecho por el uso del Régimen.
- g) No realizar el depósito de garantía previsto en esta ley o no renovarlo antes de su vencimiento.
- h) Cesar operaciones o abandonar sus instalaciones sin haber obtenido autorización previa, en la forma que indique el reglamento de esta ley.
- i) Haber sido sancionados la empresa, sus accionistas, directores, empleados o personeros, en relación con actividades de la empresa, mediante resolución firme en vía administrativa, por haber incurrido en infracciones administrativas, aduaneras, tributarias o tributaria adunera. En este caso, no procederá la imposición de multas, pero sí la revocatoria del Régimen, cuando se trate de infracciones graves o reiteradas a juicio del Ministerio de Comercio Exterior.
- j) Haber sido condenados los accionistas, directores, empleados o personeros de la empresa beneficiaria, en relación con las actividades de la, empresa, mediante resolución firme en la vía judicial, por haber incurrido en delitos aduaneros o tributarios. En este caso no procederá la imposición de multas, pero sí la revocatoria del Régimen, cuando se trate de infracciones graves o reiteradas a juicio del Ministerio de Comercio Exterior.
- k) Haber cesado la empresa sus pagos o haber sido declarada en quiebra, concurso, convenio preventivo o administración por intervención judicial.
- l) Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones que les correspondan según la ley, los reglamentos y los contratos de operaciones.

- m) Manejar las mermas, los subproductos y desperdicios sin cumplir lo establecido en el artículo 16 de esta ley y su reglamento.
- n) Usar o destinar, en forma distinta de la especificada en el Acuerdo Ejecutivo correspondiente, la maquinaria, el equipo, los vehículos, las materias primas, los productos semielaborados y cualesquiera otros artículos adquiridos por las empresas al amparo de los incentivos otorgados.
- ñ) Incumplir las empresas desarrolladoras de parques las normas de seguridad y control establecidas en el reglamento de esta ley.

Para determinar la sanción aplicable, se tomará en cuenta la gravedad de la falta, el grado de culpa o la existencia de dolo por parte de los empleados o personeros de la empresa, la reincidencia y, cuando se trate de multas, el volumen de ingresos de la empresa.

El Ministerio de Comercio Exterior podrá ordenar, por un plazo máximo de seis meses, la suspensión precautoria de los incentivos y beneficios contemplados en esta ley, durante la tramitación de procedimientos administrativos o investigaciones en sede judicial que cuestionen la legalidad de la actividad de una empresa beneficiaria del Régimen de Zonas Francas, de empresas relacionadas o de sus accionistas, directores, gerentes o personeros. Ni la suspensión precautoria ni su levantamiento prejuzgarán sobre la resolución final del respectivo procedimiento administrativo o proceso judicial.

El Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Hacienda determinarán los mecanismos de coordinación necesarios para la más correcta y eficiente aplicación de los controles y las sanciones a las empresas beneficiarias del Régimen de Zonas Francas.

El producto de las multas fijadas en este artículo se distribuirá de la siguiente manera: un cincuenta por ciento (50%) a PROCOMER y un cincuenta por ciento (<50%) a la municipalidad del cantón donde se ubique la empresa beneficiaria.

Contra la imposición de las sanciones previstas en este artículo cabrá recurso de reposición dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la resolución correspondiente, con lo cual se dará por agotada la vía administrativa.

La resolución que imponga una multa constituirá título ejecutivo contra el infractor y PROCOMER estará legitimada para cobrarla.

(Modificado por ley No. 7830 del 8 de octubre de 1998)

Artículo 33

El Poder Ejecutivo, al tener conocimiento de alguna de las infracciones a que se refiere el artículo 32, levantará la información correspondiente y luego dará audiencia por tres días hábiles a la empresa infractora, a fin de que ofrezca la prueba de descargo, que se evacuará dentro de los ocho días hábiles siguientes. El Ministro resolverá dentro de los quince días hábiles siguientes a la recepción de la prueba.

El acuerdo que imponga la revocatoria se notificará al infractor, quien podrá interponer, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación, un recurso de reconsideración ante el Ministerio, quien resolverá dentro de los ocho días hábiles después de presentado. Resuelto el recurso, se tendrá por agotada la vía administrativa y deberá procederse a la publicación del Acuerdo Ejecutivo que revoca la concesión.

Capítulo 10. Disposiciones finales

Artículo 34

Los reglamentos a que se refiere la presente ley deberán ser promulgados por las instituciones respectivas en un plazo no mayor de noventa días, contados a partir de la publicación de ella.

Artículo 35

Se exceptúa a la Corporación del alcance de las leyes No. 6821, Ley de Creación de la Autoridad Presupuestaria y sus reformas, del 19 de octubre de 1982 y a la Ley No. 6955, Ley para el equilibrio financiero y sus reformas, del 24 de febrero de 1984, así como del artículo 29 de la ley No. 5255, Ley de planificación nacional y sus reformas, del 2 de mayo de 1974 y, en consecuencia, de los decretos, resoluciones, acuerdos o directrices que se hayan fundamentado en tales leyes.

Artículo 36

Se autoriza el funcionamiento de diques secos o flotantes dentro del recinto portuario de Caldera, bajo el Régimen de Zona Franca establecido en esta ley. El Poder Ejecutivo pondrá en funcionamiento tales diques directamente, por medio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes o del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico o mediante concesión a una empresa privada, con la autorización de la Contraloría General de la República.

Artículo 37

Las empresas administradoras de parques destinarán un local para que los trabajadores realicen reuniones y asambleas; asimismo, lo mantendrán en buenas condiciones. Para asistir a tales actividades, se permitirá el libre acceso de los representantes de los trabajadores al parque.

(Adicionado por ley No. 7830 del 8 de octubre de 1998)

Artículo 38

Deróganse las Leyes No. 6695, Ley de Zonas Procesadoras de Exportación y Parques Industriales, del 10 de diciembre de 1981; No. 6951, Reforma del artículo 18 de la Ley Marítimo - Terrestre, del 14 de febrero de 1984; No. 6043, Ley sobre la Zona Marítimo - Terrestre del 2 de marzo de 1977; los artículos 2, 10 y 12 de la Ley No. 6695, de Zonas Procesadoras de Exportación y Parques Industriales, del 10 de diciembre de 1981 y el artículo número 10 de la Ley No. 6999 del 28 de agosto de 1985, (Prórroga de una serie de disposiciones transitorias para transferir recursos de las instituciones y empresas públicas al Gobierno de la República y cambio temporal del destino de algunos impuestos).

Artículo 39

Rige a partir de su publicación.

Disposiciones Transitorias

TRANSITORIO I

Los actuales miembros de la Junta Directiva permanecerán en sus puestos por seis meses a partir de la fecha de la publicación de esta ley. Una vez transcurrido este término, deberá entrar en funciones la nueva Junta Directiva.

TRANSITORIO II

La Corporación queda autorizada para administrar las Zonas Francas de Moín, en Limón, y Santa Rosa, en Puntarenas, mientras no se logre otorgar en concesión la administración de éstas.

TRANSITORIO III

Las empresas que al momento de la publicación de esta ley se encuentren acogidas al Régimen de Zona Franca, podrán solicitar a la Corporación, mediante la presentación de los documentos pertinentes, que sus beneficios e incentivos se adecuen a lo estipulado en esta ley. Para tales efectos, deberán cumplir con las nuevas obligaciones establecidas en ella, en un plazo que no podrá exceder sesenta días hábiles a partir de la vigencia de esta ley y que deberá definirse en cada caso en el nuevo Acuerdo Ejecutivo.

TRANSITORIO IV

Se autoriza al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para atender, con cargo al fondo del Programa nacional para la generación de empleo, las obligaciones contraídas, antes de la vigencia de esta Ley, con empresas localizadas en zonas de 'menor desarrollo relativo' y que se deriven de la aplicación de ese Programa.

(Agregado por ley No. 7467 de 20 de diciembre de 1994)

Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Asamblea Legislativa.- San José, a los veintidós días del mes de noviembre de mil novecientos noventa.-

Juan José Trejos Fonseca, Presidente.- Ovidio Pacheco Salazar, Primer Secretario.- Víctor E. Rojas Hidalgo, Segundo Secretario.-

Presidencia de la República. - San José, a los veintitrés días del mes de noviembre de mil novecientos noventa.

Ejecútese y Publíquese

R. A. Calderón F.- Los Ministros de la Presidencia, Rodolfo Méndez Mata, de Hacienda, Thelmo Vargas Madrigal, de Economía, Industria y Comercio, Gonzalo Fajardo Salas y de Comercio Exterior, Roberto Rojas.

Publicado en La Gaceta No. 238 del Viernes 14 de diciembre de 1990.

**PODER EJECUTIVO
DECRETOS**

N° 29606-H-COMEX

**EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y LOS MINISTROS DE COMERCIO EXTERIOR Y DE HACIENDA**

Con fundamento en el artículo 140, incisos 3) y 18) de la Constitución Política; los artículos 27, párrafo 1 y 28, párrafo 2, inciso b) de la Ley General de la Administración Pública, N° 6227 del 2 de mayo de 1978; los artículos 2°, incisos g), h) e i) y 8°, inciso b) de la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y Creación de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, N° 7638 del 30 de octubre de 1996, y la Ley de Régimen de Zonas Francas, N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas.

Considerando:

1°—Que es un objetivo fundamental del Estado el desarrollo socioeconómico del país mediante la atracción de la inversión extranjera, la inversión nacional y la promoción de las exportaciones.

2°—Que el régimen de zonas francas constituye un instrumento idóneo para elevar la calidad de vida de los costarricenses, especialmente generando fuentes de trabajo y superación humana, con énfasis en las zonas deprimidas del país.

3°—Que el desarrollo del comercio internacional de Costa Rica, requiere como condición esencial la existencia de factores propicios para el establecimiento de empresas que realicen una gama amplia de operaciones que generen riqueza, conocimiento tecnológico y aumenten la competitividad internacional del país.

4°—Que se estima que dichas actividades repercutirán en un significativo mejoramiento socioeconómico de las poblaciones aledañas a las zonas francas.

5°—Que la Ley de Régimen de Zonas Francas y sus reformas establece las condiciones del otorgamiento y funcionamiento del régimen de zonas francas y los derechos y obligaciones de los beneficiarios de dicho régimen.

6°—Que la reglamentación del otorgamiento y funcionamiento del régimen de zonas francas debe buscar un adecuado equilibrio entre el objetivo de promover las inversiones y las exportaciones por medio de este régimen y el necesario control del correcto uso de los beneficios que el mismo otorga, todo dentro de los límites y de conformidad con las condiciones establecidas en la Ley de Régimen de Zonas Francas y demás leyes aplicables. **Por tanto,**

DECRETAN:

El siguiente,

Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1°—Este reglamento establece las normas y procedimientos relativos al otorgamiento del régimen de zonas francas y a las operaciones que pueden realizar los beneficiarios de dicho régimen, de conformidad con la Ley de Régimen de Zona Francas, N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas.

Artículo 2°—La aplicación e interpretación de este reglamento debe buscar un equilibrio entre la agilidad y eficiencia en el funcionamiento del régimen de zonas francas y la adecuada fiscalización y control del correcto uso de los beneficios fiscales otorgados.

Artículo 3°—Para efectos de este reglamento, se adoptan las siguientes definiciones:

“Acuerdo ejecutivo”. El acuerdo del Poder Ejecutivo mediante el cual se otorga el régimen de zonas francas a una persona física o jurídica, suscrito por el Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior.

“Administrador”. La empresa administradora de una zona franca.

“Aduana de jurisdicción”. La aduana a la que le corresponde por ubicación geográfica y competencia territorial el control aduanero en el lugar donde se ubican las instalaciones centrales del beneficiario del régimen y que ejerce control aduanero sobre las operaciones aduaneras en que interviene.

“Beneficiario”. La persona física o jurídica acogida al régimen de zonas francas.

“Bonificación”. La bonificación para personas físicas o jurídicas acogidas al régimen de zonas francas y ubicadas en zonas de menor desarrollo relativo, de acuerdo con el inciso k) del artículo 20 de la ley 7210 y sus reformas.

“Comex”. El Ministerio de Comercio Exterior.

“Contrato de operaciones”. El contrato que deben suscribir los beneficiarios del régimen de zonas francas con Procomer, en el cual se detallan sus derechos y obligaciones al amparo del régimen, con base en el acuerdo ejecutivo de otorgamiento del régimen.

“Declaración Aduanera de Zona Franca”. El documento público que respaldará todo movimiento de ingreso y salida de materias y mercancías de las zonas francas.

“Desperdicios”. Mercancías remanentes del proceso productivo.

“Gerencia General”. La Gerencia General de Procomer.

“IMAS”. Instituto Mixto de Ayuda Social.

“Junta Directiva”. La Junta Directiva de Procomer.

“Ley General de Aduanas”. La Ley General de Aduanas, N° 7557 del 8 de noviembre de 1995.

“Ley 7210 y sus reformas”. La Ley de Régimen de Zonas Francas, N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas.

“Materias y mercancías”. Se entenderán como materias y mercancías susceptibles de ser incorporadas al Régimen de Zonas Francas y para la aplicación del presente reglamento, las siguientes:

- a) Las materias primas, formas primarias, incluso mezcladas (preparadas o semielaboradas, por ejemplo), materias asociadas (maquinaria mecánica, eléctrica, de medida, de control, verificación o de investigación, por ejemplo)
- b) Las mercancías destinadas a actividades administrativas (escritorios, computadoras, suministros de oficina, por ejemplo), propias del área de operación o producción del beneficiario.
- c) Las necesarias para la preparación de alimentos, el mobiliario necesario para servirlos, los equipos, enseres y mobiliarios para capacitación, y para cuidados médicos o rehabilitación, destinados exclusivamente para los empleados directamente vinculados al proceso de operación, producción administración y transporte de las empresas.
- d) Las manufacturadas o productos elaborados requeridos y las muestras comerciales, industriales o científicas.

En todos los casos, deberá tratarse de mercancías directamente relacionadas con la actividad incentivada.

“Maquinaria y equipo”. Aquellos bienes utilizados para elaborar o transformar otros productos o servicios.

“Mermas”. La proporción en que disminuyen los insumos respecto de su cantidad inicial, después de ser sometidos o utilizados en un proceso productivo.

“Operaciones”. Actividades desarrolladas por empresas acogidas al régimen de zonas francas, incluyendo aquellas generadoras de empleo, de construcción de obras de infraestructura y naves industriales u otras relacionadas con actividades productivas.

“Órgano Administrador del Régimen”. El órgano administrador del régimen de zonas francas, que es la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.

“Parque Industrial de Zona Franca”. Cualquier Parque que sea administrado por una empresa que goce del Régimen de Zonas Francas en esa categoría.

“Plantas satélites”. Las que se establezcan fuera del parque donde se ubica la planta principal de conformidad con lo dispuesto en el inciso ch) del artículo 18 de la ley 7210 y sus reformas.

“Procomer”. La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.

“Régimen”. El régimen de zonas francas, que es el conjunto de incentivos y beneficios que otorga el Estado a aquellos que cumplan con los requisitos y obligaciones establecidos en la ley 7210 y sus reformas, este reglamento y demás normas aplicables.

“Subproductos”. Los bienes que se obtienen en forma accesoria al proceso productivo principal.

“Zona Franca”. El área sin población residente autorizada por el Poder Ejecutivo para que se establezcan en ella empresas acogidas al régimen de zonas francas.

CAPÍTULO II

Requisitos de inversión

Artículo 4°—El régimen de zonas francas se otorga únicamente a empresas que realicen inversiones nuevas en el país, de conformidad con los parámetros siguientes establecidos en la ley 7210 y sus reformas:

- a) Una inversión nueva inicial en activos fijos de al menos ciento cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$150,000) o su equivalente en moneda nacional, para empresas instaladas en un parque industrial de zona franca.
- b) Una inversión nueva inicial en activos fijos de al menos dos millones de dólares de los Estados Unidos de América (US\$2,000,000) o su equivalente en moneda nacional, para empresas instaladas fuera de un parque industrial de zona franca.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando los activos hayan sido adquiridos en moneda nacional, el monto de la inversión nueva inicial se determinará con base en el tipo de cambio para la venta del dólar vigente el día de la adquisición del activo correspondiente.

Artículo 5°—Se consideran inversiones nuevas las relativas a activos fijos que reúnan las condiciones siguientes:

- a) Que los activos sean propiedad del solicitante del régimen de zonas francas y sean adquiridos por el solicitante a partir de la fecha de presentación de la solicitud para obtener el régimen de zonas francas.
- b) En el caso de activos fijos mobiliarios, que se trate de activos nuevos o usados provenientes del exterior, o bien de activos nuevos adquiridos en el país.

Artículo 6°—Se considera inversión inicial la que se complete en el plazo que debe constar en el respectivo acuerdo ejecutivo de otorgamiento del régimen, plazo que se fijará según la naturaleza y las características de cada proyecto y no podrá exceder en ningún caso de dos años a partir de la publicación del acuerdo ejecutivo.

La obligación de cumplimiento del monto mínimo de inversión nueva inicial en activos fijos es independiente de la obligación de cumplimiento del monto total de inversión al que se comprometa la empresa beneficiaria y que conste en el acuerdo ejecutivo de otorgamiento del régimen, aunque el monto mínimo de inversión nueva inicial se considerará parte del monto total de inversión al que se comprometa la empresa.

Artículo 7°—Se entiende por activos fijos los bienes inmuebles, así como los bienes muebles sujetos a depreciación, utilizados en la operación del negocio, y cuya fecha y precio de adquisición

consten debidamente en los libros contables de la empresa solicitante del régimen de zonas francas. Para efectos de determinar el monto inicial de inversión nueva, los activos fijos se considerarán según su valor histórico (costo de adquisición), sin perjuicio de que para efectos contables se apliquen las normas y reglamentos que regulan los procedimientos tributarios.

Para efectos del control del monto de inversión, que se realiza con base en el Informe Anual de Operaciones, Procomer utilizará el tipo de cambio de la fecha de otorgamiento del régimen, según Acuerdo Ejecutivo. En caso de que ese nivel de inversión haya sido modificado, el tipo de cambio a utilizar será el correspondiente a la fecha de modificación, según Acuerdo Ejecutivo.

Artículo 8º—Las pequeñas empresas procesadoras para la exportación, entendidas como aquellas que empleen a un máximo de veinte trabajadores, pueden asociarse, según lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 1º de la ley 7210 y sus reformas, para efectos de cumplir con el monto mínimo de inversión nueva inicial en activos fijos. En lo demás son de aplicación a estos casos las normas contenidas en este capítulo.

La posibilidad a que se refiere este artículo procede únicamente respecto a empresas que vayan a instalarse en un mismo parque industrial de zona franca.

CAPITULO III

Requisitos, evaluación y trámite de las solicitudes para obtener el régimen de zonas francas

Artículo 9º—Las empresas interesadas en obtener el régimen de zonas francas deben presentar una solicitud ante Procomer, en el formulario oficial que Procomer debe elaborar y tener a disposición de los interesados. La solicitud debe contener:

- a) Datos del solicitante.
- b) Certificación de inscripción y personería, en el caso de personas jurídicas.
- c) Descripción detallada de las actividades que se propone realizar al amparo del régimen, así como un detalle de los productos y subproductos que producirá, un detalle de las materias primas y mercancías que serán incorporadas en el proceso productivo y la proyección de las mermas y desperdicios.
- d) Descripción detallada de la ubicación y características del proyecto.
- e) Información sobre antecedentes y experiencia si la hubiere, de la compañía en actividades equivalentes o similares a las que se propone realizar al amparo del régimen.
- f) Información detallada sobre la contaminación que producirá el proceso productivo y sus desechos, o bien, copia del formulario presentado ante la instancia respectiva del Ministerio de Ambiente y Energía en relación con el estudio de impacto ambiental, cuando corresponda según las leyes y reglamentos aplicables.
- g) Descripción del monto de la inversión nueva inicial en activos fijos, así como la inversión total prevista y el nivel de empleo.

- h) Proyección del Valor Agregado Nacional que se comprometerá a mantener la empresa. Este Cálculo se hará con base en la fórmula establecida para tal efecto en este reglamento.
- i) Declaración jurada de no ser beneficiario de otros regímenes de incentivos.
- j) Lugar para notificaciones dentro de la ciudad de San José.
- k) Cualquier otro documento o información que solicite Procomer y que resulte pertinente.

La firma del solicitante debe presentarse autenticada.

Artículo 10.—El formulario y los documentos requeridos deben permitir a Procomer evaluar los siguientes aspectos:

- a) Declaración jurada de que la persona solicitante y sus socios y directivos se encuentren al día en sus obligaciones tributarias en Costa Rica.
- b) Que la empresa solicitante y las actividades proyectadas por la empresa al amparo del régimen de zonas francas se encuentren dentro de alguna de las categorías establecidas en el artículo 17 de la ley 7210 y sus reformas.
- c) Que los términos del proyecto propuesto no sean manifiestamente contrarios a las reglas de la ciencia, la lógica y la técnica.
- d) Que el proyecto cumpla con el nivel de inversión mínima inicial previsto en la ley 7210 y sus reformas y en el Capítulo II de este reglamento.
- e) Declaración jurada de que la empresa solicitante o el proyecto no se encuentren en alguna de las situaciones tipificadas como infracciones en el artículo 32 de la ley 7210 y sus reformas, en lo que resulte racionalmente aplicable.
- f) Que la empresa solicitante o el proyecto no se hayan beneficiado con anterioridad de los incentivos del régimen, y si así fuere, que se presente evidencia suficiente de que se trata de un proyecto nuevo o de la naturaleza y la magnitud de las inversiones adicionales, para efectos de lo dispuesto en el artículo 20 bis de la ley 7210 y sus reformas.
- g) El porcentaje de Valor Agregado Nacional de la empresa.

Artículo 11.—Procomer, para efectos del cálculo de Valor Agregado Nacional (VAN) o Contenido Nacional aplicable al otorgamiento del Régimen de Zonas Francas, interpreta el término VAN como: Exportaciones FOB (X FOB) menos Importaciones CIF (M CIF), más Variación en Inventarios (Inv), menos remesas, menos Impuestos netos (T).

$$VAN = X \text{ FOB} - M \text{ CIF} + \Delta \text{ Inv} - R - T$$

- a) Entendiendo que: las importaciones CIF (M CIF) son aquellas que corresponden a materia prima; la Variación de Inventarios (Inv) será el resultado del inventario final menos inventario inicial en términos monetarios; el término remesas (R) se refiere al monto correspondiente al envío de divisas al extranjero o repatriación de capital y los impuestos netos (T) será el monto por concepto de cualquier tipo de impuesto cancelado al Estado.

Cuando se trate de empresas de servicios, administradoras y comercializadoras, el término exportaciones deberá entenderse como Ventas totales.

En el caso de empresas de servicios y administradoras el inventario se considerará igual a cero (0).

Artículo 12.—Tratándose de pequeñas empresas que vayan a asociarse para realizar actividades procesadoras para la exportación, las empresas que se asocien deben constituir una persona jurídica única, o bien designar contractualmente a una de las empresas que será la solicitante. En este último caso, deberá presentarse con la solicitud copia del acuerdo consorcial respectivo, en el que se delimiten claramente las obligaciones y responsabilidades de cada empresa asociada. Además, en todo caso las empresas asociadas deben instalarse en un mismo parque industrial.

En los casos en que se designe a una empresa como solicitante, todas las empresas asociadas se considerarán como beneficiarias del régimen, para efectos del cumplimiento de las obligaciones y la aplicación de las sanciones contempladas en la ley 7210 y sus reformas y demás leyes y reglamentos aplicables.

Artículo 13.—Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, la Administración de Procomer debe prevenirle al interesado la presentación de cualquier documento faltante o la subsanación de cualquier requisito, otorgándole un plazo de diez días hábiles para cumplir con la prevención.

Dentro del plazo máximo de diez días hábiles a partir de la fecha en que esté completa la información, la unidad técnica correspondiente de Procomer debe presentar un dictamen a la junta directiva o a la instancia en la cual la junta directiva haya delegado tales funciones, el cual debe contener una evaluación de los aspectos indicados en este reglamento y una recomendación sobre la procedencia o no del otorgamiento del régimen de zonas francas a la empresa solicitante, con los fundamentos del caso.

La junta directiva, la instancia en la cual la junta directiva haya delegado tales funciones o la administración de Procomer, pueden solicitar el criterio de otras entidades u órganos públicos, si lo considera necesario para una mejor evaluación del proyecto.

Completado el análisis, la junta directiva o la instancia respectiva de Procomer emitirá la recomendación final al Ministro de Comercio Exterior, a efecto de que el Poder Ejecutivo resuelva lo pertinente.

Artículo 14.—Si el Poder Ejecutivo decide otorgar el régimen de zonas francas a la empresa solicitante, se procederá a emitir el acuerdo ejecutivo correspondiente, el cual debe contener como mínimo los siguientes requisitos:

- a) Datos de inscripción y representación de la empresa beneficiaria.
- b) Indicación de la categoría en la que se clasifica la empresa, dentro de las categorías previstas por el artículo 17 de la ley 7210 y sus reformas. No puede otorgarse el régimen a un mismo solicitante en más de una categoría.
- c) Descripción de las características principales del proyecto y de las actividades que desarrollará la empresa al amparo del régimen de zonas francas.

- d) Monto mínimo legal de inversión nueva inicial en activos fijos y plazo para cumplirlo.
- e) Parámetros que la empresa beneficiaria se obliga a cumplir en cuanto a monto total de inversión y nivel de empleo, así como los plazos en que la empresa se obliga a cumplir esos parámetros.
- f) Referencia expresa a la obligación de la empresa beneficiaria de cumplir con todos los requisitos de la ley 7210 y sus reformas y reglamentos, así como con las obligaciones propias de su condición de auxiliar de la función pública aduanera.
- g) Referencia expresa a la obligación de la empresa de sujetarse a los mecanismos que permitan un adecuado control y fiscalización de sus operaciones al amparo del régimen de zonas francas, establecidos por Procomer y el Ministerio de Hacienda.
- h) Referencia expresa a la obligación de la empresa de cumplir todas las normas de protección del medio ambiente que la legislación costarricense y la internacional disponen para el desarrollo sostenible de las actividades económicas, lo cual será verificado por las autoridades competentes.

Artículo 15.—Si el Poder Ejecutivo resuelve no otorgar el régimen de zonas francas a la empresa solicitante, se procederá a emitir la resolución correspondiente, la cual será notificada por Procomer al interesado.

Artículo 16.—Contra la resolución del Poder Ejecutivo, denegando u otorgando el régimen de zonas francas a la empresa solicitante, cabrá el recurso de reposición en los términos de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Artículo 17.—Desde la presentación de la solicitud inicial y luego de dictada la resolución final por el Poder Ejecutivo, Procomer deberá mantener los expedientes relativos a las solicitudes del régimen de zonas francas, debidamente ordenados y foliados.

Artículo 18.—Los beneficios otorgados por la ley 7210 y sus reformas a las empresas beneficiarias del régimen de zonas francas rigen a partir de la fecha de la comunicación al interesado del acuerdo ejecutivo que otorga el régimen, sin perjuicio de lo que se establezca en cada acuerdo ejecutivo para efectos de lo dispuesto en el párrafo segundo del inciso g) del artículo 20 de la ley 7210 y sus reformas. No obstante lo anterior, el ejercicio de las actividades al amparo del régimen y el disfrute efectivo de los beneficios no podrá iniciarse mientras la empresa beneficiaria no haya suscrito un contrato de operaciones con Procomer, siguiendo el formato establecido al efecto.

Para el inicio de las operaciones productivas al amparo del régimen, la empresa deberá haber sido autorizada por la Dirección General de Aduanas como auxiliar de la función pública aduanera, según lo dispuesto en la Ley General de Aduanas y su Reglamento.

El acuerdo ejecutivo de otorgamiento del régimen se publicará íntegramente en el Diario Oficial, a costo de la empresa solicitante.

CAPÍTULO IV

Solicitudes relativas a empresas administradoras de parque

Artículo 19.—Tratándose de empresas que soliciten el régimen de zonas francas para desarrollar y administrar un parque industrial de zona franca, es de aplicación lo dispuesto en el

Capítulo III de este reglamento. Sin embargo, adicionalmente Procomer debe solicitar información que acredite la capacidad financiera para el desarrollo del proyecto, así como la existencia de infraestructura adecuada, disponibilidad de servicios y mecanismos de control adecuados, tomando en cuenta las obligaciones de las empresas administradoras de parque según lo dispuesto en la ley 7210 y sus reformas. Asimismo, la empresa deberá presentar un plan maestro del desarrollo propuesto del parque, que incluya las etapas y plazos correspondientes.

Además, la empresa solicitante debe presentar un proyecto de reglamento general sobre el funcionamiento del parque que contemple las normas y procedimientos relativos al control del ingreso y salida de bienes y personas, en términos satisfactorios para Procomer y para la Dirección General de Aduanas, de conformidad con la Ley General de Aduanas y su Reglamento.

Artículo 20.—Se considera como infraestructura mínima para que un parque industrial pueda ser autorizado como zona franca, aquella que tenga capacidad para que se puedan instalar al menos doce empresas acogidas al régimen de zonas francas, ya sea exclusivamente empresas procesadoras para la exportación o junto con empresas de otras categorías previstas en el artículo 17 de la ley 7210 y sus reformas. Lo anterior, debidamente comprobado a satisfacción de Procomer.

En los casos a que se refiere el artículo 12 de este reglamento se tomará en cuenta, para efectos del párrafo anterior, a las empresas asociadas como una sola.

Artículo 21.—Las empresas administradoras de parques destinadas a la instalación de empresas bajo el régimen de zonas francas, al momento de instalar empresas no acogidas a dicho régimen perderán la exención de todos los tributos a las utilidades, así como de cualquier otro cuya base imponible se determine en relación con las ganancias brutas o netas, los dividendos abonados a los accionistas o ingresos por ventas. Así como la reducción proporcional de las demás exoneraciones como si se tratara de ventas en el territorio nacional en los términos del artículo 22 de la Ley de Zonas Francas y sus reformas. Cuando se cumpla el supuesto anterior, el administrador del parque deberá de informar dicha circunstancia, dentro del término de ocho días naturales, después de que se formalice el contrato de venta o arrendamiento del local, a las Direcciones competentes del Ministerio de Hacienda, a efecto de que se proceda de conformidad con las atribuciones y competencias de cada una de ellas.

Artículo 22.—Se considera como infraestructura mínima para que un parque destinado exclusivamente a empresas proveedoras de servicios y/o comercializadoras pueda ser autorizado como zona franca, que el parque propuesto tenga un área total disponible de construcción de al menos cuatro mil metros cuadrados, destinados a la instalación de empresas acogidas al régimen de zonas francas. Lo anterior debidamente comprobado, a satisfacción de Procomer.

CAPÍTULO V

Solicitudes relativas a empresas que se instalarán fuera de parque

Artículo 23.—Tratándose de solicitudes de empresas que pretendan instalarse fuera de un parque industrial de zona franca, es de aplicación en lo pertinente lo dispuesto en el Capítulo III de este reglamento, pero además Procomer debe evaluar especialmente:

- a) Que la solicitud se refiera a una empresa procesadora de exportación.
- b) Que las características del proceso productivo o la naturaleza del proyecto impidan desarrollarlo dentro de un parque industrial.

- c) Que la empresa cuente con la capacidad de sujetarse a los mecanismos necesarios para controlar el ingreso y salida de bienes y personas, de acuerdo con la Ley General de Aduanas, su Reglamento y las políticas de operación que al efecto emita la Dirección General de Aduanas.
- d) Que la empresa cumpla con los formatos y procedimientos de transmisión electrónica de datos de acuerdo con lo establecido por la Dirección General de Aduanas, siguiendo los requerimientos para la integración aduanera, este requisito se acreditará mediante certificación de la División de Informática de dicha Dirección.
- e) Que la empresa cumpla con la obligación establecida en el artículo 14 y demás pertinentes de la ley 7210 y sus reformas.

Artículo 24.—Las empresas que pretendan instalarse fuera de parque deberán cumplir el monto de inversión mínima inicial en activos fijos requerido por la ley 7210 y sus reformas, de conformidad con los criterios establecidos en el Capítulo II de este reglamento.

Artículo 25.—Tratándose de solicitudes de empresas que pretendan instalarse fuera de parque, al recibir la recomendación final de Procomer, o antes si lo considerare pertinente, el Ministro de Comercio Exterior remitirá la consulta de rigor al Ministerio de Hacienda, en los términos del inciso ch) del artículo 18 de la ley 7210 y sus reformas.

El dictamen del Ministerio de Hacienda se referirá a la viabilidad de ejercer los controles fiscales y aduaneros pertinentes, así como a cualquier otro aspecto que el Ministerio de Hacienda estime conveniente plantear.

CAPÍTULO VI

Solicitudes relativas a plantas satélites y bodegas adicionales

Artículo 26.—Tratándose de solicitudes de empresas beneficiarias del régimen de zonas francas para instalar plantas satélites fuera del parque industrial de zona franca en el que haya sido autorizada la planta principal, es de aplicación en lo pertinente lo dispuesto en el Capítulo III de este reglamento, pero además Procomer debe evaluar especialmente:

- a) Que existan razones de disponibilidad de mano de obra, transporte, manejo de materia prima u otro motivo similar calificado, que justifiquen la autorización de una planta satélite.
- b) Que la empresa se comprometa a realizar una proporción significativa de su producción total en la planta instalada en el parque. Para estos efectos, se entiende por proporción significativa que al menos el sesenta por ciento de la producción total de la empresa al amparo del régimen sea generado directamente por la planta principal. Corresponderá a la Promotora del Comercio Exterior velar por que la producción que realicen las plantas satélites no supere el cuarenta por ciento de la producción total de la empresa, de acuerdo con los procedimientos internos que al efecto ella defina.
- c) Que la empresa se comprometa y esté en capacidad de establecer los controles fiscales y aduaneros pertinentes en relación con la o las plantas satélites, en términos satisfactorios para la Dirección General de Aduanas.

Artículo 27.—Procomer, en coordinación con la aduana de jurisdicción de la planta principal, excepcionalmente y solamente en casos debidamente razonados y justificados, autorizará que el trasiego de mercancías (importaciones y exportaciones) se realice directamente desde las plantas

satélites. No obstante lo anterior, el control aduanero lo ejercerá la aduana de jurisdicción de la planta principal y corresponderá a esta última llevar los registros y controles de los trámites efectuados por la planta satélite. En estos casos, la empresa beneficiaria debe cumplir con los mecanismos de control adicionales que establezca la Ley General de Aduanas y su Reglamento. Transcurridas cuarenta y ocho horas después de requerido el criterio a la aduana de jurisdicción, sin que ésta se manifieste, se entenderá que no tiene objeciones para el otorgamiento de la autorización.

Artículo 28.—Excepcionalmente Procomer autorizará el uso de bodegas para almacenamiento de materias y mercancías. Para la autorización del uso de una bodega, el beneficiario del régimen deberá solicitar el permiso correspondiente ante Procomer. Cuando el mismo le sea otorgado deberá solicitar la autorización de funcionamiento ante la Dirección General de Aduanas, aportando el permiso extendido por Procomer.

Las bodegas se autorizarán únicamente dentro de un parque industrial o zona franca, ante la falta de espacio en la planta principal. En caso de que la bodega esté ubicada en una jurisdicción distinta de la planta principal, el control aduanero será ejercido por la aduana donde se encuentre ubicada dicha planta principal. Las importaciones y exportaciones no se podrán realizar desde estas bodegas. Para el trasiego de las mercancías entre la planta principal y la bodega deberá utilizarse la Declaración Aduanera de Zona Franca.

CAPÍTULO VII

Solicitudes de modificaciones al acuerdo ejecutivo y de renuncia al régimen de zonas francas

Artículo 29.—Todo cambio en las condiciones o actividades de una empresa beneficiaria del régimen de zonas francas que implique una modificación a los términos del acuerdo ejecutivo en que se le otorgó el régimen, está sujeto a autorización previa del Poder Ejecutivo. Para ello, la empresa interesada debe presentar la solicitud correspondiente ante Procomer, acompañando la información y documentación en que se fundamente. Procomer le dará trámite a este tipo de solicitudes siguiendo en lo pertinente el procedimiento establecido en el Capítulo III de este reglamento.

Artículo 30.—Cuando una empresa beneficiaria pretenda renunciar al régimen de zonas francas, debe comunicarlo con al menos un mes de anticipación a Procomer y a la Dirección General de Aduanas. Procomer debe verificar el cumplimiento de los requisitos siguientes:

- a) Que la empresa esté al día en el pago del derecho por el uso del régimen y en las demás obligaciones previstas en la ley 7210 y sus reformas y este reglamento.
- b) Que la empresa esté al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, lo cual debe evidenciarse con una declaración jurada emitida por el Representante Legal.
- c) Que la empresa esté al día en el pago las cuotas obrero-patronales, lo cual debe evidenciarse con certificación de la Caja Costarricense de Seguro Social.
- d) Que la empresa anuncie su intención de renunciar al régimen mediante un aviso que debe publicarse en un diario de circulación nacional.
- e) Que la empresa presente copia de la comunicación de su intención de la salida del régimen, debidamente sellada y recibida por la aduana de jurisdicción de la empresa.

Artículo 31.— Procomer deberá solicitar y obtener de la empresa gestionante una certificación, emitida por un Contador Público Autorizado con vista del libro de operaciones de la empresa y las respectivas declaraciones aduaneras, en la que se haga constar que las materias primas y bienes adquiridos por la beneficiaria al amparo del régimen fueron debidamente utilizados o liquidados, y que se han finiquitado todos los trámites aduaneros pertinentes. Lo anterior sin perjuicio de las verificaciones que, de conformidad con sus potestades legales, decida realizar la Dirección General de Aduanas o la respectiva aduana de jurisdicción.

Artículo 32.—Verificado lo anterior, Procomer debe remitir un informe al Ministro de Comercio Exterior, para que el Poder Ejecutivo resuelva lo pertinente sobre la renuncia presentada.

A partir de la aceptación de la solicitud de renuncia del interesado, por parte de la Junta Directiva o la instancia respectiva de Procomer, se suspenderán a la empresa correspondiente todos los beneficios del régimen y el mismo día se comunicará a la aduana de jurisdicción y a la Dirección General de Aduanas para los efectos correspondientes. Sólo se permitirán aquellos trámites que sean indispensables para el pago de tributos de los bienes adquiridos al amparo del régimen, su reexportación o venta a regímenes especiales, los cuáles deberán efectuarse dentro de los quince días posteriores a la notificación de la aceptación de la renuncia, conforme lo prevé el artículo 56 inciso f) de la Ley General de Aduanas.

En el acto de aceptación de la solicitud de renuncia por parte de la Junta Directiva o la instancia respectiva de Procomer se dispondrá la eliminación de los cargos por derechos del uso del régimen.

Una vez que el interesado presente ante Procomer lo solicitado en el artículo 31, se devolverá al interesado el depósito de garantía, previo rebajo de cualesquiera sumas pendientes de pago a Procomer

CAPÍTULO VIII

Derechos y obligaciones de los beneficiarios del régimen de zonas francas

Artículo 33.—Las empresas acogidas al régimen de zonas francas tienen derecho a disfrutar de las exoneraciones y beneficios fiscales previstos en la ley 7210 y sus reformas, siempre que se mantengan en todo momento al día en el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en dicha Ley, este reglamento, las disposiciones que emita Procomer y las que emita el Ministerio de Hacienda en lo pertinente.

Artículo 34.—Son obligaciones de los beneficiarios del régimen de zonas francas las siguientes:

- a) Cumplir con los requerimientos de Procomer y las autoridades tributarias y aduaneras para el ejercicio de sus funciones de control.
- b) Establecer sistemas contables y operativos que permitan en todo momento el control de la entrada, permanencia y salida de bienes.

De sus sistemas contables o del registro de inventario permanente por mercancía deberá poder extraerse en cualquier momento al menos la siguiente información:

- Número de cédula jurídica del proveedor y su razón social.

- Número de orden de compra o documento equivalente emitido por la empresa de zona franca en su fecha.
 - Número de factura del proveedor local y su fecha.
 - Fecha de ingreso efectiva de la mercancía.
 - Cantidad ingresada.
 - Unidad de medida.
 - Número de orden de producción o retiro de mercancía.
 - Cantidad retirada.
 - Unidad de medida.
 - Saldo.
- c) Otorgar la mayor colaboración a Procomer y a las autoridades tributarias y aduaneras para el ejercicio de sus funciones de control.
- d) Mantener permanentemente un inventario actualizado de los bienes internados.
- e) Presentar un informe anual de operaciones a Procomer, en los términos establecidos en este reglamento, así como los demás informes que les solicite Procomer, Comex o las autoridades tributarias y aduaneras en ejercicio de sus funciones. El informe anual remitido a Procomer deberá ser auditado por un contador público autorizado. Procomer remitirá copia del mismo a la Dirección General de Aduanas, para lo que corresponda.
- f) Rendir y mantener permanentemente un depósito de garantía a favor de Procomer.
- g) Cancelar puntualmente los derechos por el uso del régimen.
- h) Cumplir con las regulaciones ambientales, urbanísticas, sanitarias y demás aplicables según el tipo de actividad que desarrolle la empresa, y contar permanentemente con los permisos de operación correspondientes.
- i) Cumplir en todo momento con los niveles mínimos de inversión inicial, inversión proyectada, empleo y demás establecidos en el respectivo acuerdo ejecutivo.
- j) Suministrar a Procomer toda la información que esa entidad les solicite en relación con la administración del régimen, en forma oportuna.
- k) Transmitir electrónicamente el cien por ciento de las Declaraciones Aduaneras correspondientes a las diferentes transacciones de zonas francas, con las excepciones que establece este reglamento.
- l) Mantener debidamente archivadas las Declaraciones Aduaneras de Zona Franca y los documentos adjuntos, de conformidad con el artículo 30 inciso b) de la Ley General de Aduanas.
- m) Las demás que se establezcan en la ley 7210 y sus reformas, este reglamento y las demás leyes y reglamentos aplicables, así como en el acuerdo ejecutivo de otorgamiento del régimen y en el contrato de operaciones.

Artículo 35.—Adicionalmente, son obligaciones de las empresas administradoras de parque:

- a) Notificar a la aduana de jurisdicción y a Procomer de la existencia de cualquier cambio de local, alquiler de nuevas bodegas o cualquier movimiento anormal de las empresas instaladas en el parque.
- b) En caso de suspensión de beneficios a empresas beneficiarias instaladas en el parque industrial, deberá impedir la salida de mercancías sin la previa autorización de la aduana de jurisdicción.
- c) Aplicar las circulares que emita la Dirección General de Aduanas en lo que le compete como auxiliar de la función pública aduanera.
- d) Ante el cese de operaciones de una empresa instalada en el parque, notificar de inmediato al puesto de aduanas, a la Dirección General de Aduanas y Procomer.
- e) Dotar al puesto de aduanas de las líneas telefónicas requeridas para su comunicación.
- f) Dotar al puesto de aduanas del equipo, mobiliario y servicios necesarios para su normal funcionamiento.
- g) Dotar al parque de un cuerpo de vigilancia que garantice la seguridad de bienes y personas dentro de ella y que vele porque se cumplan las disposiciones sobre ingreso, permanencia y salida de personas, vehículos y mercancías, y velar por su correcto funcionamiento.
- h) Dictar un reglamento conforme con lo establecido en el artículo 19 de este reglamento, así como comunicarlo a los usuarios y colocarlo en un lugar visible en el parque. Asimismo, realizar actividades de capacitación dirigidas a las beneficiarias instaladas en el parque y los vigilantes.
- i) Mantener en condiciones adecuadas el acceso al parque y las vías dentro del parque.
- j) Ejecutar el proyecto con estricto apego a los términos del acuerdo ejecutivo.
- k) Prestar los servicios en forma eficiente a los beneficiarios instalados en el parque.
- l) Velar por la correcta aplicación de las leyes y reglamentos relativos a la administración y el funcionamiento del parque.
- m) Acatar las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como las que emita Procomer y la Dirección General de Aduanas en las áreas de su competencia.

Artículo 36.—Las dependencias correspondientes del Ministerio de Hacienda establecerán los procedimientos de control que deberán ser acatados por las empresas administradoras de parque, empresas ubicadas fuera de parque y plantas satélites, en relación con el ingreso y salida de mercancías, contrataciones y demás normas aplicables, conforme con lo dispuesto en el inciso f) del artículo 19 de la ley 7210 y sus reformas.

Artículo 37.— En el acto de la comunicación del acuerdo ejecutivo que concede el régimen, los beneficiarios deben rendir ante Procomer una garantía de cumplimiento por un monto equivalente a tres meses de los derechos que les corresponda cancelar por el uso del régimen, con un mínimo que se aplicará en todo caso de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América. En caso de que el

monto de canon cancelado por la empresa sufra un incremento y sea superior al monto del depósito de garantía, este último deberá actualizarse. Dicha garantía respaldará en forma incondicional el debido cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones por parte de los beneficiarios. La garantía podrá rendirse en cualesquiera de las formas previstas en el Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa.

Procomer queda facultada para ejecutar administrativamente, sin más trámite que la adopción de una decisión motivada y sin responsabilidad de su parte, la indicada garantía, así como para descontar de dicha suma aquellos montos que los beneficiarios le adeuden por cualquier concepto. El contrato de operaciones deberá incluir una cláusula que expresamente contemple esta posibilidad.

Es entendido que la garantía mencionada en este artículo deberá mantenerse vigente e incondicional por todo el tiempo en que el beneficiario permanezca dentro del régimen; cuando por alguna circunstancia el beneficiario no rinda o no reponga, según proceda, el indicado depósito dentro del plazo establecido, o dentro del que Procomer lo prevenga en caso que sea necesario, ésta entidad lo informará de inmediato a Comex, a fin de que inicie el procedimiento administrativo para la revocatoria del régimen. Vencido dicho plazo, no procederá en ningún caso el otorgamiento de uno nuevo para cumplir con esta obligación.

Artículo 38.—Los beneficiarios del régimen deben iniciar sus actividades a más tardar en la fecha prevista en el respectivo acuerdo ejecutivo. El Poder Ejecutivo, previa solicitud fundada de la empresa y recomendación fundada de Procomer, podrá conceder prórrogas al plazo para el inicio de actividades, siempre que la fecha de inicio de operaciones productivas no exceda en ningún caso de dos años a partir de la publicación del acuerdo ejecutivo.

Para la fijación de la fecha de inicio de actividades y sus prórrogas, se tomará en cuenta lo consignado por el solicitante en su respectiva solicitud, la naturaleza de la actividad que se pretende desarrollar y el tiempo que ésta requiere para empezar a producir ingresos, de manera que se consideren las características propias de cada proyecto en particular.

Artículo 39.—Dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación del período fiscal ordinario, o del especial que hubiere autorizado el Ministerio de Hacienda a una empresa en particular, los beneficiarios deberán presentar ante Procomer un informe anual de sus actividades en el período inmediato anterior, conteniendo y aportando la información que señale el formulario diseñado al efecto por Procomer.

Si el informe se presentare en forma incompleta, Procomer le otorgará al beneficiario un plazo de quince días hábiles, contados a partir de la notificación, para subsanar los defectos o presentar los documentos faltantes. Sin embargo, no se considerará como presentado el informe si los defectos u omisiones fueron sustanciales, de manera tal que hagan imposible la evaluación de su contenido.

Si el informe no se presentare dentro del plazo indicado en el párrafo primero de este artículo, o se determinare que fue presentado con defectos u omisiones sustanciales, o si las omisiones no fueron subsanadas dentro del plazo indicado en el párrafo segundo de este artículo, Procomer suspenderá temporalmente a la empresa infractora el trámite de todas las gestiones y autorizaciones relativas a las actividades amparadas al régimen, y lo comunicará, el mismo día en que se confeccionen el oficio respectivo, a la Dirección General de Aduanas, la aduana de jurisdicción, la Dirección General de Hacienda y la administración del parque industrial donde se ubica la empresa, para que se suspendan de igual forma todos los trámites y beneficios del régimen, tales como tránsito o trasiego de materias y mercancías, exoneraciones y demás operaciones en el régimen. Todo ello sin perjuicio de las multas o eventual revocatoria del régimen que pueda resultar aplicable, conforme con la ley y de acuerdo con la recomendación fundada que al efecto le emita Procomer a Comex.

Artículo 40.—Cuando un beneficiario se atrase en el pago de las contribuciones legales obligatorias por el uso del régimen por un período de quince días naturales, Procomer lo hará de su conocimiento. Cuando el atraso sea mayor a treinta días naturales Procomer lo informará a Comex a fin de que inicie el procedimiento administrativo para la imposición de las sanciones del caso y la suspensión precautoria de todos los beneficios; en la misma fecha en que se reciba la resolución que da inicio al procedimiento firmada por el Presidente de la República, Comex deberá notificarla a la Dirección General de Aduanas y a la aduana de jurisdicción. A partir del atraso superior a treinta días, a la empresa respectiva se le suspenderá automáticamente todo beneficio o trámite ante Procomer, hasta tanto se ponga al día en el pago de la citada contribución.

CAPÍTULO IX

Disposiciones especiales sobre los incentivos

Artículo 41.—El Poder Ejecutivo no otorgará el régimen de zonas francas para el desarrollo u operación de empresas o proyectos de inversión ya beneficiados con los incentivos del régimen, aún cuando lo haya sido al amparo de una persona física o jurídica distinta, salvo que se demuestre que es un proyecto nuevo o, en casos excepcionales, cuando la naturaleza o la magnitud de las inversiones adicionales lo justifiquen, a juicio del Ministerio de Comercio Exterior.

Para la apreciación de los supuestos establecidos en este artículo dicho Ministerio podrá utilizar todo tipo de elementos de juicio que le permitan determinar si las empresas o proyectos que solicitan su ingreso al régimen ya fueron beneficiados con el régimen de incentivos, o bien para concluir que se trata de proyectos nuevos o excepcionales que por su naturaleza o la magnitud de la inversión que proponen sí pueden ser admitidos.

Para determinar que se trata de un proyecto nuevo, se tomará en cuenta la ubicación, el proceso productivo, los bienes o servicios producidos y otros elementos similares. Además, tanto tratándose de inversiones adicionales como de proyectos nuevos, deberá cumplirse al menos con los requisitos mínimos de inversión nueva inicial establecidos en el Capítulo II de este reglamento.

Artículo 42.—Las empresas procesadoras de exportación acogidas al régimen de zonas francas cuya inversión nueva inicial en activos fijos haya sido igual o superior a dos millones de dólares de los Estados Unidos de América (US\$2.000.000,00) o su equivalente en moneda nacional, que al cumplir cuatro años de haberles sido otorgado el régimen reinviertan en el país, tendrán derecho a recibir una exención adicional del pago del impuesto sobre la renta en los términos y condiciones que se establecen en el inciso l) del artículo 20 de la ley 7210 y sus reformas.

Para efectos de determinar y cuantificar la inversión mínima inicial, las reinversiones y la exención adicional, se aplicarán las reglas siguientes:

- a) Únicamente serán elegibles para el beneficio de esta exención adicional las empresas que hayan realizado una inversión nueva inicial en activos fijos, al amparo del régimen, de al menos dos millones de dólares de los Estados Unidos de América (US\$2,000,000.00). Para efectos de determinar ese monto de inversión nueva inicial en activos fijos, deberá ajustarse a los mismos parámetros establecidos en los artículos 5° y 7° de este reglamento. Además, para estos efectos se considerará como inversión inicial la realizada durante los dos primeros años de vigencia del régimen, es decir, los dos años siguientes a la fecha en que le haya sido comunicado el acuerdo de otorgamiento del régimen a la respectiva empresa.
- b) La empresa deberá haber realizado las reinversiones después de que se complete el cuarto año de haberle sido otorgado el régimen y antes de que se inicie el octavo año

de haberle sido otorgado el régimen. Para tales efectos, los años se contarán de fecha a fecha, a partir de la fecha en que a la empresa le fue comunicado el acuerdo ejecutivo de otorgamiento del régimen.

- c) Las reinversiones deben reunir los requisitos relativos a inversiones nuevas en activos fijos, conforme con los parámetros establecidos en los artículos 5° y 7° de este reglamento.
- d) El porcentaje de reinversión requerido por el inciso l) del artículo 20 de la ley 7210 y sus reformas, para efectos de obtener cada año adicional de exención del 75% del impuesto sobre las utilidades hasta un máximo de cuatro años, se calculará sobre la base del monto total de la inversión en activos fijos que tenga la empresa al día en que se cumpla el cuarto año completo de haberle sido otorgado el régimen, o bien sobre el monto de dos millones de dólares de los Estados Unidos de América (US\$2,000,000.00) establecido en el inciso l) de la ley 7210 y sus reformas, el monto que sea mayor.
- e) Cada año de exención del 75% del impuesto sobre las utilidades, hasta un máximo de cuatro años, se contará a partir de la conclusión del último año en que la empresa haya gozado de exención del 100% del impuesto sobre las utilidades. Para tales efectos, los años se contarán de fecha a fecha, a partir de la fecha en que la empresa haya empezado a disfrutar de la exención del 100% del impuesto sobre las utilidades.
- f) Una vez completo el o los años de exención adicional del 75% del impuesto sobre las utilidades que le correspondan a la empresa, dentro del máximo de cuatro años previsto por la ley 7210 y sus reformas, la empresa tendrá derecho a continuar con el porcentaje de exención del 50% del impuesto sobre las utilidades, hasta el vencimiento del plazo de dicha exención conforme con la ley 7210 y sus reformas.
- g) Para tener derecho al beneficio de la exención adicional del 75% del impuesto sobre las utilidades previsto en el inciso l) del artículo 20 de la ley 7210 y sus reformas y regulado en este artículo, la empresa deberá formular una solicitud por escrito ante Procomer dentro de los tres meses calendario siguientes a la fecha en que debió completar las reinversiones adicionales, es decir, a la fecha en que se complete el séptimo año de haberle sido comunicado el acuerdo ejecutivo de otorgamiento del régimen. La solicitud deberá presentarse en el formulario que al efecto elaborará Procomer y acompañando la documentación que indique dicho formulario, la cual estará destinada a comprobar el monto, las características y las fechas en que se realizaron tanto la inversión original inicial como las reinversiones adicionales, con el fin de determinar si se cumple con los requisitos y condiciones establecidos en la ley 7210 y sus reformas y este reglamento. La presentación extemporánea de la solicitud dará lugar al rechazo de la petición.
- h) Procomer analizará la solicitud presentada y remitirá un informe a Comex, para lo cual se seguirá en lo pertinente el procedimiento previsto en el Capítulo III de este reglamento. Si el Poder Ejecutivo otorgare la exención adicional a que se refiere este artículo, ello se hará constar mediante una modificación al acuerdo ejecutivo de otorgamiento del régimen. Contra la resolución del Poder Ejecutivo que rechace la solicitud de exención adicional a que se refiere este artículo cabrá el recurso de reposición en los términos de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Artículo 43.—Las empresas dedicadas a actividades de comercialización que se acojan al régimen de zonas francas no gozarán de los beneficios que contemplan los incisos f) y g) del artículo 20 de la ley 7210 y sus reformas.

Cuando una empresa procesadora, de servicios o de cualesquiera otra categoría diferente a las comercializadoras efectúe las actividades previstas en el inciso b) del artículo 17 de la ley 7210 y sus reformas, las utilidades generadas provenientes de las ventas como comercializadora estarán gravadas con el impuesto sobre la renta. Para determinar la parte de las utilidades que estará gravada se utilizará la proporción que representan las ventas que percibe la empresa en la actividad de comercialización entre el total de ventas de la empresa. En todo caso, la realización de actividades comercializadoras por parte de empresas no calificadas como comercializadoras desde su ingreso al régimen solo podrá ser de carácter complementaria y accesorio, y requerirá en todos los casos de autorización previa de Procomer y notificación al Ministerio de Hacienda. La realización de actividades comercializadoras, con carácter complementario, por parte de una empresa de cualesquiera de las categorías previstas en los incisos a), c), ch) y e) del artículo 17 de la ley 7210 y sus reformas, no implica el reconocimiento a la empresa de la categoría prevista en el inciso b) del citado artículo 17.

Recibida la solicitud, Procomer la analizará detenidamente desde el punto de vista técnico y determinará si la actividad que se propone el gestionante es complementaria de la principal ya autorizada, debiendo emitir o denegar la autorización en el plazo máximo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. En caso de que Procomer deba requerir información adicional del solicitante, el plazo para resolver se contará a partir de la recepción de la información adicional. Se aplicará en estos casos en todo lo pertinente lo dispuesto en el Capítulo III de este reglamento.

Se entenderá que son complementarias las actividades de comercialización cuando no generen más de un treinta por ciento de “las ventas totales de la empresa”

Artículo 44.—Corresponderá a la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda definir los requisitos, obligaciones, normas y demás mecanismos de trámite y control que deben cumplir las empresas que se acojan a la exención del impuesto sobre las utilidades que establece la ley 7210 y sus reformas.

Cuando en el transcurso del período fiscal del impuesto sobre las utilidades, sea éste el ordinario o uno especial autorizado por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, se produzca cambio en el porcentaje de exoneración de que goza la empresa beneficiaria del régimen de zonas francas (100%, 75%, 50% ó 0%), para calcular el impuesto a pagar en ese período, la empresa deberá proceder de la siguiente manera: sobre las utilidades obtenidas resultantes según los estados financieros correspondientes a cada segmento del período fiscal en que ha estado vigente el respectivo porcentaje de exoneración, se debe calcular el impuesto correspondiente, considerando dicho porcentaje de exoneración. El impuesto total a pagar será la suma de los importes resultantes.

CAPÍTULO X

Disposiciones sobre la bonificación

Artículo 45.—Los beneficiarios que, previo cumplimiento de los requisitos que al efecto contienen la ley 7210 y sus reformas y el presente reglamento, se establezcan a su vez en zonas de “menor desarrollo relativo”, según la calificación establecida reglamentariamente por el Poder Ejecutivo de acuerdo con la ley 7210 y sus reformas, tendrán derecho a recibir, una bonificación por

un lapso de cinco años, por la suma pagada por salarios durante el año calendario inmediato anterior a la fecha de solicitud para acogerse a este beneficio una vez deducido el monto pagado a la Caja Costarricense de Seguro Social sobre esos salarios de conformidad con la certificación de las respectivas planillas reportadas a dicha institución. Para el primer año la bonificación será equivalente al diez por ciento (10%) y decrecerá dos puntos porcentuales hasta su liquidación en el último año. Las empresas que desean acogerse a este beneficio deberán presentar su solicitud dentro de los cinco años siguientes al 08 de octubre de 1998. Para ello, deberán presentar la respectiva solicitud ante Procomer dentro del mes siguiente a la finalización del año calendario, acompañada de los siguientes documentos:

- a) Certificación emitida por la Caja Costarricense del Seguro Social en la que conste el monto pagado por la empresa en salarios durante el año calendario inmediato anterior, así como el monto total pagado a dicha entidad sobre esos mismos salarios.
- b) Copia certificada de cada una de las planillas mensuales correspondientes al mismo período señalado en el inciso a) anterior, cuya suma deberá coincidir totalmente con los resultados que se indiquen en la certificación que se solicita en dicho aparte.
- c) Comprobación de que la empresa se encuentra ubicada en una zona de menor desarrollo relativo, conforme con la clasificación establecida reglamentariamente por el Poder Ejecutivo.

Los beneficiarios que hayan recibido este incentivo en períodos anteriores deberán señalar expresamente esa circunstancia en la solicitud, a efecto de aplicar la reducción porcentual establecida en la ley 7210 y sus reformas, acompañando la documentación que demuestre la aprobación correspondiente al período inmediato anterior.

No será aplicable la bonificación prevista en este Capítulo a beneficiarios del régimen instalados en zonas de menor desarrollo relativo, cuando el proyecto que desarrollan ya existía o se encontraba en operación antes de que la empresa se acogiera al régimen de zonas francas, salvo que se demuestre que es un proyecto nuevo, o en casos excepcionales, cuando la naturaleza y la magnitud de las inversiones adicionales lo justifiquen, previa recomendación de Procomer.

En caso de que el solicitante sea una empresa instalada en un parque industrial de zona franca pero que a su vez tenga autorizado el funcionamiento de una planta satélite que se ubique en una zona de menor desarrollo relativo, el presente artículo únicamente se concederá con respecto a los salarios cancelados por la empresa al personal que labore exclusivamente en la respectiva planta satélite, según la verificación que realizará Procomer, que podrá exigir una declaración jurada en tal sentido.

Artículo 46.—Procomer verificará el cumplimiento de los requisitos anteriores, determinará la procedencia y el monto de la bonificación y remitirá un informe al Ministerio de Comercio Exterior.

Artículo 47.—Corresponderá al Ministerio de Hacienda por medio de la Tesorería Nacional, previa presentación de la factura de gobierno, efectuar el pago de la bonificación indicada en este Capítulo, mediante los mecanismos usuales establecidos.

CAPÍTULO XI

Compras y ventas al mercado local y subcontrataciones

SECCIÓN I

Compras de los beneficiarios al mercado local

Artículo 48.—Las ventas de materias, mercancías o servicios que realicen personas físicas o jurídicas domiciliadas en el territorio aduanero nacional a los beneficiarios se considerarán exportaciones.

Artículo 49.—De conformidad con las disposiciones de la ley 7210 y sus reformas, se autorizan las compras exentas del pago de los Impuestos General sobre las Ventas y Selectivo de Consumo sobre las compras locales de materias y mercancías, a que se refiere el artículo 3 del presente reglamento, que realizan los beneficiarios del régimen y sobre el uso de servicios públicos y privados necesarios para la generación de capacidad operativa, efectuados en capacitación y entrenamiento de personal o asociados a los mismos, a saber transporte, hospedaje, alimentación y excepcionalmente cualquier otro que determine el Ministerio de Hacienda mediante resolución motivada.

Artículo 50.—Las transacciones realizadas al amparo de lo dispuesto por el artículo anterior no necesitarán ir acompañadas de una Declaración Aduanera de Exportación para cada adquisición. Para efectos del no pago de los impuestos General sobre las Ventas y Selectivo de Consumo, deberán estar respaldadas por comprobantes fehacientes emitidos por la empresa proveedor nacional y por la orden de compra o documento equivalente debidamente emitido por la empresa beneficiaria del régimen de zonas francas. En casos excepcionales de compras debidamente calificadas como urgentes por el beneficiario, en lugar de la orden de compra o documento equivalente, solamente será necesario que la factura cuente con “recibido conforme” de la persona autorizada para esos efectos por la empresa beneficiaria del régimen de zonas francas.

Las empresas de zonas francas transmitirán electrónicamente a la aduana de jurisdicción una Declaración Aduanera de Zona Franca mensual por cada uno de los proveedores de materias y mercancías, no siendo necesaria su presentación a la aduana en forma impresa, salvo que corresponda revisión documental. En estos casos no se requerirá la revisión física de las mercancías por parte de la aduana.

Dicha Declaración Aduanera de Zona Franca deberá ser transmitida durante los primeros diez días hábiles de cada mes, con la información de las adquisiciones de materias y mercancías realizadas en el mes inmediato anterior.

En estos casos, la empresa beneficiaria podrá imprimir en papel común la información que contiene la Declaración Aduanera de Zona Franca transmitida, documento que debe ser firmado por el declarante y archivado bajo su responsabilidad, con todos los documentos originales de respaldo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 inciso b) de la Ley General de Aduanas y el procedimiento vigente al efecto.

Procomer en coordinación con el Ministerio de Hacienda realizará los ajustes informáticos para los efectos anteriores, que permitan además obtener reportes para el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y Procomer, con la finalidad de que se ejerzan los controles a posteriori pertinentes.

En el caso de la adquisición de servicios gravados, públicos o privados, la empresa beneficiaria deberá presentar un informe mensual ante Procomer en el formato y por los medios informáticos que ésta disponga al efecto, quien a su vez lo remitirá al Ministerio de Hacienda y al Banco Central de Costa Rica.

Artículo 51.—El proveedor nacional incluirá dentro de la declaración mensual de recaudación del impuesto sobre las ventas (D-151) el monto de las ventas realizadas a empresas beneficiarias del régimen. El Ministerio de Hacienda utilizará esta información y la confrontará con la información que Procomer le remita de la Declaración Aduanera de Zona Franca, o el informe en caso de servicios, que realice la empresa beneficiaria.

El proveedor nacional deberá agregar a sus respectivos registros especiales de ventas, requeridos en la legislación del Impuesto General sobre las Ventas, la información sobre número de orden de compra o documento equivalente emitido por la empresa de zona franca y su fecha; cuando sus clientes sean empresas acogidas al régimen de zonas francas.

Artículo 52.—Para el trasiego de mercancías provenientes del territorio aduanero nacional, deberá utilizarse la factura comercial y la orden de compra o bien el documento equivalente a la orden de compra en caso de compras menores, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 50 del presente reglamento.

Artículo 53.—Para respaldar la venta a un beneficiario del régimen el proveedor nacional de servicios, materias y mercancías necesitará la orden de compra o el documento equivalente en caso de compras menores o servicios y tratándose de compras urgentes utilizará la copia de la factura con el respectivo “recibo conforme”, según se regula en el artículo 50 del presente reglamento. El proveedor deberá conservar en debido orden la copia de las facturas con el recibido conforme de las empresas de zonas francas.

Cuando la aduana de jurisdicción de la empresa beneficiaria del régimen de zonas francas, haya recibido de la empresa beneficiaria la transmisión de la declaración correspondiente se considerará que la exportación se ha concretado y por lo tanto que correspondía efectivamente el no pago del impuesto General sobre las Ventas y del Selectivo de Consumo.

La factura de venta del proveedor nacional deberá indicar además de los datos usuales la referencia al número y fecha de la orden de compra del beneficiario o de su documento equivalente.

Artículo 54.—El uso indebido de las materias, mercancías o servicios exentos, será causa suficiente para que el Ministerio de Hacienda proceda a la liquidación de tributos dejados de pagar y ejerza las acciones que la legislación vigente establezca.

SECCIÓN II

Ventas al territorio aduanero nacional

Artículo 55.—Las empresas beneficiarias del régimen pueden realizar ventas al territorio aduanero nacional, en los términos indicados en el artículo 22 de la ley 7210 y sus reformas, y estarán afectas a los tributos y procedimientos propios de cualquier importación proveniente del exterior. Además deberán presentar la Declaración Aduanera de Zona Franca para efectos de la salida del régimen. En el caso de empresas de servicios, cada venta al mercado local deberá contar con una factura comercial, que será la que respalde la transacción realizada para efectos tributarios, aduaneros y estadísticos, copia de la cual debe remitirse a Procomer. En el caso de servicios que impliquen el uso de materias y mercancías (por ejemplo repuestos), éstas deberán detallarse en una factura de manera independiente y presentar la Declaración Aduanera de Zona Franca que corresponda.

Los límites del 25% ó 50% según corresponda, que establece el citado artículo 22, se calcularán sobre el valor de las ventas totales y se aplicará en cada período fiscal a las empresas beneficiarias del régimen de zonas francas que realicen ventas locales.

Artículo 56.—Previo a la realización de estas ventas, la empresa beneficiaria deberá remitir a Procomer un detalle de la proyección de ventas que se realizarán durante el período correspondiente, en el formato establecido para tal efecto.

Artículo 57.—Cuando las empresas beneficiarias del régimen de zonas francas efectúen ventas de bienes y/o servicios en el territorio aduanero nacional, según lo señalado en el párrafo anterior, el porcentaje de exoneración sobre la importación de maquinaria, equipo y materias primas, así como el correspondiente a los tributos sobre las utilidades, se reducirá en la misma proporción que represente el valor de los bienes y servicios introducidos en el territorio aduanero nacional en relación con el valor total de las ventas y servicios de la empresa en cada uno de los períodos fiscales que corresponda.

Para efectos de cumplir con lo dispuesto en el párrafo último del artículo 22 de la Ley 7210 y sus reformas antes citado, el componente nacional del valor de los productos finales que se introduzcan en el territorio aduanero nacional formará parte de la base imponible para efectos de la determinación y liquidación de los impuestos correspondientes.

El cálculo de la proporción de los bienes y servicios introducidos en el territorio aduanero nacional, se realizará de conformidad con la fórmula siguiente:

$$\frac{\text{VALOR VL (Ventas Locales)}}{\text{VALOR VT (Ventas Totales)}} \times 100 = \text{Porcentaje de Ventas Locales}$$

El cálculo de los impuestos correspondientes a cancelar por concepto de maquinaria, equipo y materia prima, se realizará de la forma siguiente:

$$\text{IT (Impuestos Totales)} \times \% \text{ de Ventas Locales} = \text{Impuestos a Pagar}$$

Además de lo anterior, para la determinación del monto de los tributos por pagar de la maquinaria, equipo y materias primas utilizados por la empresa en el proceso productivo de los bienes y servicios que se internen al territorio aduanero nacional, se seguirán las reglas siguientes:

- a) El beneficiario del régimen deberá aportar una certificación de la maquinaria, equipo y materias primas utilizadas en el proceso productivo de los productos finales objeto de venta local, extendida por un profesional competente, indicando el número de las Declaraciones Aduaneras de Zona Franca con las que se ingresaron al régimen.
- b) La Promotora del Comercio Exterior (Procomer) comunicará a la aduana de jurisdicción la proyección de las ventas totales y ventas locales para el período fiscal, expresado en cantidades, precio unitario y montos totales, con el propósito de que la aduana pueda establecer los controles pertinentes. Al concluir el período fiscal la Promotora del Comercio Exterior (Procomer) deberá comunicar la información definitiva de las ventas totales y locales realizadas por las beneficiarias, expresada en los mismos términos.
- c) El valor en aduanas de las mercancías se fijará de conformidad con los procedimientos de valor vigentes al momento de la aceptación de la declaración aduanera que liquide los tributos exonerados.

- d) La obligación tributaria por pagar se registrará por lo dispuesto en el artículo 55 inciso e) de la Ley General de Aduanas.
- e) Para la cancelación de los impuestos correspondientes deberá aplicarse en lo pertinente lo dispuesto en el procedimiento de importación definitiva vigente.
- f) Tratándose de materias primas adquiridas localmente que hayan sido incorporadas al producto final, para el pago de los impuestos selectivo de consumo, ventas e impuestos sobre las utilidades se aplicará el procedimiento que al efecto disponga la Dirección General de Tributación.
- g) La aplicación de la reducción de la exoneración de los tributos en la importación de maquinaria, equipo y materia prima, deberá realizarse al final de cada período fiscal, en el mismo porcentaje de ventas locales realizadas.
- h) Tratándose de la maquinaria y equipo, la reducción de la exención se extinguirá al concluir el plazo de cinco años, según lo previsto en el inciso b) párrafo quinto del artículo 20 de la Ley de Zonas Francas, o en un plazo menor cuando la sumatoria del porcentaje de las ventas locales, efectuadas durante cada período fiscal, alcance el cien por ciento, antes de cumplirse los cinco años.

SECCIÓN III

Subcontratación

Artículo 58.—Los beneficiarios establecidos de conformidad con el inciso a) del artículo 17 de la ley 7210 y sus reformas, podrán subcontratar parte de su producción o de su proceso de producción con:

- a) Otros beneficiarios del régimen de zonas francas.
- b) Cualquier persona física o jurídica establecida dentro del territorio aduanero nacional, siempre y cuando al menos el setenta y cinco por ciento del volumen total de la producción de la empresa acogida al régimen se realice dentro de la zona franca. En este caso, la empresa beneficiaria del régimen podrá internar temporalmente al territorio aduanero nacional las materias y mercancías objeto de la subcontratación.

Artículo 59.—Los beneficiarios que deseen subcontratar deberán presentar solicitud a Procomer en el formulario o archivo electrónico establecido al efecto.

Artículo 60.—Corresponde a la Administración de Procomer autorizar la subcontratación dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud.

Artículo 61.—El plazo autorizado para la subcontratación será fijado por Procomer de acuerdo con las necesidades del interesado y podrá prorrogarse si Procomer estima que las razones que motivaron la autorización se mantienen. En todo caso el plazo máximo, incluyendo las prórrogas, no podrá superar un año.

Artículo 62.—La subcontratación no requiere de la constitución de garantías, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley General de Aduanas. Además, la subcontratación queda sujeta al control y fiscalización aduaneros, establecidos en la Ley General de Aduanas y su Reglamento.

Artículo 63.—La empresa beneficiaria del régimen de zonas francas será responsable por el pago de cualquier obligación tributario-aduanera, generada por el incumplimiento de los términos de la subcontratación.

Artículo 64.—La empresa beneficiaria subcontratante debe rendir un informe al final del período de la subcontratación ante Procomer sobre los montos, porcentajes y condiciones de las operaciones subcontratadas y en el caso que se solicite prórroga se deberá presentar dicho informe de manera conjunta con la solicitud y quince días antes del vencimiento de la subcontratación. Si se encuentra alguna irregularidad de naturaleza aduanera, Procomer lo informará de inmediato a la aduana de jurisdicción, para lo que corresponda,. De igual forma los casos de incumplimiento de los términos de la subcontratación, que afecten los intereses tributario-aduaneros del Estado, serán informados por la aduana de jurisdicción a Procomer a efectos de que se inicie el procedimiento respectivo, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que resultaren aplicables.

Artículo 65.—Si la empresa beneficiaria subcontratante no presenta el informe al que hace referencia el artículo anterior o no ha cumplido con los términos en que fue autorizada la subcontratación, Procomer podrá revocar la autorización e informará al Ministerio de Comercio Exterior para el inicio del procedimiento correspondiente.

CAPÍTULO XII

Procedimientos aplicables al tránsito o trasiego de materias y mercancías

SECCIÓN I

Disposiciones generales

Artículo 66.—Todo tránsito o trasiego de materias y mercancías que se realice desde y hacia la zona franca, debe ajustarse a lo prescrito en el presente Capítulo, la Ley General de Aduanas y su Reglamento y demás políticas de operación que emita la Dirección General de Aduanas. En el caso de nacionalización de materias y mercancías, se aplicará, además, la normativa aduanera vigente.

Artículo 67.—Para cualquier trasiego de materias y mercancías que involucre un trámite aduanero, se exigirá la Declaración Aduanera de Zona Franca, excepto para las donaciones y la adquisición de servicios. Copia de esa declaración deberá ser remitida por la empresa o la aduana, según corresponda, a Procomer.

Asimismo, se requerirá el uso de los marchamos suplidos por Procomer, salvo en el caso de que se trate de internamientos temporales, donaciones, subcontrataciones, compras locales y traslados o ventas entre empresas localizadas en el mismo parque industrial.

Artículo 68.—Procomer proveerá los formularios de Declaración Aduanera de Zona Franca, los cuales deben ser numerados consecutivamente. Procomer llevará un registro de fórmulas suplidas, utilizadas y nulas, si las hubiera, por beneficiario.

Artículo 69.—Para los procedimientos aplicables al tránsito o trasiego de materias y mercancías las empresas beneficiarias del régimen de zonas francas deberán regularse por lo que al efecto establezcan la Ley General de Aduanas, su Reglamento y cualquier otra disposición de carácter administrativo debidamente razonada y de alcance general.

SECCIÓN II

Internamiento de materias, mercancías y otros procedentes del extranjero

Artículo 70.—Todo beneficiario podrá internar al amparo del régimen las materias y mercancías indicadas en el artículo 20 de la ley 7210 y sus reformas.

Artículo 71.—En el caso de materias y mercancías procedentes del extranjero, los bultos deberán contener, además de las marcas y contramarcas de cada uno, un rótulo con la inscripción “Zona Franca, Costa Rica”, salvo casos especiales en que resulte materialmente imposible. Caso contrario, la aduana debe iniciar las acciones sancionatorias pertinentes.

SECCIÓN III

Trasiego de materias y mercancías destinadas al territorio aduanero nacional

Artículo 72.—El trámite de nacionalización de materias y mercancías provenientes de una zona franca se hará de conformidad con el presente reglamento, utilizando la Declaración Aduanera de Zona Franca y los procedimientos aduaneros aplicables.

SECCIÓN IV

Internamientos temporales

Artículo 73.—Los beneficiarios pueden internar temporalmente al territorio aduanero nacional maquinaria, vehículos y equipo provenientes de las zonas francas cuando esto se haga con el objeto de transformar, reparar, reconstruir, montar, ensamblar o para la incorporación a conjuntos, en caso de ferias, entrenamientos de personal, presentaciones de las compañías o demostraciones, siempre y cuando la actividad no represente la elaboración de parte del proceso productivo de la empresa instalada en la zona franca. Lo anterior previo cumplimiento de lo establecido en el párrafo tercero del artículo 24 de la Ley 7210 y sus reformas.

Artículo 74.—Los beneficiarios pueden internar temporalmente al territorio aduanero nacional materias y mercancías para efectos de la subcontratación, en los términos de la Sección III del Capítulo XI de este reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 75.—En estos casos, igualmente el beneficiario debe transmitir a la aduana de jurisdicción la correspondiente Declaración Aduanera de Zona Franca y someter la mercancía a la revisión que disponga el sistema selectivo y aleatorio, en la Declaración Aduanera se consignará el plazo requerido para la permanencia de las materias y mercancías internadas temporalmente al territorio aduanero nacional.

SECCIÓN V

Trasiego entre beneficiarios o entre estos y las plantas satélites

Artículo 76.—Para el trasiego de materias y mercancías entre beneficiarios del régimen, así como para el tránsito de materias y mercancías de una zona franca a la planta satélite y viceversa, deberá utilizarse como respaldo la Declaración Aduanera de Zona Franca. En el segundo supuesto no se requerirá la rendición de garantía.

SECCIÓN VI

Ventas amparadas a otros regímenes especiales de exportación

Artículo 77.—Los beneficiarios pueden realizar toda clase de ventas a las personas físicas o jurídicas beneficiarias de otros regímenes especiales de exportación, previa autorización de Procomer. Procomer deberá pronunciarse al respecto en el plazo máximo de dos días hábiles.

Artículo 78.—Las ventas que se realicen a los beneficiarios del régimen de perfeccionamiento activo deben contar con la autorización de Procomer.

CAPÍTULO XIII

Mermas, subproductos y desperdicios

Artículo 79.—En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 16 de la ley 7210 y sus reformas, los beneficiarios que decidan desechar mermas, subproductos y desperdicios deberán comunicarlo por escrito a la municipalidad del cantón donde se ubiquen. La municipalidad deberá presentarse a retirar las mermas, subproductos y desperdicios dentro de un plazo de tres días contados a partir de la comunicación, levantando un acta que deberá ser firmada por el funcionario del puesto de aduana.

En caso de que la municipalidad no se presente dentro de ese plazo, o que manifieste no tener interés en obtener dichos bienes, el beneficiario puede donarlos, destruirlos o nacionalizarlos previo pago de los impuestos de conformidad con lo dispuesto en este Capítulo.

Artículo 80.—Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo anterior, los beneficiarios, por medio del Instituto Mixto de Ayuda Social, pueden donar materias primas, bienes terminados, bienes semielaborados, desperdicios y bienes de capital a instituciones de beneficencia, centros de educación e instituciones del Estado mediante el procedimiento que aquí se establece.

Artículo 81.—Al realizarse la donación, la aduana de jurisdicción verificará que la misma se realice a instituciones de beneficencia, centros de educación e instituciones del Estado contra la lista que emita semestralmente el IMAS, esta lista podrá ser modificada previa autorización de esa institución, además debe levantar un acta de la cual entregará una copia al beneficiario de la donación, otra a la aduana de jurisdicción y otra al donante, manteniendo en su poder el acta original. Dicha acta tiene carácter de Declaración Aduanera de Zona Franca y será utilizada para el traslado de las materias y mercancías objeto de la donación.

Artículo 82.—Cuando fuere necesario destruir mermas o desperdicios que formen parte o sean consecuencia del proceso productivo del beneficiario, éste formulará la solicitud de autorización a la aduana de jurisdicción.

De la destrucción se levantará un acta firmada por el funcionario aduanero y el representante del beneficiario.

CAPÍTULO XIV

Abandono

Artículo 83.—Las materias y mercancías, internadas en las zonas francas, sólo causarán abandono a favor del Fisco en los siguientes casos:

- a) Cuando su propietario haga renuncia expresa de ellas, la que deberá ser por escrito y comunicada a Procomer y a la aduana de jurisdicción.
- b) Cuando se dé el supuesto establecido en el artículo 56 inciso f) de la Ley General de Aduanas.

En ambos casos la aduana de jurisdicción procederá de conformidad con la legislación respectiva y lo comunicará a Comex. En caso de remate, se procederá de conformidad con el artículo 73 y siguientes de la Ley General de Aduanas y artículos 188 y siguientes de su Reglamento.

CAPÍTULO XV

De las Fusiones

Artículo 84.—Aquellas empresas beneficiarias del régimen de zonas francas que deseen fusionarse entre sí, lo comunicarán a Procomer, de previo a formalizar la fusión. En tal gestión indicarán los niveles de empleo e inversión que pretenden mantener. De llegar a determinarse que con motivo de la fusión, la empresa resultante se encuentra bajo las condiciones del artículo 20 bis de la Ley de Régimen de Zonas Francas, para efectos del disfrute de los beneficios fiscales sujetos a plazo, se mantendrá el otorgado en el acuerdo ejecutivo de la empresa de ingreso más reciente al régimen; de no ser así, se le aplicará el plazo de la empresa con mayor antigüedad en el régimen.

Artículo 85.—Cuando dos o más empresas beneficiarias del régimen se fusionen sin cumplir el trámite previsto en el artículo anterior, la nueva empresa o la que prevalezca, deberá cumplir con el nivel de empleo e inversión de todas las beneficiarias. El acuerdo ejecutivo que autoriza la fusión deberá contemplar la suma de dichos niveles de inversión y empleo. Para efectos de calcular el plazo de los incentivos del régimen se tomará el contemplado por el acuerdo ejecutivo de otorgamiento de la que presente el ingreso más antiguo al régimen.

Artículo 86.—En cualquiera de los supuestos que regulan los dos artículos anteriores, la empresa deberá presentar a Procomer en un plazo máximo de un mes contado a partir de la inscripción en el Registro Público, los siguientes documentos:

- a) Certificación notarial de inscripción de la fusión en el Registro Público.
- b) Copia certificada del acta protocolizada donde se tomó el acuerdo de fusión.
- c) Copia de la publicación realizada en el Diario Oficial *La Gaceta*.
- d) Solicitud de modificación del acuerdo ejecutivo de otorgamiento debidamente firmada por el representante legal de la empresa. En caso de que la empresa cuente con varias plantas se debe indicar cuál planta será la principal.

CAPÍTULO XVI

Disposiciones finales

Artículo 87.—Corresponde a Procomer recibir, evaluar y tramitar las solicitudes de interesados en acogerse al régimen de zonas francas, así como ejercer el control sobre los montos de inversión y demás parámetros incluidos en el acuerdo ejecutivo de otorgamiento del régimen. Corresponde igualmente a Procomer recibir y evaluar los informes anuales que deben presentar las empresas beneficiarias e intervenir en los trámites expresamente indicados como de su competencia en este reglamento.

Corresponde al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Comercio Exterior, acordar el otorgamiento del régimen, su revocatoria y las modificaciones a los acuerdos ejecutivos correspondientes, así como iniciar y concluir los procedimientos sancionatorios que sean pertinentes, todo con base en los informes técnicos y recomendaciones de Procomer y de las dependencias competentes del Ministerio de Hacienda.

Todo lo relativo al control y fiscalización de las operaciones aduaneras y las exoneraciones tributarias es competencia de las dependencias correspondientes del Ministerio de Hacienda, y en lo que corresponda de Procomer, esta última cuando su intervención esté prevista en la ley 7210 y sus reformas o este reglamento.

Cuando en el ejercicio de sus competencias Procomer detecte la posible existencia de irregularidades aduaneras o tributarias, lo comunicará de inmediato al Ministerio de Hacienda para los efectos legales correspondientes. Igualmente, las dependencias competentes del Ministerio de Hacienda deben informar a Procomer de cualquier irregularidad que detecten y que pueda servir de base para el inicio de un procedimiento sancionatorio al amparo del artículo 32 de la ley 7210 y sus reformas. Con base en esa información y, si fuera del caso, en sus propias indagaciones, Procomer debe recomendar al Ministerio de Comercio Exterior el inicio del procedimiento sancionatorio correspondiente con la mayor brevedad posible, en los términos del citado artículo 32.

Artículo 88.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Reformas a la Ley de Régimen de Zonas Francas, N° 7830 de 22 de setiembre de 1998, autorizase a la Dirección General de Aduanas para que, mediante resolución y tomando en cuenta las circunstancias especiales de las empresas proveedoras de servicios y las empresas administradoras de parques destinados a empresas proveedoras de servicios que se acojan al régimen de zonas francas, pueda exceptuar a dichas empresas, total o parcialmente, según las circunstancias de cada caso, de los requisitos para la recepción y despacho de mercancías aplicables en su condición de auxiliares de la función pública aduanera y contenidos en el Reglamento a la Ley General de Aduanas y demás disposiciones conexas. Lo anterior sin perjuicio de otras medidas alternativas de control que se establezcan, adecuadas a la naturaleza y la actividad de las empresas proveedoras de servicios.

Artículo 89.—Procomer procurará proveer a la Dirección General de Aduanas las facilidades requeridas para el cumplimiento de su actividad fiscalizadora.

Artículo 90.—La Dirección General de Aduanas deberá informar al Ministerio de Comercio Exterior y a Procomer de las sanciones firmes que esta adopte contra empresas acogidas al régimen de zonas francas.

Artículo 91.—Derógase el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas, decreto ejecutivo N° 28451-H-COMEX del 22 de diciembre de 1999 y sus reformas.

Artículo 92.—Rige a partir de su publicación.

TRANSITORIOS

Transitorio I.—Tendrán derecho a la exención adicional del impuesto sobre la renta en caso de reinversiones, a que se refiere el inciso l) del artículo 20 de la ley 7210 y sus reformas y el artículo 39 de este reglamento, las empresas beneficiarias del régimen que realicen dichas reinversiones a partir del 8 de octubre de 1998, fecha de publicación de las reformas a la ley 7210 introducidas por la ley 7830, siempre y cuando dichas reinversiones se realicen después de cumplirse el cuarto año y antes de iniciarse el octavo año de operaciones de la respectiva empresa al amparo del régimen de zonas francas, tal y como lo dispone el inciso l) del artículo 20 antes citado, y se cumpla con las demás disposiciones aplicables de la ley 7210 y sus reformas y este reglamento.

Transitorio II.—Las empresas establecidas en zonas de menor desarrollo relativo, que se hayan acogido al régimen de zonas francas y que hayan presentado la primera solicitud de acogerse a la Bonificación con anterioridad al 8 de octubre de 1998, tendrán derecho a que se les continúe otorgando la Bonificación de conformidad con las reglas vigentes antes de esa fecha, hasta el vencimiento del plazo de cinco años, siempre que cumplan con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.

Transitorio III.—Las empresas que se hayan acogido al régimen de zonas francas y que hayan solicitado autorización para realizar ventas al territorio aduanero nacional con anterioridad al 8 de octubre de 1998 se registrarán, en cuanto al porcentaje de ventas al territorio aduanero nacional, por el porcentaje vigente antes de esa fecha.

Transitorio IV.—Hasta tanto se realicen los ajustes pertinentes con respecto a la transmisión de la Declaración Aduanera de Zona Franca mensual, requerida a la empresa de zona franca para efectos de sus compras locales, la empresa y los proveedores deberá utilizar el procedimiento de compras locales anterior. En todo caso estos ajustes deberán realizarse dentro del plazo máximo de tres meses a partir de la entrada en vigencia de este reglamento.

Transitorio V.—Hasta tanto se realicen los ajustes pertinentes con respecto a la transmisión de la Declaración Aduanera de Zona Franca la empresa deberá utilizar el procedimiento vigente para tal efecto. En todo caso estos ajustes deberán realizarse dentro del plazo máximo de tres meses a partir de la entrada en vigencia de este reglamento.

Transitorio VI.—El Ministerio de Hacienda comunicará a las empresas y entidades públicas o privadas, proveedoras de los servicios públicos, el no requerimiento del uso de la nota genérica para efectos de la exención del impuesto general sobre las ventas, según lo disponen los artículos 9 de la ley que regula este impuesto y 23 de la Ley 7210 y sus reformas.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los dieciocho días del mes de junio del año dos mil uno.

MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA.—Los Ministros de Comercio Exterior, F.Tomás Dueñas y de Hacienda a. i, Carlos Muñoz Vega.—1 vez.—(Solicitud N° 43913).—C-237620.—(D29606-43195).

LEY GENERAL DE ADUANAS

N° 7557

LEY GENERAL DE ADUANAS

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA,

DECRETA:

CAPITULO V De los regímenes liberatorios del pago de tributos aduaneros

SECCION I Zonas francas

Artículo 175.-- Delimitación de las zonas francas Los límites del área geográfica en que esté ubicada una empresa beneficiaria del régimen de zona franca, deben estar claramente determinados de tal forma que la entrada y salida de personas, vehículos, unidades de transporte o mercancías deban realizarse necesariamente por los puestos o lugares destinados al control aduanero.

Los horarios de operación serán los establecidos por el Servicio Nacional de Aduanas, sin perjuicio de que se autoricen operaciones fuera de las horas hábiles de servicio. El órgano administrador del régimen podrá suplir los recursos económicos que garanticen la continuidad en la prestación de los servicios aduaneros las veinticuatro horas del día.

Artículo 176.-- Control aduanero La autoridad aduanera ejercerá, entre otros, los siguientes controles aduaneros:

- a) Vigilancia permanente o temporal en los límites y vías de acceso.
- b) Comprobación del uso y destino de las mercancías, según el fin para el cual fueron ingresadas en el régimen.
- c) Inspección de las empresas beneficiadas.

El órgano administrador del régimen debe suministrar a la autoridad aduanera la información pertinente sobre las operaciones realizadas por las empresas por los medios que establezca la Dirección General de Aduanas, sin perjuicio de la facultad de la autoridad aduanera para solicitar, directamente, a las empresas los registros de costos y procesos de producción, inventarios permanentes y los registros contables y sus anexos de las amparadas en el régimen, conforme a lo que señalen las disposiciones reglamentarias correspondientes.

...

CAPITULO VI Regímenes de perfeccionamiento

SECCION I Régimen de perfeccionamiento activo

Artículo 179.-- Régimen de perfeccionamiento activo El régimen de perfeccionamiento activo es el régimen aduanero que permite recibir mercancías en el territorio aduanero nacional. con suspensión de toda clase de tributos y bajo rendición de garantía. Estas mercancías deben ser reexportadas, dentro de los plazos que determinen los reglamentos, después de ser sometidas a un proceso de transformación, reparación, reconstrucción, montaje, ensamblaje o incorporadas en conjuntos, maquinaria, equipo de transporte en general o aparatos de mayor complejidad tecnológica

y funcional o utilizadas para otros fines análogos, en las condiciones establecidas reglamentariamente y en las disposiciones que, al efecto, emita el órgano administrador competente. Artículo 180.-- Atribuciones del órgano administrador competente Corresponde al órgano administrador del régimen:

- a) Definir las políticas de aplicación y desarrollo del régimen.
- b) Otorgar y cancelar las autorizaciones para el régimen en cada caso.
- c) Determinar las mercancías que podrán ingresar en el país mediante este régimen y los porcentajes de mermas y desperdicios, conforme se disponga en la vía reglamentaria.

El órgano administrador deberá coordinar sus funciones y actividades con la Dirección General de Aduanas, la que nombrará un representante ante él.

Artículo 181.-- Control de la autoridad aduanera Sin perjuicio de las atribuciones establecidas en esta ley, corresponde a la autoridad aduanera el control sobre el uso y destino de las mercancías acogidas en el régimen.

En el ejercicio de ese control, la autoridad aduanera podrá:

- a) Revisar los registros de costos y procesos de producción, los registros de inventarios permanentes y los registros contables y sus anexos de las mercancías amparadas al régimen.
- b) Controlar el uso correcto de las mercancías, según el destino para el cual fueron ingresadas en el régimen.
- c) Controlar el movimiento, uso y destino de las mercancías sus garantías, destino de los desperdicios y donaciones de acuerdo con los procedimientos que, al efecto, establezca la Dirección General de Aduanas.

Artículo 182.-- Obligaciones de las empresas beneficiarias Las empresas acogidas a esta modalidad deberán cumplir con las siguientes obligaciones sin perjuicio de las que le correspondan como auxiliares de la función pública aduanera:

- a) Iniciar operaciones dentro de un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación de la resolución que les autoriza el régimen. Este plazo podrá ser prorrogado por el órgano administrador hasta por otros seis meses, previa solicitud justificada del interesado. Vencido el plazo sin iniciar operaciones, se tendrá por cancelada la autorización.
- b) Facilitar a la autoridad aduanera la información de sus actividades y registros de operaciones.
- c) Presentar, en los plazos que fije el reglamento, los reportes e informes de sus operaciones ante la autoridad aduanera.
- d) Identificar plenamente la maquinaria, equipo y repuestos siguiendo las disposiciones que, al efecto, emita la Dirección General de Aduanas.
- e) Rotular en forma visible con la razón social las instalaciones donde opere la empresa.

- f) Integrarse en los sistemas informáticos autorizados por la Dirección General de Aduanas.
- g) Inscribirse ante la aduana competente y mantener el registro actualizado.
- h) Cumplir con las disposiciones de organización, procedimientos y control que emita la Dirección General de Aduanas.
- i) Mantener toda la información relativa a los ingresos, importaciones y reexportaciones de mercancías, en los registros o formatos oficiales diseñados o autorizados por la Dirección General de Aduanas; además, tenerlos a disposición de la autoridad aduanera para el ejercicio del control, por un plazo mínimo de cinco años.
- j) Cumplir con las normas relativas a depósito y ubicación de mercancías, conforme se disponga en el reglamento.
- k) Cualquier otra obligación o condición operativa que se establezca en el reglamento.

Artículo 183.-- Responsabilidad tributaria La empresa es responsable por los daños o pérdidas causadas a las mercancías que permanecen en sus recintos, queda obligada al pago de los tributos correspondientes, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.

Las mercancías internadas al amparo del régimen deberán permanecer en los locales autorizados.

Artículo 184.-- Desafectación del régimen La desafectación del régimen se probará mediante los sistemas determinados por vía reglamentaria. Se tomará como base los reportes y las declaraciones de ingreso, uso y consumo, actas de donación y destrucción, reexportaciones e importaciones definitivas efectuadas.

Artículo 185.-- Gravamen prendario legal La maquinaria, equipo y materias primas amparados al régimen soportarán gravamen prendario legal en primer grado en favor del fisco, sobre el cual se deberá emitir un título de prenda aduanera que será inscrito a instancia de la autoridad aduanera o de la propia empresa interesada en el Registro de Prendas del Registro Público, sin pago de ningún tributo. No será necesaria garantía adicional.

Los propietarios de los bienes que ingresen al amparo de este régimen, por el simple hecho de remitirlos al país, otorgarán poder suficiente al consignatario para imponer ese gravamen, el cual tendrá prioridad sobre cualquier otro gravamen o garantía.

La autoridad aduanera ejecutará la prenda cuando al vencimiento del plazo de permanencia de las mercancías, estas no hayan sido reexportadas o importadas definitivamente.

Igualmente, será ejecutada la garantía cuando se demuestre que la empresa ha usado indebidamente o dado un fin distinto a la maquinaria, el equipo o las materias primas, sin perjuicio de las demás sanciones aplicables.

Artículo 186.-- Destino de los desperdicios, subproductos y muestras

Los desperdicios y subproductos deberán ser reexportados, importados definitivamente o donados al Estado.

Las muestras, desperdicios y subproductos que no puedan ser retornados al extranjero o donados, deberán ser destruidos bajo supervisión de la autoridad aduanera.

Los beneficiarios podrán donar bienes semielaborados, residuos, productos de segunda calidad, muestras, repuestos, accesorios y bienes de capital al órgano competente del Ministerio de Hacienda, que a su vez los podrá destinar a instituciones de beneficencia, centros de educación e instituciones del Estado

**REGLAMENTO A LA LEY GENERAL DE ADUANAS
LEY No. 7557 DE 20 DE OCTUBRE DE 1995
Nº 25270-H**

**EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA,**

En uso de las facultades que le confieren los incisos 3), 10) y 18) del artículo 140 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, Considerando:

I.- Que mediante Ley N(7485 de 6 de abril de 1995 se aprobó el Protocolo de Modificación del Código Aduanero Uniforme Centroamericano II.

II.- Que mediante Ley N(7557 de 20 de octubre de 1995 se promulgó la Ley General de Aduanas.

III.- Que de acuerdo con el Transitorio V de la Ley General de Aduanas, el Poder Ejecutivo debe proceder a su reglamentación. Por tanto,

DECRETAN:

El siguiente,

...

**SECCION IV
Empresas del régimen de perfeccionamiento activo**

Artículo 154.-Procedimiento específico de autorización de las empresas que se acojan al régimen de perfeccionamiento activo

Para el otorgamiento de la condición de Auxiliar, además de los requisitos exigidos por la legislación especial, las empresas que se acojan al régimen de perfeccionamiento activo, deberán acreditar ante el órgano administrador del régimen, el cumplimiento los requisitos generales y específicos que la Ley y este reglamento establecen para esta categoría de Auxiliar.

Artículo 155.-Requisitos para la recepción y despacho de las mercancías Para la recepción y despacho de mercancías de importación y exportación en sus instalaciones, la empresa de perfeccionamiento activo deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- a. Contar con instalaciones adecuadas y deslindadas de sus áreas de perfeccionamiento, para realizar operaciones de recepción, inspección, manejo de carga y despacho de mercancías.
- b. Contar con equipo para realizar las operaciones indicadas en el literal anterior.
- c. Regular el acceso a las instalaciones de forma que se garantice la seguridad de las mercancías.

Para los efectos de este artículo, la aduana de control realizará la inspección de las instalaciones correspondientes. En ningún caso se autorizará la solicitud si el dictamen de la aduana fuere desfavorable.

Artículo 156.-Obligaciones adicionales

Las empresas de perfeccionamiento activo deberán cumplir, además, con las siguientes obligaciones:

- a. Solicitar la inscripción de las prendas aduaneras en el registro respectivo del Registro Público dentro de un plazo de tres días hábiles posteriores al levante de las mercancías. Una vez inscritas deberán comunicar tal circunstancia a la aduana de control dentro de un plazo de tres días hábiles.
- b. Conservar copia de las declaraciones de entrada y salida de las mercancías, de las prendas aduaneras, de la resolución de autorización al régimen y de los módulos de producción autorizados, de los contratos de subcontratación de servicios y de los reportes rendidos al órgano administrador del régimen.
- c. Notificar a la autoridad aduanera sobre la ocurrencia de pérdidas, hurtos, robos, daños o cualquier otra circunstancia que afecte las mercancías ingresadas al amparo del régimen.
- d. Llevar registros de ingreso e inventario a través de sistemas informáticos u otros medios autorizados, de acuerdo con los requerimientos de información que establezca la Dirección General.

Artículo 157.-Cese definitivo o temporal de operaciones

Cuando una empresa de perfeccionamiento activo solicite voluntariamente el cese definitivo o temporal de sus operaciones, sin perjuicio de la comunicación que efectuará el órgano administrador del régimen, deberá hacerlo del conocimiento de la aduana de control, a efecto de que la autoridad aduanera proceda a constatar, en sus instalaciones, la existencia de mercancías sujetas al control aduanero y ordenar, en tal caso, el traslado a un depósito aduanero.

Una vez que se determine la inexistencia de obligaciones pendientes con el Fisco, la Dirección General procederá a la suspensión o cancelación de la condición de Auxiliar en el registro respectivo.

En caso de existir deudas tributarias aduaneras pendientes de cancelar, la Dirección General iniciará los procedimientos administrativos y judiciales pertinentes para su pago.

...

SECCION VII
Empresas de Zona Franca

Artículo 163.-Procedimiento específico de autorización de las empresas que se acojan al régimen de perfeccionamiento activo

Para el otorgamiento de la condición de Auxiliar, además de los requisitos establecidos por la legislación especial, las empresas que se acojan al régimen de zona franca deberán acreditar ante el órgano administrador del régimen, los requisitos generales y específicos que la Ley y este Reglamento establecen para esta categoría de Auxiliar.

Artículo 164.-Requisitos para la recepción y despacho de las mercancías

Para la recepción y despacho de mercancías de importación y exportación en sus instalaciones, la empresa de zona franca deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- a. Contar con instalaciones adecuadas y deslindadas de sus áreas de operación, para la recepción, inspección, manejo de carga y despacho de mercancías.
- b. Contar con equipo para realizar las operaciones indicadas en el literal anterior.
- c. Regular el acceso a las instalaciones de forma que se garantice la seguridad de las mercancías.
- d. Notificar a la autoridad aduanera sobre la ocurrencia de pérdidas, hurtos, robos, daños o cualquier otra circunstancia que afecte las mercancías ingresadas al amparo del régimen.
- e. Llevar registros de ingreso e inventario a través de sistemas informáticos u otros medios autorizados, de acuerdo con los requerimientos de información que establezca la Dirección General.

Para los efectos de este artículo, la aduana de control realizará la inspección de las instalaciones correspondientes. En ningún caso se autorizará la solicitud si el dictamen de la aduana fuere desfavorable.

Artículo 165.-Documentos que debe conservar la empresa

La empresa de zona franca deberá conservar copias de los formularios autorizados para el ingreso y salida de las mercancías, copia de la resolución de autorización al régimen, copia de los convenios de subcontratación de servicios con otras empresas y copia de los reportes rendidos al órgano administrador del régimen.

Artículo 166.-Cese definitivo o temporal de operaciones

Cuando una empresa de zona franca solicite voluntariamente el cese definitivo o temporal de sus operaciones, sin perjuicio de la comunicación que efectuará el órgano administrador del régimen, deberá hacerlo del conocimiento de la aduana de control, a efecto que la autoridad aduanera proceda a constatar, en sus instalaciones, la existencia de mercancías sujetas al control aduanero y ordenar, en tal caso, el traslado a un depósito aduanero.

Una vez que se determine la inexistencia de obligaciones pendientes con el Fisco, la Dirección General procederá a la suspensión o cancelación de la condición de Auxiliar en el registro respectivo.

En caso de existir deudas tributarias aduaneras pendientes de cancelar, la Dirección General iniciará los procedimientos administrativos y judiciales pertinentes para su pago.

...

CAPITULO X

Régimen de zona franca

SECCION I

Disposiciones generales

Artículo 474.-Procedimientos aplicables

El procedimiento para la autorización del tránsito y el despacho de mercancías destinadas a empresas que operen bajo el régimen de zona franca se efectuará de conformidad con lo establecido en los Títulos VI y VII, Capítulo I de este Reglamento, salvo las disposiciones en contrario de este Título. Las declaraciones aduaneras de este régimen se efectuarán con base en el formato del "Formulario Unico de Zona Franca" aprobado por la Dirección General.

Artículo 475.-Autorizaciones de otras autoridades no aduaneras

Las disposiciones de este Reglamento no podrán interpretarse en perjuicio de la competencia de otras autoridades no aduaneras que deban autorizar o intervenir en las operaciones efectuadas por las empresas beneficiarias del régimen.

SECCION II

Despacho de mercancías provenientes del extranjero

Artículo 476.-Aceptación de la declaración y aplicación del control de verificación

Aceptada la declaración aduanera, la aduana de control indicará si procede ordenar la verificación de la declaración mediante el reconocimiento físico de las mercancías.

Artículo 477.-Despacho de las mercancías sin reconocimiento físico

En caso de que no proceda realizar el acto de reconocimiento físico se comunicará al declarante la autorización del levante de las mercancías.

El declarante será responsable de supervisar la operación de descarga de la unidad de transporte y de comunicar inmediatamente a la aduana de control, cualquier diferencia con la información declarada a la aduana.

Artículo 478.-Realización del reconocimiento físico

De requerirse el reconocimiento físico de las mercancías, la aduana lo comunicará inmediatamente a la empresa y designará al funcionario encargado de realizar el reconocimiento. El funcionario competente se presentará a la empresa y procederá a ordenar la descarga de las mercancías de la unidad de transporte y a su reconocimiento físico. De existir conformidad entre el resultado del reconocimiento físico y la información declarada a la aduana, el funcionario autorizará inmediatamente el levante de las mercancías.

Artículo 479.-Discrepancias surgidas del reconocimiento físico

Si producto del reconocimiento físico se detectaren diferencias entre lo declarado y la información que debió declararse, el funcionario lo consignará y lo reportará a la aduana. En el mismo acto podrá tomar las medidas de seguridad respecto de las mercancías si las discrepancias versan sobre la cantidad o naturaleza de las mercancías efectivamente descargadas. La aduana efectuará las

correcciones y ajustes respectivos sobre la declaración e iniciará los procedimientos administrativos que correspondan, notificando de esta circunstancia al declarante.

SECCION III

Despacho de mercancías hacia el extranjero

Artículo 480.-Aceptación de la declaración y aplicación del control de verificación

Aceptada la declaración aduanera se procederá a ordenar la realización del reconocimiento físico o se autorizará el levante de las mercancías. La declaración deberá indicar el lugar en donde las mercancías se cargarán a una unidad de transporte o se embalarán para su transporte.

Artículo 481.-Despacho de las mercancías sin reconocimiento físico

En caso de que no proceda realizar el acto de reconocimiento físico, se comunicará al declarante la autorización del levante de las mercancías.

El declarante será responsable de supervisar las operaciones de carga o embalaje de las mercancías.

Cuando las mercancías deban cargarse en unidades de transporte para su tránsito hacia un puerto marítimo el declarante deberá colocar marchamos en la unidad de transporte y transmitir a la aduana de control la fecha, hora exacta de salida del vehículo y de la unidad de transporte y la identificación de los marchamos colocados.

Cuando las mercancías deban embalarsen para su salida por un puerto aéreo el declarante deberá transmitir a la aduana de control la finalización de la operación de embalaje y la fecha y hora aproximada de salida de las mercancías por vía aérea.

Artículo 482.-Realización del reconocimiento físico

De requerirse el reconocimiento físico de las mercancías, la aduana lo comunicará inmediatamente a la empresa y designará al funcionario encargado de realizar el reconocimiento. El funcionario competente se presentará inmediatamente a la empresa o al lugar de embalaje y procederá al reconocimiento físico. De existir conformidad entre el resultado del reconocimiento físico y la declaración y demás datos suministrados, el funcionario autorizará inmediatamente el levante de las mercancías, supervisará su carga o embalaje y verificará la colocación e identificación del marchamo en la unidad de transporte. El declarante procederá de conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo anterior.

Artículo 483.-Discrepancias surgidas del reconocimiento físico

Si producto del reconocimiento físico se detectaren diferencias entre lo declarado y la información que debió declararse, el funcionario lo consignará y lo reportará a la aduana. En el mismo acto podrá tomar las medidas de seguridad respecto de las mercancías si las discrepancias surgen sobre la cantidad o naturaleza de las mercancías. La aduana efectuará las correcciones y ajustes respectivos sobre la declaración e iniciará los procedimientos administrativos que correspondan, notificando esta circunstancia al declarante.

Las discrepancias que surjan del reconocimiento físico no interrumpirán el despacho de las mercancías más allá de lo necesario para tomar las muestras correspondientes o recabar las pruebas necesarias, en caso de existir indicios de la posible comisión de un delito aduanero.

Artículo 484.-Finalización de la operación

La aduana de salida comunicará a la aduana de control la salida del país de la unidad de transporte.

Artículo 485.-Otras operaciones del régimen

Los procedimientos para la autorización de las demás operaciones de las empresas beneficiarias del régimen de zona franca se regirán, en lo conducente, por las disposiciones de este Reglamento y del Reglamento a la Ley del Régimen de Zonas Francas de acuerdo con el régimen aduanero correspondiente.

CAPITULO X
Régimen de zona franca

SECCION I
Disposiciones generales

Artículo 474.-Procedimientos aplicables

El procedimiento para la autorización del tránsito y el despacho de mercancías destinadas a empresas que operen bajo el régimen de zona franca se efectuará de conformidad con lo establecido en los Títulos VI y VII, Capítulo I de este Reglamento, salvo las disposiciones en contrario de este Título. Las declaraciones aduaneras de este régimen se efectuarán con base en el formato del "Formulario Unico de Zona Franca" aprobado por la Dirección General.

Artículo 475.-Autorizaciones de otras autoridades no aduaneras

Las disposiciones de este Reglamento no podrán interpretarse en perjuicio de la competencia de otras autoridades no aduaneras que deban autorizar o intervenir en las operaciones efectuadas por las empresas beneficiarias del régimen.

SECCION II
Despacho de mercancías provenientes
del extranjero

Artículo 476.-Aceptación de la declaración y aplicación del control de verificación

Aceptada la declaración aduanera, la aduana de control indicará si procede ordenar la verificación de la declaración mediante el reconocimiento físico de las mercancías.

Artículo 477.-Despacho de las mercancías sin reconocimiento físico

En caso de que no proceda realizar el acto de reconocimiento físico se comunicará al declarante la autorización del levante de las mercancías.

El declarante será responsable de supervisar la operación de descarga de la unidad de transporte y de comunicar inmediatamente a la aduana de control, cualquier diferencia con la información declarada a la aduana.

Artículo 478.-Realización del reconocimiento físico

De requerirse el reconocimiento físico de las mercancías, la aduana lo comunicará inmediatamente a la empresa y designará al funcionario encargado de realizar el reconocimiento. El funcionario competente se presentará a la empresa y procederá a ordenar la descarga de las mercancías de la unidad de transporte y a su reconocimiento físico. De existir conformidad entre el resultado del reconocimiento físico y la información declarada a la aduana, el funcionario autorizará inmediatamente el levante de las mercancías.

Artículo 479.-Discrepancias surgidas del reconocimiento físico

Si producto del reconocimiento físico se detectaren diferencias entre lo declarado y la información que debió declararse, el funcionario lo consignará y lo reportará a la aduana. En el mismo acto podrá tomar las medidas de seguridad respecto de las mercancías si las discrepancias versan sobre la cantidad o naturaleza de las mercancías efectivamente descargadas. La aduana efectuará las correcciones y ajustes respectivos sobre la declaración e iniciará los procedimientos administrativos que correspondan, notificando de esta circunstancia al declarante.

SECCION III
Despacho de mercancías hacia el extranjero

Artículo 480.-Aceptación de la declaración y aplicación del control de verificación

Aceptada la declaración aduanera se procederá a ordenar la realización del reconocimiento físico o se autorizará el levante de las mercancías. La declaración deberá indicar el lugar en donde las mercancías se cargarán a una unidad de transporte o se embalarán para su transporte.

Artículo 481.-Despacho de las mercancías sin reconocimiento físico

En caso de que no proceda realizar el acto de reconocimiento físico, se comunicará al declarante la autorización del levante de las mercancías.

El declarante será responsable de supervisar las operaciones de carga o embalaje de las mercancías.

Cuando las mercancías deban cargarse en unidades de transporte para su tránsito hacia un puerto marítimo el declarante deberá colocar marchamos en la unidad de transporte y transmitir a la aduana de control la fecha, hora exacta de salida del vehículo y de la unidad de transporte y la identificación de los marchamos colocados.

Cuando las mercancías deban embalarsen para su salida por un puerto aéreo el declarante deberá transmitir a la aduana de control la finalización de la operación de embalaje y la fecha y hora aproximada de salida de las mercancías por vía aérea.

Artículo 482.-Realización del reconocimiento físico

De requerirse el reconocimiento físico de las mercancías, la aduana lo comunicará inmediatamente a la empresa y designará al funcionario encargado de realizar el reconocimiento. El funcionario competente se presentará inmediatamente a la empresa o al lugar de embalaje y procederá al reconocimiento físico. De existir conformidad entre el resultado del reconocimiento físico y la declaración y demás datos suministrados, el funcionario autorizará inmediatamente el levante de las mercancías, supervisará su carga o embalaje y verificará la colocación e identificación del marchamo

en la unidad de transporte. El declarante procederá de conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo anterior.

Artículo 483.-Discrepancias surgidas del reconocimiento físico

Si producto del reconocimiento físico se detectaren diferencias entre lo declarado y la información que debió declararse, el funcionario lo consignará y lo reportará a la aduana. En el mismo acto podrá tomar las medidas de seguridad respecto de las mercancías si las discrepancias rsan sobre la cantidad o naturaleza de las mercancías. La aduana ectuará las correcciones y ajustes respectivos sobre la declaración e iniciará los procedimientos administrativos que correspondan, notificando esta circunstancia al declarante.

Las discrepancias que surjan del reconocimiento físico no terrumpirán el despacho de las mercancías más allá de lo necesario para tomar las muestras correspondientes o recabar las pruebas necesarias, en caso de existir indicios de la posible comisión de un delito aduanero.

Artículo 484.-Finalización de la operación

La aduana de salida comunicará a la aduana de control la salida del aís de la unidad de transporte.

Artículo 485.-Otras operaciones del régimen

Los procedimientos para la autorización de las demás operaciones de las empresas beneficiarias del régimen de zona franca se regirán, en lo conducente, por las disposiciones de este Reglamento y del Reglamento a la Ley del Régimen de Zonas Francas de acuerdo con el régimen aduanero correspondiente.

...

CAPITULO XIII
Régimen de perfeccionamiento activo

SECCION I
Disposiciones Generales

Artículo 496.-Procedimientos aplicables

El procedimiento para la autorización del tránsito y el despacho de mercancías destinadas a empresas que operen bajo el régimen de perfeccionamiento activo, se efectuará de conformidad con lo establecido en los Títulos VI y VII, Capítulo I de este Reglamento, salvo las disposiciones en contrario de este Título. Las declaraciones aduaneras bajo este régimen se efectuarán en el "Formulario de Ingreso y Salida" aprobado por la Dirección General.

Artículo 497.-Autorización de otras autoridades no aduaneras Las disposiciones de este Reglamento no podrán interpretarse en perjuicio de la competencia de otras autoridades no aduaneras que deban autorizar o intervenir en las operaciones efectuadas por las empresas beneficiarias del régimen.

SECCION II

Despacho de mercancías provenientes del extranjero

Artículo 498.-Aceptación de la declaración y aplicación del control de verificación

Aceptada la declaración aduanera, la aduana de control indicará si procede ordenar la realización de la verificación de la declaración mediante el reconocimiento físico o si se autorizará el levante de las mercancías.

Artículo 499.-Despacho de las mercancías sin reconocimiento físico

En caso de que no proceda realizar el acto de reconocimiento físico se comunicará al declarante la autorización del levante de las mercancías.

El declarante será responsable de supervisar la operación de descarga de la unidad de transporte y de comunicar inmediatamente a la aduana de control cualquier diferencia con la información declarada a la aduana.

Artículo 500.-Realización del reconocimiento físico

De requerirse el reconocimiento físico de las mercancías, la aduana lo comunicará inmediatamente a la empresa y designará al funcionario encargado de realizar el reconocimiento. El funcionario competente se presentará a la empresa y procederá a ordenar la descarga de las mercancías de la unidad de transporte y a su reconocimiento físico. De existir conformidad entre resultado del reconocimiento físico y la información declarada a la aduana, el funcionario autorizará inmediatamente el levante de las mercancías.

Artículo 501.-Discrepancias surgidas del reconocimiento físico

Si producto del reconocimiento físico se detectaren diferencias entre lo declarado y la información que debió declararse, el funcionario lo consignará y lo reportará a la aduana. En el mismo acto podrá tomar las medidas de seguridad respecto de las mercancías si las discrepancias versan sobre la cantidad o naturaleza de las mercancías efectivamente descargadas. La aduana efectuará las correcciones y ajustes respectivos sobre la declaración e iniciará los procedimientos administrativos que correspondan, notificando de esta circunstancia al declarante.

SECCION III

Despacho de mercancías hacia el extranjero

Artículo 502.-Aceptación de la declaración y aplicación del control de verificación

Aceptada la declaración aduanera se procederá a ordenar la realización del reconocimiento físico o se autorizará el levante de las mercancías. La declaración deberá indicar el lugar en donde las mercancías se cargarán a una unidad de transporte o se embalarán para su transporte.

Artículo 503.-Despacho de las mercancías sin reconocimiento físico

En caso de que no proceda realizar el acto de reconocimiento físico se comunicará al declarante la autorización del levante de las mercancías. El declarante será responsable de supervisar las operaciones de carga o embalaje de las mercancías.

Cuando las mercancías deban cargarse en unidades de transporte para su tránsito hacia un puerto marítimo, el declarante deberá colocar marchamos en la unidad de transporte y transmitir a la aduana de control la fecha, hora exacta de salida del vehículo y de la unidad de transporte y la identificación de los marchamos colocados.

Cuando las mercancías deban embalsarse para su salida por un puerto aéreo, el declarante deberá transmitir a la aduana de control la finalización de la operación de embalaje y la fecha y hora aproximada de salida de las mercancía por vía aérea.

Artículo 504.-Realización del reconocimiento físico

De requerirse el reconocimiento físico de las mercancías la aduana lo comunicará inmediatamente a la empresa y designará al funcionario encargado de realizar el reconocimiento. El funcionario competente se presentará inmediatamente a la empresa o al lugar de embalaje y procederá al reconocimiento físico. De existir conformidad entre el resultado del reconocimiento físico y la declaración y demás datos suministrados, el funcionario autorizará inmediatamente el levante de las mercancías, supervisará su carga o embalaje y verificará la colocación e identificación del marchamo en la unidad de transporte. El declarante procederá de conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo anterior.

Artículo 505.-Discrepancias surgidas del reconocimiento físico

Si producto del reconocimiento físico se detectaren diferencias entre lo declarado y la información que debió declararse, el funcionario lo consignará y lo reportará a la aduana. En el mismo acto podrá tomar las medidas de seguridad respecto de las mercancías si las discrepancias versan sobre la cantidad o naturaleza de las mercancías. La aduana efectuará las correcciones y ajustes respectivos sobre la declaración e iniciará los procedimientos administrativos que correspondan, notificando de esta circunstancia al declarante.

Las discrepancias que surjan del reconocimiento físico no interrumpirán el despacho de las mercancías más allá de lo necesario para tomar las muestras correspondientes o recabar las pruebas necesarias, en caso de existir indicios de la posible comisión de un delito aduanero.

Artículo 506.-Finalización de la operación

La aduana de salida comunicará a la aduana de control la salida del país de la unidad de transporte.

Artículo 507.-Demás operaciones del régimen

Los procedimientos para la autorización de las demás operaciones de las empresas beneficiarias del régimen de perfeccionamiento activo se regirán, en lo conducente, por las disposiciones de este Reglamento y del Reglamento del Régimen de Admisión Temporal, Decreto Ejecutivo No. 22108-COMEX-H de 30 de marzo de 1993 y sus reformas, de acuerdo con el régimen aduanero correspondiente.

SECCION IV

Inscripción y liberación de la prenda

Artículo 508.-Plazo para la presentación de la inscripción del gravamen prendario ante la aduana de control

El declarante deberá presentar a la aduana de control en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de la autorización del levante de las mercancías, certificación extendida por el Registro de Prendas o por notario público de la inscripción del título de prenda aduanera que ampara las mercancías despachadas.

El formato de prenda aduanera será el establecido en el Reglamento al Régimen de Admisión Temporal y sus reformas.

Artículo 509.-Liberación del gravamen prendario

Con la presentación de la certificación del reporte de la declaración de salida de las mercancías, emitida por la aduana de control, se liberará al declarante por la prenda legal que recae sobre esas mercancías, la cual será útil para la anotación correspondiente el Registro de Prendas.

**REGLAMENTO DE LOS REGIMENES DE PERFECCIONAMIENTO ACTIVO Y
DEVOLUTIVO DE DERECHOS**

DECRETO N° 26285-H-COMEX

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y LOS MINISTROS DE HACIENDA Y COMERCIO
EXTERIOR

En uso de las facultades que le confieren el artículo 140 incisos 3) y 18) de la Constitución Política, el artículo 28 inciso b) de la Ley General de la Administración Pública, el Código Aduanero Uniforme Centroamericano II, La Ley General de Aduanas N° 7557, el Reglamento N° 25270-H y la Ley del Impuesto sobre la Renta N° 7092.

CONSIDERANDO

- 1.-Que la Ley N° 7092 del 21 de abril de 1988 y sus reformas " Ley del Impuesto sobre la Renta", en su Título V, Capítulo XXVII, estableció una serie de incentivos a las actividades dedicadas a la exportación de productos no tradicionales.
- 2.- Que igualmente, en la citada ley se creó el Régimen de Admisión Temporal, cuyos aspectos fundamentales y administrativos requieren ser reglamentados para que cumplan a cabalidad con la promoción de las exportaciones.
- 3.- Que la Ley General de Aduanas N° 7557 del 20 de octubre de 1996, en sus artículos 179 y subsiguientes estableció la normativa básica del Régimen de Perfeccionamiento Activo, mismo que requiere ser reglamentado, y que comprende al Régimen de Admisión Temporal, reconociendo los derechos adquiridos por los beneficiarios de dicho régimen.
- 4.- Que asimismo la Ley General de Aduanas en sus artículos 190 y 191, crea el Régimen Devolutivo de Derechos, delegando en el Poder Ejecutivo la facultad de reglamentarla.
- 5.- Que las necesidades de la globalización requieren de una legislación que fomente la capacidad de inserción de la economía nacional en los mercados mundiales.
- 6.- Que en aras de desarrollar reglamentariamente aquellas disposiciones legales.

POR TANTO:

DECRETAN:

el siguiente:

REGLAMENTO DE LOS REGIMENES DE PERFECCIONAMIENTO ACTIVO Y DEVOLUTIVO DE DERECHOS

TITULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Ambito de Aplicación

El presente Reglamento establece las normas necesarias para la aplicación del RÉGIMEN DE PERFECCIONAMIENTO ACTIVO, regulado por los artículos 179 a 186 de la Ley General de Aduanas y artículos 496 y siguientes de su Reglamento y del RÉGIMEN DEVOLUTIVO DE DERECHOS, establecido en los artículos 190 y 191 de la Ley General de Aduanas.

CAPITULO I ABREVIATURAS Y DEFINICIONES

Artículo 2.- Abreviaturas

Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por:

Auxiliar: Auxiliar de la Función Pública Aduanera
CAUCA II: Código Aduanero Uniforme Centroamericano II
COMEX: Ministerio de Comercio Exterior
Dirección: Dirección General de Aduanas
Gerencia: Gerencia de Operaciones de PROCOMER
Ley: Ley General de Aduanas
PROCOMER: Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica
Ministerio: Ministerio de Hacienda
Régimen: Perfeccionamiento o Devolutivo, según corresponda.

Artículo 3.- Definiciones

Para efectos del presente Reglamento, se entiende por:

Accesorios: Dispositivos o complementos que se ajustan a equipo o máquinas para apoyar o mejorar las operaciones de producción y que sirven para el funcionamiento de las máquinas o equipos a las que se incorporan.

Aduana de Control: Es aquella aduana que tiene competencia territorial en el lugar donde se ubican las instalaciones centrales del beneficiario del régimen y que ejerce control aduanero sobre él.

Beneficiario: Persona física o jurídica a la que se le autoriza para operar bajo el régimen.

Conjunto: Reunión de subconjuntos y piezas, el cual tiene una función específica dentro del producto.

Embalajes empaques: Artículos cuya finalidad sea de ayudar al transporte y protección de productos envasados o no.

Ensamblaje: Acoplamiento de componentes (piezas o partes, subconjuntos y conjuntos) que al ser integrados den como resultado un producto con características distintas de los componentes.

Envase: Artículos cuya finalidad es contener cualquier clase de productos.

Inicio de Operaciones: Proceso de instalación, producción, reexportación y/o venta de la Producción en el mercado nacional .

Maquinaria y Equipo: Aquellos bienes utilizados para elaborar o transformar otros productos, o servicios.

Manual de Procedimientos: Conjunto de normas internas dictadas por PROCOMER y la Dirección.

Materia Prima: Bienes que van a estar incorporados al producto final por medio de un proceso productivo.

Mercado local: Serán ventas a mercado local todas aquellas que se realicen a territorio costarricense o a Centroamérica.

Módulo de Producción: El conjunto de operaciones que se desarrolla para la elaboración de un producto determinado o para el mantenimiento, reparación, montaje, reconstrucción o ensamblaje de mercancías.

Montaje: Proceso de unión de piezas o partes para conformar subconjuntos.

Piezas o partes: Producto elaborado, no compuesto a su vez por otras partes o piezas.

Porcentaje de merma: Proporción en que disminuyen los insumos respecto de su cantidad inicial, después de ser sometidos o utilizados en un proceso productivo Reconstrucción: Volver a construir (rehacer) un bien.

Reparación: Componer el menoscabo sufrido con la finalidad de restablecer su función.

Residuo o desecho: Cantidad de mercancías remanentes del proceso productivo.

Subconjunto: La reunión de partes o piezas resultante del armado de las mismas o que forman parte de un conjunto.

Subproductos: Bienes que se obtienen en forma accesoria al proceso productivo principal.

Tolerancia Residual: Tolerancia de merma, porcentaje máximo de merma admitido. Margen o diferencia que se admite en la cantidad y peso de un producto admitido en un módulo productivo con respecto a la cantidad y peso ingresado de materias primas.

CAPITULO II AUXILIARES DE LA FUNCION PUBLICA ADUANERA

Artículo 4.- Carácter de Auxiliar de la Función Pública

Los beneficiarios acogidos al Régimen de Perfeccionamiento Activo, tendrán la condición de auxiliares de la función pública aduanera, previa autorización otorgada por la Dirección, para lo cual

deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Ley y su Reglamento y quedarán sujetos al régimen de responsabilidad previsto por aquellas disposiciones.

El incumplimiento de las obligaciones que como auxiliar correspondan a los beneficiarios del dicho régimen, será sancionado en los términos previstos en la Ley y su Reglamento.

Artículo 5.- Responsabilidad tributaria de los beneficiarios

Los beneficiarios del régimen serán responsables por los daños, averías o pérdidas ocurridas a las mercancías ingresadas al amparo del régimen, quedando obligados al pago de los tributos correspondientes, salvo en casos de su destrucción por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, a satisfacción de la autoridad aduanera.

CAPITULO III PROCEDIMIENTOS APLICABLES

Artículo 6.-Presentación de las declaraciones aduaneras.

Las declaraciones aduaneras de despacho de mercancías, al amparo de los regímenes regulados por este Reglamento, deberán ser presentadas por medio de un agente aduanero debidamente autorizado, siguiendo los procedimientos establecidos en los artículos 496 al 507 del Reglamento a la Ley.

Las declaraciones podrán ser presentadas anticipadamente al arribo del vehículo, una vez que se haya efectuado la transmisión electrónica del manifiesto de carga.

TITULO II REGIMEN PERFECCIONAMIENTO ACTIVO

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 7.- Solicitud de autorización al Régimen y documentos requeridos.

Todo interesado en acogerse al régimen, bajo cualquiera de las dos modalidades previstas, deberá presentar su solicitud ante la Gerencia, en el formulario que ésta ponga a su disposición, el cual deberá contener según la modalidad solicitada, al menos, la siguiente información.

1. Generalidades del beneficiario.
2. Productos y mercados a donde reexportará
3. Productos que venderá en el mercado local.
4. Lista de la maquinaria, equipo y repuestos que ingresará al amparo de una u otra modalidad.
5. Proceso de producción por producto reexportado o vendido en el mercado local, que incluya una relación insumo-producto (estándares de Producción)
6. Estructura de costos, para el cálculo del contenido nacional y el valor agregado.
7. Tratándose de personas jurídicas, deberá aportar una certificación notarial actualizada que contenga fecha y citas de inscripción de la sociedad en el Registro Público, cédula y personería jurídica, nombre y dirección del agente residente cuando los representantes legales de la compañía residan en el exterior, monto y composición del capital social, nombre de los

socios con base en libro de registro de accionistas. En caso de que un socio fuera a su vez una persona jurídica, deberá aportar certificación de socios de la misma, así sucesivamente hasta llegar a personas físicas.

8. Tratándose de persona física deberá presentar certificación de nacimiento, copia certificada de la cédula de identidad o residencia.
9. Aportar una declaración jurada de la negociación en el extranjero y copia de los contratos de venta de los productos por exportar.
10. En caso de productos textiles deberá incluir la autorización de la Oficina de cuotas textiles.

Artículo 8.- Procedimiento de autorización

Presentada la solicitud, la Gerencia verificará el cumplimiento de todos los requisitos exigidos y la elevará a conocimiento de COMEX, para que resuelva en definitiva dentro de un plazo de un mes contado a partir de la recepción de la solicitud.

En caso de defectos en la petición, la Gerencia otorgará al interesado un plazo de diez días hábiles para subsanarlos. Vencido dicho plazo sin que se hayan efectuado las correcciones pertinentes, la Gerencia la desestimará .

Igual procedimiento se seguirá cuando se presente cualquier otra solicitud relacionada con el régimen, salvo los casos previstos en el artículo 10º del presente reglamento.

Artículo 9.- Solicitud como auxiliar de la Función Pública Aduanera

Una vez autorizado por COMEX el funcionamiento bajo el régimen, el beneficiario deberá proceder a registrarse ante la Dirección, como auxiliar de la función pública aduanera, previo al inicio de operaciones, de conformidad con el procedimiento establecido por los artículos 77 y siguientes de la Ley y su Reglamento.

Artículo 10.- Otras solicitudes de autorización.

La Gerencia tramitará directamente , sin necesidad de autorización previa de COMEX, las solicitudes que a continuación se señalan, salvo que por su excepcionalidad o complejidad requieran de la intervención de COMEX:

- 1.- Solicitud de internamiento de bienes
- 2.- Solicitud para traspaso de bienes
- 3.- Solicitud para nacionalizar mercancías
- 4.- Solicitud para destrucción de bienes
- 5.- Solicitud para ampliación de mercados
- 6.- Solicitud para comprar localmente
- 8.- Solicitud para modificar partida arancelaria
- 9.- Solicitud para ampliar clientes en el exterior
- 10.- Solicitud para readecuación de periodo fiscal
- 11.- Solicitud para donar bienes
- 12.- Solicitud de prórroga del plazo de permanencia de prendas aduaneras no vencidas
- 13.- Solicitud de subcontratación de servicios
- 14.- Solicitud de prestación de servicios
- 15.- Solicitud de préstamos de maquinaria y equipo

CAPITULO II MODALIDADES DEL REGIMEN

Artículo 11.- Modalidades

El régimen de Perfeccionamiento Activo tendrá dos modalidades:

A.- Modalidad cien por ciento reexportación: A esta modalidad podrán acogerse aquellos beneficiarios del régimen que reexporten la totalidad de su producción.

B.- Modalidad reexportación y venta local: A esta modalidad podrán acogerse aquellos beneficiarios que reexporten y/o vendan en el mercado local su producción, en los términos y condiciones autorizados previamente por COMEX.

CAPITULO III MODALIDAD CIEN POR CIENTO REEXPORTACION

Artículo 12.- Destino de la Producción

Las empresas que se acojan a esta modalidad no podrán vender sus productos en el mercado local ni en centroamérica. La planta de producción deberá estar dedicada únicamente a la producción para la reexportación.

Artículo 13.-Objeto de la modalidad

Podrán ingresar bajo esta modalidad mercancías tales como:

- A. La materia en estado primario.
- B. Los productos semielaborados.
- C. Los productos terminados que se incorporen a otros artículos finales transformados o ensamblados en el país.
- D. Las etiquetas, marbetes o similares que se incorporen al producto por reexportar.
- E. Los envases, el material de empaque, y los embalajes.
- F. Las materias químicas o de otra naturaleza que sean determinables en cantidad y calidad necesarias para su utilización en el proceso, aunque se consuman o desaparezcan sin incorporarse al producto final, con excepción del combustible.
- G. La maquinaria, equipo, piezas, partes, accesorios y repuestos que intervengan directamente en el proceso productivo.
- H. Los moldes, dados, matrices, utensilios y otros dispositivos que sirvan de complemento a otros aparatos.
- I. Las muestras, modelos, patrones y artículos similares indispensables para el sistema de producción y para la instrucción del personal.

Artículo 14.- Plazo de permanencia

El plazo para la permanencia de las mercancías ingresadas al amparo de este régimen será el siguiente:

- a. Seis meses para las mercancías incluidas en el artículo anterior, excepto las contempladas en los incisos g y h. Dicho plazo podrá ser prorrogado por COMEX, previa solicitud del

interesado por una única vez, hasta por un periodo igual. En todo caso, tal solicitud deberá realizarse antes del vencimiento del plazo original.

- b. Cinco años para las mercancías contempladas en los incisos g y h del artículo anterior. Este plazo se considerará prorrogado automáticamente por periodos iguales, sin perjuicio de las acciones que pueden tomar las autoridades competentes del régimen, en caso de incumplimiento del mismo.

Artículo 15.- Vencimiento del plazo de permanencia

El incumplimiento de los plazos indicados, sin que las mercancías hayan sido reexportadas o importadas definitivamente, dará lugar a que la aduana de control proceda de conformidad con lo indicado por el artículo 36 del presente reglamento.

CAPITULO IV MODALIDAD REEXPORTACION Y VENTA LOCAL

ARTÍCULO 16.- Objeto de la modalidad

Podrán ingresar bajo esta modalidad, los siguientes grupos de mercancías:

- A. La materia en estado primario.
- B. Los productos semielaborados.
- C. Los productos terminados que se incorporen a otros artículos finales transformados o ensamblados en el país.
- D. Las etiquetas, marbetes o similares que se incorporen al producto por reexportar.
- E. Los envases, el material de empaque, y los embalajes.
- F. Las materias químicas o de otra naturaleza que sean determinables en cantidad y calidad necesarias para su utilización en el proceso, aunque se consuman o desaparezcan sin incorporarse al producto final, con excepción del combustible.
- G. La maquinaria, equipo, piezas, partes, accesorios y repuestos que intervengan directamente en el proceso productivo.
- H. Los moldes, dados, matrices, utensilios y otros dispositivos que sirvan de complemento a otros aparatos.
- I. Las muestras, modelos, patrones y artículos similares indispensables para el sistema de producción y para la instrucción del personal.

Artículo 17.- Plazo de Permanencia

El plazo para la permanencia de las mercancías ingresadas al amparo de esta modalidad se regirá por lo indicado en los artículos 14 y 15 de este Reglamento.

Artículo 18.- Venta local

Para la venta de productos en el mercado local y en Centroamérica, el beneficiario de esta modalidad deberá pagar la totalidad de los impuestos correspondientes a la importación definitiva de las mercancías.

Asimismo, las empresas acogidas a esta modalidad deberán cancelar, al momento del internamiento de la maquinaria y equipo bajo el régimen, la parte de los impuestos correspondientes, de conformidad con el porcentaje de ventas en el mercado local, sobre el total de las ventas de la

empresa. Para estos efectos, ROCOMER comunicará a la Aduana de Control, el porcentaje de las ventas efectuadas en el mercado local por el beneficiario, según los datos aportados por el mismo en la solicitud al régimen. Este porcentaje será verificado, al menos, anualmente por PROCOMER, con base en una certificación formal, que deberá aportar la empresa beneficiaria ante la Gerencia de Operaciones con el informe anual de operaciones. Ello no obsta que la Aduana ejerza sus potestades fiscalizadoras que la ley posibilita.

La omisión de este requisito, obligará a la empresa a cancelar la totalidad de los impuestos correspondientes a la maquinaria y equipo, indicada en los incisos G, y H del artículo 16 de este Reglamento.

CAPITULO V OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DEL REGIMEN

Artículo 19.- Obligaciones Adicionales

Además de las obligaciones señaladas en el artículo 182 de la Ley , los beneficiarios del régimen, deberán cumplir con lo siguiente:

1- Presentar ante la Gerencia, en los formatos que PROCOMER ponga a disposición, un informe anual sobre el uso y destino de las mercancías, que contenga al menos lo siguiente:

- a. El movimiento global en cantidades, pesos y valores de las mercancías admitidas, saldos en proceso, saldos en bodega, la producción reexportada o vendida en el mercado local, desglosada de acuerdo con el país al que fue destinada.
- b. El uso o consumo de repuestos, accesorios y similares y sus saldos en bodega.
- c. El movimiento de maquinaria y equipo.

Asimismo, a este informe se deberán adjuntar los siguientes documentos:

- a. Fotocopia de la declaración jurada del impuesto sobre la renta con sus anexos (estados financieros y desgloses).
- b. Tratándose de empresas, certificación de personería jurídica, citas de inscripción, cédula jurídica, composición del capital social, nombre y nacionalidad de los socios.
- c. Reporte de planillas de la Caja Costarricense del Seguro Social de los últimos tres meses del período fiscal en cuestión.

Este informe deberá ser presentado a la Gerencia durante los cuatro meses siguientes a la finalización del período fiscal autorizado, en los formularios que al efecto esta oficina confeccione.

2- Llevar un registro adecuado y actualizado de las operaciones efectuadas bajo el régimen según la modalidad aprobada.

3. Previo al inicio de las operaciones, solicitar a la Dirección, la autorización como auxiliar de la función pública aduanera.

4. Mantener las mercancías internadas al amparo del régimen, únicamente en los locales o plantas habilitados para cada beneficiario, los que se considerarán zona de operación aduanera.
5. Cumplir con las disposiciones laborales y el pago de las cuotas obrero patronales.
6. Llevar por separado, el control de inventarios, bajo el método PEPS, así como todos los registros contables y de operaciones, de las mercancías ingresadas al país, según el destino del producto final.
7. Cumplir con la legislación aduanera, el presente Reglamento y demás normativa conexa aplicable al régimen.

Artículo 20.- Suspensión precautoria de oficio

Como medida precautoria, COMEX suspenderá de oficio los beneficios del Régimen, a aquellos beneficiarios que no tienen aprobado su informe anual de operaciones dentro del citado plazo de cuatro meses.

Igualmente, procederá dicha suspensión, cuando la autoridad aduanera le informe a COMEX, que el beneficiario no ha devuelto dentro del plazo establecido en el artículo 34, el título de prenda aduanera debidamente inscrito ante el Registro de Prendas.

La suspensión precautoria será comunicada inmediatamente a la Dirección y a PROCOMER, para los efectos pertinentes y se mantendrá hasta tanto no se subsane la anomalía. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 42 del presente reglamento.

CAPITULO VI MERMAS, RESIDUOS, DESECHOS Y TOLERANCIA RESIDUAL DE LAS MERCANCIAS INGRESADAS BAJO EL REGIMEN.

Artículo 21.-Porcentaje uniforme de merma, residuo, desecho y tolerancia residual

PROCOMER definirá y autorizará un porcentaje uniforme por módulo de producción, por concepto de merma, residuos, desechos y tolerancia residual. Dicho porcentaje, debidamente autorizado, será el que utilizará la aduana de control como válido para disminuir los inventarios respecto a la mercancía internada al régimen; caso contrario, la aduana de control no podrá proceder con rebajo alguno en las cantidades y pesos de las mercancías ingresadas.

A efecto de que PROCOMER ajuste los porcentajes indicados en el párrafo anterior, a los seis meses después de haber iniciado operaciones, el beneficiario deberá presentar ante la Gerencia, una constancia emitida por el ingeniero respectivo, sobre el porcentaje de mermas, residuos, desechos y tolerancia residual, propio de su empresa.

Asimismo, deberá presentar cada año, con el informe anual de operaciones, una constancia actualizada.

ARTÍCULO 22- Variación de porcentajes

En caso de modificación de las condiciones y niveles de eficiencia en la estructura productiva de los beneficiarios, dichos porcentajes podrán variarse previa aprobación de la Gerencia.

ARTÍCULO 23- Control aduanero de los porcentajes aprobados.

Si la aduana de control tuviere indicios de que los porcentajes aprobados no responden a la realidad, informará lo pertinente a la Gerencia, quien deberá resolver lo que corresponda en un plazo de treinta días naturales. De persistir dudas fundadas, la aduana de control someterá el asunto a conocimiento de la División de Control y Fiscalización de la Dirección para que proceda según sus competencias.

**CAPITULO VII
DESTRUCCION Y DONACION DE MERCANCIAS
INGRESADAS AL AMPARO DEL REGIMEN**

ARTICULO 24- Destrucción de mercancías

Los residuos o desechos deberán ser retornados al extranjero, o bien destruidos o donados, siempre y cuando su plazo de permanencia no se encuentre vencido, de conformidad con el procedimiento que establezcan al efecto la Dirección General y PROCOMER.

Procederá la destrucción de residuos o desechos y de cualquier otra mercancía ingresada al amparo del régimen, previa autorización de PROCOMER y de la Aduana de Control.

Una vez autorizada la destrucción, la misma se efectuará en presencia de un representante del beneficiario y de un funcionario aduanero, quien verificará el acta que para tales efectos se levante.

ARTICULO 25- Donaciones de mercancías

Los beneficiarios podrán donar las mercancías semielaboradas, residuos, desechos, productos de segunda calidad, muestras, repuestos y accesorios y bienes de capital a la Proveduría Nacional del Ministerio para los efectos pertinentes, de conformidad con el procedimiento que establezca la Dirección.

**CAPITULO VIII
CONTRATACION, SUBCONTRATACION, TRASPASOS Y PRÉSTAMOS
DE MAQUINARIA Y EQUIPO INGRESADOS AL AMPARO DEL REGIMEN**

ARTICULO 26- Prestación de servicios

Los beneficiarios del régimen, cuya producción total sea reexportada, podrán utilizar la capacidad ociosa de la maquinaria y equipo en la prestación de servicios a otras empresas del régimen de Perfeccionamiento Activo modalidad cien por ciento reexportación, del Contrato de Exportación o de Zonas Francas, todo ello bajo estricto control aduanero y con previa anuencia de PROCOMER.

ARTICULO 27- Subcontratación de servicios

También se autoriza a los beneficiarios del régimen, previa autorización de PROCOMER, a subcontratar los servicios productivos de terceros, siempre y cuando, el beneficiario realice operaciones de producción y no se convierta en sólo comercializadora.

ARTICULO 28- Garantía para subcontratación

El beneficiario que desee subcontratar, deberá presentar la caución correspondiente al monto de impuestos de las mercancías objeto de la subcontratación, que deberá consistir en cualquiera de los tipos de garantía previstos en el artículo 65 de la Ley y el 93 del Reglamento a la Ley. El plazo de la subcontratación no podrá ser mayor al que se le permite al beneficiario para mantener las mercancías en el país. Dicha garantía se rendirá a favor de la Aduana de Control y se devolverá cuando se demuestre a satisfacción de la aduana, el reingreso de las mercancías a las instalaciones del beneficiario o en su caso al momento de su reexportación.

La Aduana de Control ejecutará las garantías en forma directa, sin procedimiento previo, si no se cumplen con los plazos establecidos para la reexportación, o no se hubiese dado la importación definitiva de las mercancías. Lo anterior sin perjuicio de las demás acciones a que pudiera quedar sujeto el beneficiario.

ARTICULO 29- Traspaso de mercancías

Prevía justificación del beneficiario, la Gerencia podrá autorizar el traspaso de mercancías de un beneficiario del régimen a otro. Para tales efectos y previo al efectivo traspaso, los beneficiarios deberán en forma simultánea cancelar la declaración aduanera de ingreso y su respectivo título de prenda aduanera y presentar la nueva documentación por parte del adquirente. El incumplimiento de lo anterior facultará a la Aduana de Control para la ejecución de la prenda aduanera, en los términos previstos en el artículo 38 del presente Reglamento.

ARTICULO 30- Préstamo de equipo

PROCOMER podrá autorizar el préstamo de equipo y maquinaria entre beneficiarios del Régimen acogidos a la modalidad cien por ciento reexportación, por un período determinado, previa solicitud, en la que deberán plasmarse, además de las justificaciones, el detalle de las características del equipo a prestar, con indicación de la marca, el modelo, el número de serie y el número de prenda. La responsabilidad respecto del equipo y maquinaria prestada será siempre del beneficiario que lo ingresó al régimen, pudiendo la Aduana de Control ejecutar las prendas respectivas en caso de cualquier incumplimiento.

El préstamo de equipo y maquinaria se efectuará de conformidad con el procedimiento que establezcan al efecto la Dirección y PROCOMER.

CAPITULO IX TITULO DE PRENDA ADUANERA

ARTICULO 31.- Emisión del Título de Prenda

Para toda declaración de ingreso al régimen de maquinaria y equipo deberá emitirse e inscribirse su correspondiente título de prenda aduanera. Tratándose de materia prima, el beneficiario presentará semestralmente, una prenda aduanera global, debidamente inscrita, por el valor de los impuestos correspondientes a la totalidad de la materia prima ingresada al régimen en el semestre anterior, o según un estimado si se iniciara operaciones en ese semestre. Para tal efecto, PROCOMER brindará a la Dirección la información requerida conforme con los datos proporcionados por las empresas, sin perjuicio de que la autoridad aduanera verifique dicha información contra la contenida en el Sistema de Información Aduanero.

ARTICULO 32.- Requisitos del Titulo de Prenda Aduanera

El gravamen prendario legal en primer grado, establecido en favor el Fisco sobre la maquinaria, equipo y materia prima ingresados al amparo del régimen , sus prórrogas, novaciones, cancelaciones parciales o totales o cualquier otro acto jurídico respecto de aquel título, deberá constar por escrito, en los formatos prenumerados y autorizados por la Dirección. Además, deberá estar libre de tachaduras, borrones, entrerrenglonaduras y suscribirse en letras, sin números ni abreviaturas, salvo cuando éstos formen parte de una marca o distintivo.

Todo error u omisión deberá ser salvado por nota aparte. Lo escrito al dorso del documento como parte complementaria al mismo se respaldará con la firma del beneficiario, de conformidad con el punto 12) del siguiente artículo.

ARTICULO 33.- Datos que debe contener el Titulo de Prenda

El título de Prenda Aduanera deberá contener al menos la siguiente información:

- 1- Nombre, apellidos, cédula de identidad y domicilio del beneficiario, si se trata de una persona física, o la razón social, denominación, cédula jurídica y domicilio si se tratare de una persona jurídica, quien para todos los efectos, es el deudor.
- 2- Monto en colones de los impuestos por los que responde, que al menos debe ser igual al monto total de la liquidación de impuestos de la declaración aduanera que corresponda. Tratándose de materia prima el monto será el establecido conforme al artículo 31 del presente reglamento.
- 3- Que la prenda se constituye en primer grado, indicando el nombre de la Aduana de Control, a cuyo favor se rinde.
- 4- Origen del gravamen, que será la importación de las mercancías al amparo del régimen, debiéndose indicar el número y la fecha de la respectiva declaración aduanera, en el caso de la maquinaria y equipo; o el período que cubre tratándose de materia prima.
- 5- Descripción, peso, valor CIF, y cantidad exacta de las mercancías dadas en garantía.
- 6- Lugar en que deberán permanecer las mercancías e indicación de quién asume la responsabilidad por su custodia.
- 7- Lugar donde se efectuará el pago del adeudo, que será el mismo donde se ubica la aduana de control.
- 8- Fecha de vencimiento de la prenda o de la prórroga, que nunca debe superar el plazo otorgado para la permanencia de la mercancía en el país.
- 9- Que una vez vencido el plazo de permanencia de las mercancías, sin que hayan sido reexportadas, importadas definitivamente o se demuestre que la empresa las ha usado indebidamente o dado un fin distinto al autorizado, la Aduana de Control iniciará el procedimiento previsto en los artículos 36 a 38 del presente Reglamento para el cobro del adeudo. Igualmente indicará que concluido dicho procedimiento y vencido el plazo de 5 días que establece el artículo 61 de la Ley, sin que voluntariamente se haya efectuado el pago, la Aduana de Control procederá a la venta efectiva de las mercancías en pública subasta, según las disposiciones previstas al efecto.

10- Que la inscripción en el Registro de Prendas del Registro Público es obligatoria y no estará sujeta al pago de ningún tributo, de conformidad con el artículo 185 de la Ley General de Aduanas, N° 7557, publicada en la Gaceta N°212 del 8 de noviembre de 1995.

11- Lugar y fecha de emisión del título.

12- Firma del beneficiario o su representante legal, debidamente autenticada por un abogado, o en su defecto, deberán firmar dos testigos presenciales del otorgamiento.

ARTICULO 34.-Plazo para la devolución del título de prenda aduanera debidamente inscrito.

El beneficiario deberá entregar a la aduana de control dentro de un plazo máximo de un mes, contado a partir de la fecha de aceptación de la respectiva declaración aduanera, el original del título de prenda aduanera debidamente inscrito ante el Registro de Prendas del Registro Público. En caso de incumplimiento, la Aduana de Control lo comunicará inmediatamente a COMEX, a efectos de que se proceda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del presente reglamento.

ARTICULO 35.- Liberación de la prenda aduanera ante el Registro Público

Una vez que las mercancías han sido reexportadas o importadas definitivamente dentro de los plazos establecidos, a solicitud del beneficiario el jerarca de la Aduana de Control o a quien este delegue, emitirá la respectiva comunicación al Registro de Prendas del Registro Público, a efectos de que cancele o libere el gravamen respectivo.

ARTICULO 36.- Vencimiento del plazo de permanencia de las mercancías dadas en prenda

El vencimiento del plazo de permanencia de las mercancías ingresadas al amparo del régimen, sin que hayan sido reexportadas o importadas definitivamente, obliga al beneficiario al pago de los tributos, multas, intereses y demás recargos de cualquier naturaleza, causados por su importación.

Igual obligación tendrán los beneficiarios que hayan usado indebidamente o dado un uso distinto al autorizado, a las mercancías amparadas al régimen, sin perjuicio de las demás sanciones aplicables.

ARTICULO 37.- Procedimiento para el cobro del adeudo

En cualquiera de los supuestos previstos en el artículo anterior, la aduana de control, procederá al cobro del adeudo, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 196 de la Ley.

Dictado el acto final que ordene el pago del adeudo, el beneficiario contará con un plazo de 5 días hábiles de conformidad con el artículo 61 de la ley, a partir de la notificación respectiva, para solventar su adeudo con el Fisco.

ARTICULO 38.- Ejecución de títulos de prenda aduanera

Transcurrido el plazo de 5 días previsto en el artículo anterior, sin que el beneficiario hubiese cancelado el adeudo correspondiente, la aduana procederá en forma inmediata a la efectiva ejecución de la prenda aduanera mediante el remate de las mercancías dadas en prenda, cuyo precio base para la venta estará constituido por el monto del adeudo más los intereses, multas y demás cargos aplicables.

El procedimiento para efectuar la subasta será el establecido por la Ley General de Aduanas y su Reglamento.

Si después de vendidas las mercancías, quedase un saldo en descubierto, la aduana de control informará lo pertinente a la Dirección, a fin de que se inicien las acciones cobratorias.

ARTICULO 39.- Medidas preventivas

En cualquiera de los supuestos previstos por el artículo 36 del presente reglamento y previo al inicio del procedimiento señalado en el artículo 37, la Aduana de Control, con la colaboración de PROCOMER podrá proceder, como medida preventiva, a la retención y aprehensión de la mercancía y su traslado a un recinto bajo control de la aduana o cualquier otra medida razonable que garantice su salvaguarda y custodia.

CAPITULO X SANCIONES A LOS BENEFICIARIOS DEL REGIMEN

SECCION I SANCIONES DE MULTAS

ARTICULO 40.- Multa a los beneficiarios del Régimen

De conformidad con lo dispuesto por la Ley , la Dirección sancionará con multa, a los beneficiarios del régimen en los siguientes casos:

- 1- Cuando no identifique la maquinaria, el equipo y los repuestos según las disposiciones que emita la Dirección, con una multa de cien pesos centroamericanos.
- 2- Cuando no reexporte las mercancías o lo haga fuera del plazo legal, sin perjuicio de las demás acciones procedentes de conformidad con la legislación, se impondrá una multa de quinientos pesos centroamericanos.
- 3- Cuando permita que las mercancías bajo su custodia sufran daños, faltantes o pérdidas, se impondrá una multa de quinientos pesos centroamericanos.

SECCION II SANCION DE SUSPENSION

ARTICULO 41.-Suspensiones

De conformidad con la Ley, la Dirección procederá a la suspensión de su actividad ante la autoridad aduanera al beneficiario que incurra en alguna de las siguientes causales:

- 1- Cuando no permita el acceso de la autoridad aduanera a sus instalaciones, zonas de producción, bodegas y registros de costos de producción, se impondrá una suspensión de cinco días
- 2- Cuando incumpla la obligación de mantener mercancías únicamente en los lugares habilitados o autorizados, se impondrá una suspensión de cinco días.

- 3- Cuando destruya mercancías sin supervisión ni autorización de la autoridad aduanera, se impondrá una suspensión de cinco días.
- 4- Cuando no conserve la información dentro de un plazo de cinco años, se impondrá una suspensión de un mes.
- 5- Cuando deje de cumplir con un requisito de auxiliar por más de tres meses, sin causa justificada, se impondrá una suspensión de un año.
- 6- Cuando no lleve los registros de sus actuaciones en la forma y condiciones que establezca la autoridad aduanera, no realice las inscripciones o las realice extemporáneamente, los destruya o no los ponga a su disposición, se impondrá una suspensión de un año.
- 7- Cuando no mantenga o no envíe los registros e informes sobre su gestión o sobre las mercancías importadas, reimportadas, reexportadas o lo efectúe por medios o formatos no autorizados, se impondrá una suspensión de un año.

SECCION III CANCELACION DEL REGIMEN

ARTICULO 42.-Cancelación

COMEX procederá a la cancelación del régimen cuando el beneficiario incurra en alguna de las siguientes causales:

1. No inicie operaciones dentro del plazo establecido por el artículo 182 inciso a) de la Ley.
2. Cuando habiendo iniciado operaciones mediante el régimen, las suspenda sin causa justificada por un plazo mayor de cuatro meses.
3. Cuando el beneficiario deje de operar imprevistamente y ello ocasione problemas laborales o de otro orden público.
4. Cuando haga uso indebido o dé un fin distinto a la maquinaria, al equipo y materia prima en general, ingresadas al amparo del régimen, sin perjuicio de las demás acciones procedentes.
5. Cuando haya sido suspendido en dos o más oportunidades en un período de doce meses.
6. Cuando el informe regulado por el artículo 19, numeral 1), del presente reglamento, no haya sido presentado durante los 6 meses siguientes al finalizar el período fiscal autorizado.

Para estos efectos, la Gerencia, previo conocimiento de la situación, procederá a reunir la información, formar el expediente y enviar la recomendación a COMEX para la iniciación del procedimiento administrativo.

ARTICULO 43.- Renuncia del Régimen

Cuando el beneficiario decida renunciar al régimen, remitirá una solicitud en este sentido a la Gerencia de Operaciones a la que adjuntará la siguiente documentación:

- Detalle de las declaraciones de ingreso, pólizas y títulos pendientes de liquidación o inventario;
- Certificación de no tener adeudos tributarios; y,
- Certificación de no tener adeudos obrero-patronales.

La Gerencia de Operaciones ordenará la publicación, en La Gaceta de un edicto por tres días consecutivos para escuchar objeciones de terceros dentro de los quince días naturales posteriores a la última publicación.

Pasado dicho plazo, COMEX previo informe elaborado por la Gerencia de Operaciones de PROCOMER, emitirá una resolución cancelando la autorización de la empresa, de los programas de producción y otorgará un plazo a la empresa para el retorno, nacionalización, donación al Estado o su entrega a la aduana, de las mercancías admitidas temporalmente y la correspondiente liquidación, efectuando la respectiva comunicación a las autoridades aduaneras.

TITULO III REGIMEN DEVOLUTIVO DE DERECHOS

CAPITULO XI DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 44°.- Concepto de Insumo

Para los efectos de este Régimen, se entenderá por insumo, aquella mercancía que cumple una función accesoria al embalaje o envasado de los productos de exportación y que sirven para actividades tales como, etiquetado, sellado, encolado.

ARTICULO 45°- Objeto del Régimen

De conformidad con el artículo 190 de la Ley, la Aduana de Control autorizará la devolución de los tributos efectivamente pagados por la importación definitiva de envases, embalajes e insumos incorporados a productos de exportación, siempre que estos no hayan sido objeto de transformación, elaboración, mezcla o cualquier otro proceso regulado por el artículo 179 de la Ley, que modifique su naturaleza, o cuando se utilizan para el transporte comercial de mercancías, en los términos del artículo 166 inciso d) de la Ley.

No se consideran objeto de este régimen la maquinaria y equipo , aunque se utilice para el envasado y embalaje de los productos de exportación.

Las sumas canceladas por concepto de multas e intereses originadas en la importación definitiva no se consideran objeto del régimen.

El plazo máximo para solicitar la devolución será de doce meses, contados a partir de la aceptación de la declaración de importación respectiva.

CAPITULO II SOLICITUD Y PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACION

ARTICULO 46.- Requisitos de Autorización

El exportador que desee acogerse al presente régimen, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- 1- No ser beneficiario de otro estímulo arancelario a la exportación.
- 2- Encontrarse al día en el pago de sus obligaciones tributarias, multas y demás cargos.

El beneficiario que luego de haber sido autorizado, deje de cumplir con los requisitos anteriores, no recibirá los incentivos del régimen, hasta tanto no subsane el incumplimiento.

ARTICULO 47.- Solicitud de Autorización al Régimen

Todo interesado en acogerse al Régimen deberá presentar su solicitud ante la Dirección, la cual contendrá al menos los siguiente datos:

- 1- Nombre, razón social o denominación y demás datos generales del beneficiario.
- 2- Ubicación exacta de las instalaciones y oficinas centrales del solicitante.
- 3- Nombre y demás calidades de los representantes legales.
- 4- Datos generales de la empresa, tales como niveles de producción, ventas, relación comercial, volúmenes de exportación y venta por mercado y nivel comercial (minorista , mayorista)
- 5- Manifestación expresa del procedimiento que escogerá para el procedimiento de devolución, según las regulaciones existentes.

ARTICULO 48.- Documentos que deben acompañarse a la solicitud

A la solicitud deberán acompañarse los siguientes documentos:

- 1- En el caso de personas jurídicas, certificación de personería jurídica actualizada y copia certificada de la cédula jurídica de la empresa y de sus representante legales.
- 2- En el caso de personas físicas, fotocopia certificada de la cédula de identidad o residencia.
- 3- Certificación extendida por las autoridades competentes de que se encuentra al día en el pago de todas las obligaciones tributarias.
- 4- Certificación del profesional idóneo que contenga:
 - a- Detalle de las actividades productivas a que se dedica la empresa y los procesos requeridos para su desarrollo.
 - b- Enumeración del tipo de insumo utilizado y la proporción en que cada uno es incorporado al producto de exportación.

5- Declaración jurada ante notario público, debidamente protocolizada de que no goza de otro incentivo arancelario a la exportación.

6- Documento en que conste la anuencia del agente aduanero, de que su cuenta corriente sea utilizada a efectos de devoluciones del beneficiario, cuando se escoja este procedimiento de devolución.

ARTICULO 49.- Procedimiento de Autorización

Presentada la solicitud, la Dirección verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos en este Reglamento y emitirá el acto de autorización o de rechazo, según corresponda, dentro del plazo de un mes contado a partir de la recepción de la solicitud.

En caso que la petición haya sido presentada en forma defectuosa, en los términos de los artículos 264 y 287 de la Ley General de la Administración Pública, se otorgará un plazo de diez días hábiles para su subsanación.

CAPITULO III OBLIGACIONES

ARTICULO 50.- Obligaciones de los Beneficiarios

Los beneficiarios de este Régimen deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

- 1- Actualizar anualmente, en el mes de enero, ante la Dirección, su situación tributaria y de que no goza de otros incentivos arancelarios a la exportación.
- 2- Contar con un sistema actualizado de Contabilidad Financiera y de Costos, que permita cuantificar la relación insumo-producto.
- 3- Cumplir con cualquier otra obligación que disponga la Dirección en el acto de autorización o en cualquier otra disposición de alcance general.

CAPITULO IV PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCION

ARTICULO 51.- Autoridad Competente para devolver

La solicitud de devolución de los tributos cancelados por la importación definitiva de los envases, embalajes e insumos incorporados a productos de exportación que regula el presente régimen, solamente podrá ser presentada por el beneficiario del régimen y ante la aduana de control, que será la competente para efectuar tales devoluciones cuando correspondan.

Ninguna otra aduana, que no sea la de control, podrá devolver tributos al amparo de este régimen, aún cuando la importación definitiva de los envases, embalajes o insumos que se estén exportando, hayan sido nacionalizados bajo su jurisdicción, o sea la aduana en la que está solicitando la exportación definitiva de los productos finales.

ARTICULO 52.- Procedimientos para la devolución de tributos

Para el reintegro de los tributos efectivamente cancelados, el interesado podrá escoger cualquiera de los siguientes procedimientos:

- 1- Devolución a través de la cuenta corriente de un agente aduanero, en cuyo caso se aplicarán las disposiciones de los artículos 256 y siguientes, del Reglamento a la Ley. En este caso, deberá presentar documento en el que conste la anuencia del agente aduanero de que su cuenta corriente sea utilizada a tales efectos.
- 2- Mediante Factura de Gobierno, según las regulaciones existentes.

ARTICULO 53.- Escogencia del Procedimiento de Devolución

El beneficiario en su solicitud de autorización deberá manifestar expresamente, cual procedimiento de los previstos al efecto, escogerá para que la Aduana de Control le acredite la devolución de los tributos que correspondan.

Cuando el beneficiario requiera modificar el procedimiento de devolución o el agente aduanero a cuya cuenta corriente se le acreditan los reintegros, deberá solicitarlo a la Dirección, quien lo autorizará y comunicará a la Aduana de Control para los efectos pertinentes.

ARTICULO 54.- Control de Devolución

La Aduana de Control establecerá las medidas necesarias para garantizar que la devolución que corresponda al amparo de este régimen, se efectúe por una única vez, por cada declaración aduanera de importación definitiva, sin perjuicio de los reembolsos parciales.

CAPITULO XII VIGENCIA Y DEROGATORIA

ARTICULO 55- DE LAS DEROGATORIAS

El presente Reglamento deroga el Reglamento de Admisión Temporal, Decreto Ejecutivo N° 22108-COMEX-H del 30 de marzo de 1993 y sus reformas y, los artículos 508 y 509 del Reglamento a la Ley General de Aduanas y cualquier otra disposición de igual o menor rango que se le oponga.

ARTICULO 56- VIGENCIA

El presente reglamento rige a partir de su publicación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

- I.- Las personas físicas o jurídicas autorizadas bajo el régimen de admisión temporal, se considerarán de pleno derecho como beneficiarias del Régimen de Perfeccionamiento Activo para la modalidad cien por ciento reexportación ; salvo que presenten la respectiva solicitud con los requisitos establecidos ante COMEX , para obtener la autorización para la modalidad reexportación y venta local.

En tal caso, los impuestos correspondientes a la maquinaria y equipo adquirido mediante el régimen de admisión temporal, deberán cancelarse previo a la autorización del cambio de modalidad, de conformidad con lo que establece el artículo 18 del presente reglamento.

II.- Mientras la Dirección autoriza los nuevos formatos de declaración de Ingreso y Salida de mercancías para el Régimen de Perfeccionamiento Activo, se seguirán utilizando los empleados a la fecha.

III.- Los beneficiarios contarán con un plazo de tres meses, a partir de que la Dirección emita el nuevo formato del título de prenda aduanera, para sustituir e inscribir ante el Registro de Prendas del Registro Público, las prendas sobre las mercancías que hayan ingresado hasta la fecha, bajo el régimen de admisión temporal.

IV.- A los beneficiarios del régimen se les concede un plazo de 2 meses para que se ajusten en su totalidad a las nuevas regulaciones previstas en el presente Reglamento.

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los diecinueve días del mes de agosto de mil novecientos noventa y siete. PUBLIQUESE.

JOSE MARIA FIGUERES OLSEN
Presidente

El Ministro de Comercio Exterior
JOSE MANUEL SALAZAR XIRINACHS

El Ministro de Hacienda
FRANCISO DE PAULA GUTIERREZ

(Modificado mediante decreto 29055 del 30 de octubre de 2000)

**REFORMA LEY DE ZONAS FRANCAS DE LOS ARTICULOS 4°, 20 Y 21 Y
ADICION DEL TRANSITORIO IV, N° 7210**

N° 7467

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA,

DECRETA:

**REFORMA DE LOS ARTICULOS 4°, 20 Y 21 Y ADICION DEL
TRANSITORIO IV A LA LEY DE REGIMEN DE ZONAS FRANCAS, N° 7210**

ARTICULO 1. Reformas

Se reforman el inciso c) del artículo 4°, el inciso k) del artículo 20 y el inciso a) del artículo 21 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, No. 7210, del 23 de noviembre de 1990, cuyos textos dirán:

"Artículo 4.

...

- c) Promover, mediante concurso, la concesión para administrar las zonas francas que secreen en el país. Cuando la concesión otorgada se revoque, la Corporación podrá asumir, temporalmente y en forma directa, la administración de las zonas francas dadas enconcesión."

"Artículo 20.-

...

- k) Las empresas que se establezcan en las zonas francas ubicadas en áreas y comunidades 'de menor desarrollo relativo', según la calificación que el Ministerio de Comercio Exterior realizará, previo informe del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, tendrán derecho a recibir una bonificación equivalente al quince por ciento (15%) de la suma total pagada por concepto de salarios en el año inmediato anterior, conforme a la certificación de la planilla reportada a la Caja Costarricense de Seguro Social. Las empresas que deseen acogerse al beneficio de esta Ley, deberán solicitarlo a más tardar el 31 de diciembre de 1999. El beneficio durará cinco años; durante los primeros cuatro años, decrecerá dos puntos porcentuales por año y se liquidará en el último año. Esta bonificación se emitirá contra el Presupuesto Nacional y estará representada por títulos valores nominativos y negociables.

El Poder Ejecutivo, para dar contenido a este beneficio, incluirá una partida presupuestaria anual por un monto de cuarenta millones de colones (¢ 40.000.000) para el primer año de la ejecución; esa suma se ajustará, cada año, por el incremento porcentual del monto total de las planillas de las empresas calificadas para recibir esta bonificación en el año inmediato anterior.

Si se agota el monto anual de esa partida, a las solicitudes que no hayan sido cubiertas se les podrá conceder el beneficio en el período siguiente.

La forma de emisión y las condiciones referentes a la bonificación aquí creada, se estipularán en el Reglamento de esta Ley."

"Artículo 21.

...

- a) Asistencia para el entrenamiento, coordinada por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), para empleados y aspirantes a empleados de las empresas establecidas en las zonas francas. Las empresas ubicadas en zonas francas, en regiones de 'menor desarrollo relativo', podrán acogerse al Programa nacional para la generación de empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para capacitar y brindar trabajo a las personas desempleadas, las subempleadas y las de bajos ingresos de su zona, según se defina en el reglamento que elaborarán, conjuntamente, los Ministerios de Comercio Exterior y de Trabajo y Seguridad Social.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y las empresas suscribieran un convenio que deberá ajustarse a las siguientes disposiciones:

- 1.- La capacitación, el entrenamiento o el reentrenamiento tendrá un plazo de tres meses, prorrogable por un período igual, cuando la complejidad o la intensidad del proceso lo ameriten, a juicio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, previo informe del Ministerio de Comercio Exterior.
- 2.- La capacitación estará a cargo de la empresa que se acoja a este beneficio, la cual pondrá a disposición del aprendiz las instalaciones, la maquinaria y el equipo necesarios para capacitarlo. Los cursos serán supervisados por el Instituto Nacional de Aprendizaje, de conformidad con los lineamientos que se establezcan en el convenio respectivo.
- 3.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social otorgará al aprendiz un subsidio mensual, con cargo al fondo del Programa, durante todo el período de capacitación. El monto de ese subsidio será equivalente al salario mínimo mensual. Por tratarse de un incentivo a la formación técnica, el pago no generará ninguna relación laboral ni otros efectos legales.
- 4.- La empresa estará obligada a contratar al aprendiz, una vez capacitado o entrenado, siempre y cuando resulte idóneo, en los términos establecidos en el convenio respectivo."

ARTICULO 2.- Adición

Se adiciona, a la Ley No. 7210, del 23 de noviembre de 1990, el Transitorio IV, cuyo texto dirá:

"TRANSITORIO IV.- Se autoriza al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para atender, con cargo al fondo del Programa nacional para la generación de empleo, las obligaciones contraídas, antes de la vigencia de esta Ley, con empresas localizadas en zonas de 'menor desarrollo relativo' y que se deriven de la aplicación de ese Programa."

ARTICULO 3.- Vigencia Rige a partir de su publicación.

COMISION LEGISLATIVA PLENA SEGUNDA.--Aprobado el anterior proyecto el día treinta de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.

Antonio Alvarez Desanli, Presidente.--Gerardo Humberto Fuentes González, Secretario.

Comuníquese al Poder Ejecutivo

ASAMBLEA LEGISLATIVA.--San José, a los trece días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.

Alberto F. Cañas, Presidente.--Juan Luis Jiménez Succar, Primer Secretario.--Mario A. Alvarez G., Segundo Secretario.

Dado en la Presidencia de la República.--San José, a los veinte días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.

Ejecútese y publíquese

JOSE MARIA FIGURES OLSEN.--Los Ministros de Economía, Industria y Comercio, Marco A. Vargas D. y de Comercio Exterior, José Rossi Umaña.--1 vez.--C- 100.--(59647).

**LEY DE JUSTICIA TRIBUTARIA REFORMAS DEL CODIGO DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS
TRIBUTARIOS LEY N° 4755, DEL 3 DE MAYO DE 1971 Y SUS REFORMAS**

N° 7535

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA,

DECRETA:

**LEY DE JUSTICIA TRIBUTARIA REFORMAS DEL CODIGO DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS
TRIBUTARIOS LEY N° 4755, DEL 3 DE MAYO DE 1971 Y SUS REFORMAS**

Artículo 1.-- Se reforman los artículos 22, 39, 40, 43, 50, 51, 53, 57, 59, 60 y 65 a 98 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, cuyos textos dirán:

"Artículo 22.-- Responsabilidad por adquisición Son responsables solidarios en calidad de adquirientes:

- a) Los donatarios y los legatarios por el tributo correspondiente a la operación gravada.
- b) Los adquirientes de establecimientos mercantiles y los demás sucesores del activo, del pasivo o de ambos, de empresas o entes colectivos, con personalidad jurídica o sin ella. Para estos efectos, los socios o los accionistas de las sociedades liquidadas también se deben considerar sucesores. Esta responsabilidad no debe hacerse efectiva si en el documento del traspaso se incluye la constancia de la Administración Tributaria de que el transferidor o la sociedad en liquidación no tiene obligaciones tributarias pendientes."

"Artículo 39-- Lugar, fecha y forma de pago El pago debe efectuarse en el lugar, la fecha y la forma que indique la ley o, en su defecto, el reglamento respectivo. La Administración Tributaria estará obligada a recibir pagos parciales."

"Artículo 40.-- Plazo para pago Dentro de los plazos que fijen las leyes respectivas, debe pagarse el tributo que se determine de acuerdo con las declaraciones juradas, presentadas por el contribuyente o el responsable, o con base en cualquier otra forma de liquidación efectuada por uno u otro o la liquidación correspondiente a pagos parciales o retenciones. Cuando la ley tributaria no fije plazo para pagar el tributo, debe pagarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que ocurra el hecho generador de la obligación tributaria.

Todos los demás pagos por concepto de tributos resultantes de resoluciones dictadas por la Administración Tributaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de este Código, deben efectuarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que el sujeto pasivo quede legalmente notificado de su obligación.

Los intereses y los recargos se calcularán a partir de la fecha en que los tributos debieron pagarse conforme a las leyes respectivas o al presente Código, en los siguientes supuestos:

- a) Que la obligación tributaria se encuentre vinculada directamente con hechos configuradores de sanciones penales tributarias, condición que será determinada de acuerdo con lo previsto en el artículo 81 de este Código.

- b) Que el sujeto pasivo de la obligación tributaria sea calificado como litigante temerario, por parte del Tribunal Fiscal Administrativo. Se considerará litigante temerario al sujeto pasivo que gestione con el ánimo evidente de retrasar la firmeza de la determinación de la obligación tributaria, sin contar con motivos razonables para litigar."

"Artículo 43.-- Pagos en exceso y prescripción de la acción de repetición A los contribuyentes o los responsables que tengan en su favor sumas por concepto de pagos en exceso de tributos, intereses, recargos y multas, la Administración Tributaria deberá notificarles esas circunstancias, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de los pagos que originan el crédito. Si no se les notifica el acreedor tendrá derecho al reconocimiento de un interés equivalente al establecido en el artículo 57 de este Código. Este interés correrá a partir del día siguiente al vencimiento del plazo indicado.

Los sujetos pasivos o los responsables pueden solicitar, por escrito, a la Administración Tributaria, la restitución de lo pagado indebidamente por tributos, intereses, recargos y multas o solicitar el crédito respectivo.

La acción para solicitar esa devolución prescribe una vez transcurridos cuatro años, desde el día siguiente a la fecha en que se efectuó cada pago o de la fecha de la presentación de la declaración jurada en la cual surgió el crédito."

"Artículo 50.-- Procedimientos La obligación de pagar los tributos solamente puede ser condonada o remitida por ley dictada con alcance general. Las obligaciones accesorias, como intereses recargos y multas, solo pueden ser condonadas por resolución administrativa, dictada en la forma y las condiciones que se establezcan en la Ley."

"Artículo 51.-- Términos para la prescripción La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación prescribe a los cuatro años. Igual término rige para exigir el pago del tributo y sus intereses."

"Artículo 53.-- Interrupción de la prescripción El curso de la prescripción se interrumpe por:

- a) El traslado de observaciones y cargos o los actos sucesivos dictados por la Administración Tributaria para determinar el tributo.

Igualmente, se interrumpirá con la determinación del tributo efectuada por el sujeto pasivo. Como fecha de interrupción, se tomará la de la notificación del traslado de observaciones y cargos de la resolución administrativa o la presentación de la declaración respectiva fuera de término.

- b) Cualquier solicitud de rectificación del sujeto pasivo
- c) El reconocimiento expreso de la obligación, por parte del deudor.
- d) El pedido de prórroga o de otras facilidades de pago.
- e) La notificación de actos administrativos o jurisdiccionales tendientes a ejecutar el cobro de la deuda.
- f) La interposición de toda petición o reclamo, en los términos establecidos en el artículo 102 del presente Código.

Interrumpida la prescripción, no se considera el tiempo transcurrido con anterioridad y el término comienza a computarse nuevamente, a partir del primero de enero del año calendario siguiente a aquel en el que se produjo la interrupción."

"Artículo 57.-- Intereses a cargo del sujeto pasivo Sin necesidad de actuación alguna de la Administración Tributaria, el pago efectuado fuera de término produce la obligación de pagar, junto con el tributo adeudado, un interés, el cual no será menor, en ningún caso, que la tasa básica pasiva que fije el Banco Central de Costa Rica.

La Administración Tributaria, mediante resolución publicada, fijará la tasa de interés, que no podrá superar en más de quince puntos esa tasa básica pasiva, tasa de interés que regirá a partir de su publicación.

No procederá condonar el pago de estos intereses, excepto cuando se demuestre error de la Administración."

"Artículo 59.-- Privilegio general Los créditos por tributos, intereses, recargos y sanciones pecuniarias, gozan de privilegio general sobre todos los bienes y las rentas del sujeto pasivo y, aún en caso de concurso, quiebra o liquidación, tendrán prelación para el pago sobre los demás créditos, con excepción de:

- a) Los garantizados con derecho real, siempre que éste se haya constituido antes de ocurrir el hecho generador de la obligación tributaria que origina el crédito fiscal.
- b) Las pensiones alimenticias, el preaviso, la cesantía, los salarios, los aportes de seguridad social y los demás derechos laborales."

"Artículo 60.-- Privilegio especial En los casos de créditos por tributos con privilegio especial sobre determinados bienes, se deben aplicar las disposiciones de los artículos conducentes del Código de Comercio, Código Civil y Código Procesal Civil."

Artículo 2.-- Se sustituye el Título III del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, cuyo texto dirá:

"TITULO III HECHOS ILICITOS TRIBUTARIOS

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

Disposiciones comunes para todos los hechos ilícitos tributarios

"Artículo 65.-- Clasificación Los hechos ilícitos tributarios se clasifican en: infracciones administrativas, contravenciones tributarias y delitos tributarios.

El conocimiento de las contravenciones y los delitos tributarios corresponderá a los Tribunales de Justicia, por medio de las Alcaldías de Contravenciones Tributarias, la Agencia Fiscal Penal Tributaria, el Juzgado de Instrucción Penal Tributario y el Tribunal Superior Penal Tributario, que tendrán competencia en todo el territorio nacional.

El Tribunal Superior Tributario de lo Penal conocerá de los delitos tributarios, ya sean instruidos por citación directa o por instrucción formal."

"Artículo 66.-- Comprobación de los hechos ilícitos tributarios La comprobación de los hechos ilícitos tributarios deberá respetar el principio "non bis in idem", de acuerdo con las siguientes reglas:

- a) La sanción de la autoridad judicial excluirá la imposición de sanción administrativa por los mismos hechos.
- b) En los supuestos en que la Administración Tributaria ya haya establecido una sanción, ello no impedirá el inicio y el desarrollo de la acción judicial. Sin embargo, si esta resulta en una condenatoria del sujeto, las infracciones que puedan ser consideradas actos preparatorios del delito, ya sean acciones u omisiones incluidas en el tipo delictivo, se entenderán subsumidas en el delito. Por tanto, las sanciones administrativas impuestas deberán ser revocadas y, si su naturaleza lo permite, abonadas al cumplimiento de la pena establecida por los tribunales."

"Artículo 67.-- Responsabilidad de las personas jurídicas

Las personas jurídicas y las demás entidades citadas en los incisos b) y c) del artículo 17 de este Código, no serán responsables penalmente. Sin embargo, en lo civil, responderán solidariamente por las acciones o las omisiones que sus representantes realicen en el cumplimiento de sus funciones."

"Artículo 68.-- Responsabilidad de los representantes Los representantes, los apoderados, los directores, los agentes, los funcionarios o los empleados de una persona jurídica, serán responsables, en lo personal, por las acciones o las omisiones establecidas en la presente Ley. Tal responsabilidad no se presume y, por tanto, está sujeta a la demostración debida."

"Artículo 69.-- Elemento subjetivo de los hechos ilícitos tributarios Los hechos ilícitos tributarios únicamente son sancionables si son realizados con dolo o culpa, incluso a título de mera negligencia en la atención del deber de cuidado que ha de observarse en el cumplimiento de las obligaciones y los deberes tributarios."

"Artículo 70.-- Concepto de "salario base" La denominación "salario base", utilizada en esta Ley, debe entenderse como la contenida en el artículo 2 de la Ley N° 7337."

"Artículo 71.-- Concepto de "Administración Tributaria" Para efecto del presente Título III, el término 'Administración Tributaria', debe entenderse como los órganos de la Administración Tributaria adscritos al Ministerio de Hacienda."

CAPITULO II SANCIONES ADMINISTRATIVAS

SECCION PRIMERA Disposiciones generales

"Artículo 72.-- Medidas administrativas La Administración Tributaria impondrá las medidas administrativas establecidas en la ley: multas y cierre de negocio, que recaerán sobre el sujeto pasivo de la obligación tributaria. La aplicación de estas sanciones es independiente del pago del interés que se estipula en el artículo 57 de este Código."

"Artículo 73.-- Concurrencia formal Cuando un hecho configure más de una infracción, debe aplicarse la sanción más severa."

"Artículo 74.-- Plazo de prescripción El derecho de aplicar sanciones prescribe en el plazo de cuatro años, contado a partir de la fecha en que se cometió la infracción. La prescripción de la acción

para aplicar sanciones se interrumpe por la notificación de las infracciones que se presumen o por la denuncia formulada ante el Ministerio Público."

"Artículo 75.-- Normativa supletoria La Administración Tributaria deberá imponer las sanciones establecidas en este capítulo, con apego a los principios de legalidad y al debido proceso.

En materia de procedimientos, a falta de norma expresa en este Código, deben aplicarse las disposiciones generales del procedimiento administrativo de la Ley General de la Administración Pública."

"Artículo 76.-- Morosidad Incurre en mora quien paga la deuda tributaria fuera de los términos establecidos por la legislación correspondiente, salvo que se le haya concedido la prórroga mencionada en el artículo 38 de este Código.

Los morosos tendrán un recargo del uno por ciento (1%) por cada mes o fracción de mes transcurrido desde el momento en que debió satisfacerse la obligación hasta la fecha del pago efectivo del tributo y se calculará sobre las sumas sin pagar a tiempo. El pedido de facilidades de pago, aceptado por la Administración Tributaria, interrumpe el cómputo de este recargo.

Cuando la mora se refiera a sumas no enteradas al Fisco por los agentes retenedores o los perceptores, el recargo será de un tres por ciento (3%) mensual de la suma retenida. Este recargo debe aplicarse independientemente del pago del interés establecido en el artículo 57 y respetando lo dispuesto en el artículo 40, ambos artículos del presente Código."

SECCION SEGUNDA Infracciones administrativas

"Artículo 77.-- Multa de un salario base Se sancionará, con una multa equivalente a un salario base, a quienes:

- a) No concurren a las oficinas de la Administración Tributaria cuando se requiera su presencia, en los términos establecidos en el artículo 11 2 de este Código.
- b) No mantengan sus registros contables y los comprobantes respectivos en el domicilio fiscal o en el lugar autorizado por la Administración Tributaria.
- c) No permitan inspeccionar locales ocupados a cualquier título por el administrado, cuando exista orden de allanamiento que autorice a la Administración para realizar la inspección."

"Artículo 78.-- Multa de tres salarios base Se sancionará con una multa equivalente a tres veces el salario base, a quienes:

- a) Omitan inscribir los bienes de registro obligatorio.
- b) No comuniquen a la Administración Tributaria el cambio de domicilio fiscal."

"Artículo 79.-- Multa de seis salarios base Se sancionará, con una multa equivalente a seis veces el salario base, a quienes:

- a) Lleven los libros o los registros contables, aludidos en el artículo 104 de este Código, con un atraso superior a tres meses.
- b) No presenten las declaraciones tributarias dentro del plazo legalmente establecido.

- c) Omitan o retarden la comunicación formal de haber iniciado una actividad o de haber realizado un hecho generador. d) Incumplan con su deber de retener y percibir tributos."

CAPITULO III SANCIONES PENALES

SECCION I Disposiciones generales

"Artículo 80.-- Principios y normas aplicables Las disposiciones de este Código se aplican a las contravenciones y los delitos tributarios, los cuales serán de conocimiento de las alcaldías de contravenciones tributarias y de los tribunales penales tributarios, mediante el procedimiento establecido en el Código de Procedimientos Penales. En igual forma, les serán aplicables las disposiciones generales contenidas en el Código Penal.

Si en las leyes tributarias existen disposiciones especiales, estas prevalecerán sobre las generales."

"Artículo 81.-- Procedimiento para aplicar sanciones penales tributarias Para aplicar las sanciones penales tributarias, se observará el siguiente procedimiento:

- a) Si en su labor fiscalizadora la Administración Tributaria detecta hechos que, a su juicio, configuran contravenciones y delitos penales tributarios cometidos por sujetos pasivos de las obligaciones tributarias, deberá requerirlos formalmente, mediante resolución administrativa notificada personalmente, intimándolos para que, en un plazo hasta de veinte días hábiles siguientes a la fecha de la notificación, cumplan con los deberes formales o, en su caso, con el pago del tributo, los recargos, los intereses y las multas que correspondan, vinculados directamente con la comisión de hechos configuradores de delitos y contravenciones tributarias.
- b) Las obligaciones tributarias principales o las accesorias sin vínculo directo con hechos configuradores de sanciones penales tributarias, se determinarán según el procedimiento fijado a partir del artículo 144 de este Código que incluye el acceso a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
- c) El plazo de intimación comenzará a correr a partir de la firmeza de la resolución del Director General de Tributación o, en su caso, del Tribunal Fiscal Administrativo, si se apela lo resuelto dentro de los cinco días hábiles. El Tribunal deberá resolver en el plazo de un mes.
- d) Vencido el plazo de intimación sin que el interesado cumpla con el mandato de la resolución administrativa, la Administración Tributaria enviará el expediente administrativo al Ministerio Público, para que inicie la acción penal que corresponda.

No existirá delito ni contravención, si dentro del plazo de intimación mencionado el sujeto pasivo paga el tributo, los recargos, los intereses y las multas, y cumple, si es del caso, con los deberes formales requeridos en la resolución administrativa de intimación."

"Artículo 82.-- Determinación del monto de las obligaciones tributarias En la sentencia, el Juez Penal Tributario resolverá sobre la aplicación de las sanciones penales tributarias al imputado. En el supuesto de condenatoria y en lo aplicable, el Juez determinará el monto de las obligaciones tributarias principales y las accesorias directamente vinculadas con los hechos configuradores de

sanciones penales tributarias. El monto determinado no podrá exceder de la determinación incluida en la resolución administrativa confirmada en vía administrativa."

"Artículo 83.-- Clasificación de las sanciones Las contravenciones tributarias se sancionarán, según los casos, mediante:

- a) Multa, que siempre se considerará como sanción principal.
- b) Sanciones accesorias, que serán:
 - i) Pérdida del derecho de obtener subvenciones públicas y a gozar de beneficios o incentivos fiscales, durante un plazo hasta de tres años.
 - ii) Prohibición de celebrar contratos con la Administración Pública, durante un plazo hasta de tres años.
 - iii) Inhabilitación para el ejercicio profesional, por un plazo hasta de tres años, a quienes por ley se les haya encomendado colaborar en la determinación o la recaudación de los tributos, siempre que la conducta infractora se relacione con el desempeño de la función o la profesión.
 - iv) Destitución del cargo público.

Las sanciones accesorias establecidas en los subincisos i) e ii) se aplicarán tanto a la persona física contraventora como a la persona jurídica que se haya beneficiado de la contravención."

"Artículo 84.-- Criterios de gradación Además de la importancia del perjuicio fiscal causado, características del hecho ilícito tributario cometido y la conducta desarrollada por el sujeto pasivo, el Juez, para determinar la sanción aplicable, tomará en cuenta los criterios de gradación establecidos en la sección VII del Título IV del Libro Primero del Código Penal. En igual forma, según las circunstancias atenuantes y agravantes del hecho, el juzgador aplicará las sanciones accesorias establecidas en esta Ley."

"Artículo 85.-- Reglas de prescripción La acción penal prescribe en el plazo de cuatro años, contados a partir de la comisión del hecho ilícito. La interposición del recurso de apelación citado en el artículo 81 inciso c) de este Código interrumpirá la prescripción."

"Artículo 86.-- Regla general de tipicidad Los tipos de contravención descritos presuponen la existencia de obligaciones precisas y los deberes tributarios previstos en este Código o en otras leyes.

Las sanciones establecidas en la sección siguiente para las contravenciones, no se aplicarán cuando exista una sanción penal más severa."

SECCION II Contravenciones tributarias

"Artículo 87.-- Multa de cuatro a diez veces el impuesto sin pagar o el beneficio percibido

Se sancionará, con una multa de cuatro a diez veces el monto del impuesto dejado de pagar o del beneficio percibido, a quien incurra en las siguientes acciones u omisiones:

- a) Disfrute u obtenga beneficios fiscales, exenciones o devoluciones que no le correspondan.

- b) Determine y acredite ingresos, gastos o deducciones que no correspondan."

"Artículo 88.-- Multa de ocho a veinte veces el salario base Se aplicará una multa de ocho a veinte veces el salario base, a quien incurra en las siguientes acciones u omisiones:

- a) Lleve más de un juego de libros contables, sistemas de registros o contabilidades.
- b) Adultere o falsifique comprobantes o utilice conscientemente comprobantes, adulterados o falsos, para respaldar su contabilidad."

"Artículo 89.-- Multa de cinco a doce veces el salario base Se aplicará una multa de cinco a doce veces el salario base, a quien incurra en las siguientes acciones u omisiones:

- a) Inexactitud u omisión de una o varias operaciones de la contabilidad y en los registros exigidos por normas de naturaleza fiscal.
- b) Transcripción inexacta en las declaraciones tributarias, de los datos que figuran en los libros y los registros obligatorios.
- c) Incumplimiento de la obligación de llevar la contabilidad y los registros establecidos por disposiciones fiscales y mercantiles de relevancia fiscal, según las normas y los principios de contabilidad generalmente aceptados."

SECCION III Delitos tributarios

"Artículo 90.-- Sanciones por inducir a error a la Administración Tributaria Quien induzca a error a la Administración Tributaria, mediante simulación de datos, deformación u ocultamiento de información verdadera, con el propósito de obtener, para sí o para un tercero, un beneficio patrimonial, una exención o una devolución, en perjuicio de la hacienda pública, será sancionado de la siguiente manera:

- a) Con prisión de uno a tres años, si el monto defraudado no excede de cincuenta veces el salario base.
- b) Con prisión de tres a cinco años, si el monto defraudado es superior a cincuenta veces el salario base."

"Artículo 91.-- Sanciones por no entregar los tributos recaudados El agente retenedor o perceptor de tributos que, tras haberlos retenido o percibido, no los entregue al Fisco dentro del plazo debido, será sancionado con prisión de:

- a) Tres a cinco años, si el monto retenido no excede de cincuenta veces el salario base.
- b) Cinco a diez años, si el monto retenido excede de esa suma."

"Artículo 92.-- Sanciones para quien altere información Será sancionado, con prisión de uno a tres años, quien, pese a estar obligado a decir la verdad a la Administración Tributaria, niegue, oculte o aporte, de manera incompleta o falsa, información de trascendencia tributaria, sobre hechos o actuaciones de terceros, que le consten por mantener relaciones económicas y financieras, con ellos."

"Artículo 93.-- Sanciones por manejo indebido de la información Será sancionado, con prisión de uno a tres años, quien oculte o destruya información, libros contables, bienes, documentos,

registros, sistemas y programas computarizados, soportes magnéticos u otros medios de trascendencia tributaria en las investigaciones y los procedimientos tributarios."

"Artículo 94.-- Sanciones por acceso desautorizado a la información Será sancionado, con prisión de uno a tres años, quien, por cualquier medio tecnológico, acceda a los sistemas de información o las bases de datos de la Administración Tributaria, sin la autorización correspondiente."

"Artículo 95.-- Sanciones por manejo indebido de programas de cómputo Será sancionado, con pena de tres a diez años de prisión, quien se apodere, copie, destruya, inutilice, altere, transfiera o tenga en su poder, sin la autorización debida de la Administración Tributaria, cualquier programa de cómputo utilizado por ella para administrar la información tributaria y sus bases de datos, siempre que la Administración Tributaria los haya declarado de uso restringido, mediante resolución."

"Artículo 96.-- Sanción por facilitar el código y la clave de acceso Será sancionado, con prisión de tres a cinco años, quien facilite el código y su clave de acceso, asignados para ingresar a los sistemas de información tributarios, para que otra persona los use."

"Artículo 97.-- Sanción por prestar código y clave de acceso Será sancionado, con prisión de seis meses a un año, quien culposamente permita que su código o su clave de acceso, asignados para ingresar a los sistemas de información tributaria, sean utilizados por otra persona."

"Artículo 98.-- Sanción para el funcionario público por acción u omisión dolosa Será sancionado, con prisión de tres a diez años, el servidor público de la Administración Tributaria que, de manera directa o indirecta, por acción u omisión dolosa, colabore o facilite, de cualquier forma, el incumplimiento de la obligación tributaria y la inobservancia de los deberes formales del sujeto pasivo."

Artículo 3.-- Se derogan los artículos 99 a 104 y se corrige la numeración de los artículos 105 a 110 vigentes, que pasarán a ser los artículos 99 a 104.

Artículo 4.-- Se reforma el artículo 104 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, cuyo texto dirá:

"Artículo 104.-- Requerimientos de información al contribuyente Para facilitar la verificación oportuna de la situación tributaria de los contribuyentes, la Administración Tributaria podrá requerirles la presentación de los libros, los archivos, los registros contables y toda otra información de trascendencia tributaria, que se encuentre impresa en forma de documento, en soporte técnico o registrada por cualquier otro medio tecnológico. Sin perjuicio de estas facultades generales, la Administración podrá solicitar a los contribuyentes y los responsables:

- a) Copia de los libros, los archivos y los registros contables.
- b) Información relativa al equipo de cómputo utilizado y a las aplicaciones desarrolladas.
- c) Copia de los soportes magnéticos que contengan información tributaria.

Los gastos por la aplicación de los incisos anteriores correrán por parte de la Administración Tributaria."

Artículo 5.-- Se adicionan once artículos, que llevarán los números 105 a 115, al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, cuyos textos dirán:

"Artículo 105.-- Información de terceros

Toda persona, física o jurídica, pública o privada, estará obligada a proporcionar a la Administración Tributaria la información de trascendencia tributaria, deducida de sus relaciones económicas financieras y profesionales con otras personas. La proporcionará como la Administración lo indique por medio de reglamento o requerimiento individualizado. Este requerimiento de información deberá ser justificado, debida y expresamente, en cuanto a la relevancia tributaria.

La Administración no podrá exigir información a:

- a) Los ministros del culto, en cuanto a los asuntos relativos al ejercicio de su ministerio.
- b) Las personas que, por disposición legal expresa, pueden invocar el secreto profesional, en cuanto a la información amparada por él. Sin embargo, los profesionales no podrán alegar el secreto profesional para impedir la comprobación de su propia situación tributaria.
- c) Los funcionarios que, por disposición legal, estén obligados a guardar secreto de datos, correspondencia o comunicaciones en general.
- d) Los ascendientes o los descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad; tampoco el cónyuge del fiscalizado."

"Artículo 106.-- Deberes específicos de terceros Los deberes estipulados en este artículo se cumplirán sin perjuicio de la obligación general establecida en el artículo anterior, de la siguiente manera:

- a) Los retenedores estarán obligados a presentar los documentos informativos de las cantidades satisfechas a otras personas, por concepto de rentas del trabajo, capital mobiliario y actividades profesionales.
- b) Las sociedades, las asociaciones, las fundaciones y los colegios profesionales deberán suministrar la información de trascendencia tributaria que conste en sus registros, respecto de sus socios, asociados, miembros y colegiados.
- c) Las personas o las entidades, incluidas las bancarias, las crediticias o las de intermediación financiera en general que, legal, estatutaria o habitualmente, realicen la gestión o la intervención en el cobro de honorarios profesionales o de comisiones, deberán informar sobre los rendimientos obtenidos en sus actividades de captación, colocación, cesión o intermediación en el mercado de capitales.
- d) Las personas o las entidades depositarias de dinero en efectivo o en cuenta, valores u otros bienes de deudores de la hacienda pública, en el período de cobro judicial, están obligadas a informar a los órganos y a los agentes de recaudación ejecutiva, así como a cumplir con los requerimientos que ellos les formulen en el ejercicio de sus funciones legales.
- e) Los bancos, las instituciones de crédito y las financieras, públicas o privadas, deberán proporcionar información relativa a las operaciones financieras y económicas de sus clientes o usuarios. En este caso, el Director General de la Tributación Directa, mediante resolución fundada, solicitará a la autoridad judicial competente que ordene entregar esa información, siempre que se cumpla con lo establecido en los párrafos siguientes de este artículo.

Unicamente podrá solicitarse información sobre contribuyentes o sujetos pasivos previamente escogidos, mediante los criterios objetivos de selección para auditoría, debidamente publicados por la Administración Tributaria e incluidos en el Plan Anual de Auditoría vigente a la fecha de la solicitud.

Asimismo, deberá demostrarse, en la solicitud, la existencia de evidencias sólidas de la configuración potencial de un acto ilícito tributario.

Además, en la solicitud podrá incluirse información sobre terceros contribuyentes cuando, a raíz de la investigación de uno de los contribuyentes que cumpla con los requisitos anteriores, se determine que estos terceros podrían estar vinculados con actos ilícitos tributarios."

"Artículo 107.-- Deberes de información de los funcionarios públicos y otros Los funcionarios públicos de cualquier dependencia u oficina pública, los de las instituciones autónomas, semiautónomas, empresas públicas y las demás instituciones descentralizadas del Estado y los de las municipalidades, estarán obligados a suministrar, a la Administración Tributaria, cuantos datos y antecedentes de trascendencia tributaria recaben en el ejercicio de sus funciones."

"Artículo 108.-- Requerimientos de información La Administración Tributaria podrá exigir, a los beneficiarios de incentivos fiscales, información sobre el cumplimiento de los requisitos y los hechos legitimadores de los incentivos recibidos."

"Artículo 109.-- Directrices para consignar la información tributaria La Administración Tributaria podrá establecer directrices respecto de la forma cómo deberá consignarse la información tributaria. Asimismo, podrá exigir que los sujetos pasivos y los responsables lleven los libros, los archivos o los registros de sus negociaciones, necesarios para la fiscalización y la determinación correctas de las obligaciones tributarias y los comprobantes, como facturas, boletas u otros documentos, que faciliten la verificación. Los contribuyentes o los responsables deberán conservar los duplicados de estos documentos, por un plazo de cuatro años.

La Administración podrá exigir que los registros contables estén respaldados por los comprobantes correspondientes."

"Artículo 110.-- Contabilidad en el domicilio fiscal Los sujetos pasivos deberán mantener toda la documentación contable y los respectivos comprobantes, en el domicilio fiscal o en el lugar que expresamente les autorice la Administración Tributaria."

"Artículo 111.-- Inventarios La Administración Tributaria podrá realizar inventarios, fiscalizar su levantamiento o confrontarlos, con las existencias reales, procurando en lo posible no afectar las operaciones del sujeto pasivo. De estas diligencias, deberá levantarse un acta y entregar copia al sujeto pasivo."

"Artículo 112.-- Facultad para citar a sujetos pasivos y a terceros La Administración Tributaria podrá citar a los sujetos pasivos y a terceros relacionados con la obligación tributaria correspondiente, para que comparezcan en las oficinas de la Administración Tributaria, con el fin de contestar, oralmente o por escrito, las preguntas o los requerimientos de información necesarios para verificar y fiscalizar las obligaciones tributarias respectivas, con apego al debido proceso. De toda comparecencia, deberá levantarse acta."

"Artículo 113.-- Inspección de locales Cuando sea necesario para determinar o fiscalizar la situación tributaria de los sujetos pasivos, la Administración Tributaria podrá inspeccionar locales ocupados, por cualquier título, por el sujeto pasivo respectivo. En caso de negativa o resistencia, la Administración, mediante resolución fundada, deberá solicitar a la autoridad judicial competente, la

autorización para proceder al allanamiento, el cual quedará sujeto a las formalidades establecidas en el Código de Procedimientos Penales."

"Artículo 114.-- Secuestro La Administración Tributaria podrá solicitar, mediante resolución fundada, a la autoridad judicial competente, autorización para el secuestro de documentos o bienes cuya preservación se requiera para determinar la obligación tributaria o, en su caso, para asegurar las pruebas de la comisión de una infracción o un acto ilícito tributario.

Esta medida tiene el propósito de garantizar la conservación de tales documentos o bienes y no podrá exceder de treinta días naturales prorrogables por igual plazo.

Al practicarse esta diligencia, deberán levantarse un acta y un inventario de los bienes secuestrados y nombrarse un depositario judicial. El secuestro de bienes estará sujeto a las formalidades establecidas en el Código de Procedimientos Penales."

"Artículo 115.-- Uso de la información La información obtenida o recabada sólo podrá usarse para fines tributarios de la propia Administración Tributaria, la cual esta impedida para trasladarla o remitirla a otras oficinas, dependencias o instituciones públicas o privadas. El incumplimiento de esta disposición constituirá el delito de divulgación de secretos, tipificado en el artículo 337 del Código Penal.

La prohibición indicada en este artículo no impide trasladar ni utilizar toda la información necesaria requerida por los tribunales comunes.

La información y la prueba general obtenidas o recabadas como resultado de actos ilegales realizados por la Administración Tributaria, no producirán ningún efecto Jurídico contra el sujeto fiscalizado."

Artículo 6.-- Se corrige la numeración de los artículos 111 a 145 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que pasarán a ser los artículos 116 a 150.

Artículo 7.-- Se reforma el párrafo final del artículo 117, los incisos b) y e) del artículo 128, el inciso g) del artículo 147 y se adiciona un inciso h) a ese mismo artículo, cuyos textos dirán:

"Artículo 117.-- Carácter confidencial de las informaciones

Las informaciones que la Administración Tributaria obtenga de los contribuyentes, responsables y terceros, por cualquier medio, tienen carácter confidencial; y sus funcionarios y empleados no pueden divulgar en forma alguna la cuantía u origen de las rentas, ni ningún otro dato que figure en las declaraciones, ni deben permitir que estas o sus copias, libros o documentos, que contengan extractos o referencia de ellas sean vistos por otras personas que las encargadas en la Administración de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales reguladoras de los tributos a su cargo.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el contribuyente, su representante legal, o cualquier otra persona debidamente autorizada por aquel, pueden examinar los datos y anexos consignados en sus respectivas declaraciones juradas, lo mismo que cualquier expediente que contemple ajustes o reclamaciones formuladas sobre dichas declaraciones.

La prohibición que señala este artículo no impide la inspección de las declaraciones por los tribunales Comunes. Tampoco impide el secreto de las declaraciones, la publicación de datos estadísticos o del registro de valores de los bienes inmuebles, así como de la jurisprudencia tributaria

conforme a lo previsto en el artículo 107 de este Código, o el suministro de informes a los personeros de los Poderes Públicos, siempre que se hagan en tal forma que no pueda identificarse a las personas.

Las prohibiciones y las limitaciones establecidas en este artículo alcanzan también a los miembros y empleados del Tribunal Fiscal Administrativo, así como a los servidores de los bancos del Sistema Bancario Nacional, las sociedades financieras de inversión y crédito especial de carácter no bancario y las demás entidades reguladas por la Auditoría General de Entidades Financieras."

"Artículo 128.-- Obligaciones de los particulares Los contribuyentes y responsables están obligados a facilitar las tareas de determinación, fiscalización e investigación que realice la Administración Tributaria y, en especial, deben:

- a) Cuando lo requieran las leyes o los reglamentos o lo exija dicha Administración en virtud de las facultades que le otorga este Código.
 - i) Llevar los libros y registros especiales a que alude el inciso a) del artículo 110 de este Código;
 - ii) Inscribirse en los registros pertinentes, a los que deben aportar los datos necesarios y comunicar oportunamente sus modificaciones; y
 - iii) Presentar las declaraciones que correspondan;
- b) Conservar, en forma ordenada, los libros de comercio, los libros, los registros, los documentos y los antecedentes de las operaciones o situaciones que constituyan hechos gravados.
- c) Dar facilidades a los funcionarios fiscales autorizados para que realicen las inspecciones o verificaciones en sus establecimientos comerciales o industriales, inmuebles, oficinas, depósitos o en cualquier otro lugar;
- d) Presentar o exhibir en las oficinas de la Administración Tributaria o ante los funcionarios autorizados las declaraciones, informes, documentos y demás comprobantes, relacionados con hechos generadores de sus obligaciones tributarias y formular las aplicaciones o aclaraciones que se les soliciten;
- e) Comunicar, a la Administración, el cambio del domicilio fiscal. f) Concurrir personalmente o por medio de sus representantes debidamente autorizados, a las oficinas de la Administración Tributaria, cuando su presencia sea requerida."

"Artículo 147.-- Requisitos de la resolución Toda resolución administrativa debe llenar los siguientes requisitos:

- a) Enunciación del lugar y fecha;
- b) Indicación del tributo, del período fiscal correspondiente y, en su caso, del avalúo practicado;
- c) Apreciación de las pruebas y de las defensas alegadas;
- d) Fundamentos de la decisión;
- e) Elementos de determinación aplicados, en caso de estimación sobre la base presunta;

- f) Determinación de los montos exigibles por tributos e indicación de las infracciones que se le atribuyan;
- g) Calificación de las infracciones en que se haya incurrido, para aplicar los recargos mencionados en los artículos 57 y 76 del presente Código;
- h) Firma del funcionario legalmente autorizado para resolver. La ausencia de cualquiera de estos requisitos vicia de nulidad el acto."

Artículo 8.-- Se sustituye la Sección Quinta del Capítulo IV del Título IV del Código de Normas y Procedimientos Tributarios que se leerá así:

"SECCION QUINTA CAPITULO IV DEL TITULO IV DEL CODIGO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS

Procedimiento para aplicar sanciones administrativas

"Artículo 148.-- Principios generales En todos los casos, a la Administración Tributaria le corresponde acreditar, según el principio de libre valoración de la prueba y mediante el procedimiento sancionador referido en esta sección, que el sujeto pasivo es el autor de las infracciones. Siempre deberá respetarse el derecho de defensa."

"Artículo 149.-- Organos competentes para sancionar

Las sanciones administrativas tributarias serán impuestas por los órganos de la Administración Tributaria que dicten los actos administrativos mediante los cuales se determinen los tributos o, en su caso, los ingresos por retenciones a cuenta de ellos."

"Artículo 150.-- Procedimiento para sancionar El expediente sancionador se iniciará mediante propuesta motivada del funcionario competente o del titular de la unidad administrativa donde se tramite el expediente, o bien, mediante propuesta motivada de los funcionarios de la Administración Tributaria, cuando estos consten en las actas las diligencias, las acciones o las omisiones constitutivas de infracciones tributarias.

Presentada la propuesta, se pondrán en conocimiento del eventual infractor los cargos que se le imputan y se le concederá un plazo de diez días hábiles para expresar lo que desee y aportar la prueba correspondiente.

Agotado el procedimiento anterior, la Administración Tributaria dictará la resolución respectiva, dentro de los quince días hábiles siguientes.

La resolución del ente o del órgano competente deberá basarse en los hechos tenidos por probados para aplicar la sanción pecuniaria principal, por parte de los órganos de la Administración Tributaria; además, estará vinculada con lo establecido para el tipo legal de infracción de que se trate.

La resolución tendrá recurso de revocatoria ante el órgano que dictó el acto, con apelación en subsidio para ante el Tribunal Fiscal Administrativo. Ambos recursos deberán interponerse dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación. El Tribunal Fiscal deberá resolver dentro del término de un año.

También se aplicará el régimen general de impugnación en la vía contencioso-administrativa previsto en este Código y en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; sin

embargo, no será aplicable la norma del inciso 9) del artículo 83 de esa última ley. Con respecto a la suspensión de la ejecución del acto administrativo sancionatorio, se aplicará el régimen general de los artículos 91 y siguientes, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa."

Artículo 9º-- Se agregan cuatro artículos, que llevarán los números 151, 152, 153 y 154 al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, cuyos textos dirán:

"Artículo 151.-- Caso especial Cuando la infracción se relacione con el disfrute indebido de beneficios fiscales previamente, deberá agotarse el procedimiento previsto en el Capítulo IX de la Ley reguladora de todas las exoneraciones vigentes, su derogatoria y excepciones, N° 7293, del 31 de marzo de 1992."

"Artículo 152.-- Resolución del órgano competente En todos los casos, la imposición de sanciones requerirá la resolución expresa del órgano competente y surtirá efecto a partir del día siguiente a la fecha de la notificación al sujeto infractor."

"Artículo 153.-- Inicio de causa Para iniciar la causa, no será necesario que el procedimiento de determinación de los tributos haya agotado la vía administrativa."

"Artículo 154.-- Actas de inspección En los informes o las actas de inspección, deben consignarse las circunstancias de la infracción que se imputa. El interesado debe firmar el acta y en ella puede dejar las constancias que estime conveniente. Cuando se niegue a firmarla o no pueda, el funcionario actuante debe dejar constancia de ello."

Artículo 10.-- Se corrige la numeración de los artículos 146 y siguientes del Código vigente, que pasarán a ser los artículos 155 y siguientes.

Artículo 11.-- Se reforman los artículos 156, 161 y 163 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, cuyos textos dirán:

"CAPITULO V RECURSOS

"Artículo 156.-- Recurso de apelación Contra las resoluciones administrativas mencionadas en los artículos 29, 40, 43 102, 119, 146, y en el párrafo final del artículo 168 de este Código, los interesados pueden interponer recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que fueron notificados. Igual recurso procede si, dentro del plazo de dos meses indicado en el segundo párrafo del artículo 46 de esta Ley, la Administración Tributaria no dicta la resolución respectiva.

Recibido el recurso con los antecedentes, según se especifica en el párrafo anterior, el Tribunal Fiscal Administrativo lo pondrá en conocimiento del interesado para que presente los alegatos y las pruebas pertinentes en defensa de sus derechos, si lo tiene a bien."

"Artículo 161.-- Integración del Tribunal Fiscal Administrativo El Poder Ejecutivo debe designar, individualmente, al Presidente y a los cuatro propietarios del Tribunal Fiscal Administrativo, previo concurso de antecedentes, que ha de efectuarse formalmente, con la intervención de las autoridades que establece el Estatuto de Servicio Civil. Las formalidades y las disposiciones sustantivas fijadas en ese ordenamiento se observarán igualmente para la remoción de los miembros de este Tribunal.

La retribución de los integrantes del Tribunal debe ser igual al sueldo de los miembros de los tribunales superiores del Poder Judicial, la del resto del personal deberá equipararse, según el caso, a

la de los cargos equivalentes del personal de esos tribunales o de otros órganos del Poder Judicial donde se desempeñen cargos iguales o similares."

"Artículo 163.-- Actuación del Tribunal Fiscal Administrativo El Tribunal Fiscal Administrativo debe ajustar su actuación al procedimiento y a las normas de funcionamiento establecidas en el presente Código, así como en la Ley General de Administración Pública, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y la Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo que sean aplicables supletoriamente.

Para tramitar los asuntos a su cargo, el Tribunal establecerá plazos comunes e improrrogables a las partes para que presenten sus alegaciones y pruebas de descargo, dentro del espíritu de la búsqueda de la verdad real de los hechos y la necesaria celeridad del procedimiento. Para desvirtuar las afirmaciones y los cargos hechos por la Administración Tributaria, los administrados podrán acudir a cualquier medio de prueba aceptado por el ordenamiento jurídico positivo aplicable. Los informes y certificaciones de los contadores públicos autorizados, de otros profesionales que tengan fe pública, o de las autoridades públicas competentes, designadas en forma independiente por el Tribunal Fiscal Administrativo, hacen plena prueba y, en tal caso, la carga de la prueba para desvirtuarlos correrá a cargo de la Administración Tributaria."

MODIFICACIONES Y ADICIONES A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, N° 7092, DEL 21 DE ABRIL DE 1988, Y SUS REFORMAS

Artículo 12.-- Se modifican los incisos d) y f), el párrafo primero del inciso m) y los párrafos antepenúltimo y penúltimo del artículo 8, de la Ley del impuesto sobre la renta N° 7092, del 21 de abril de 1988, y sus reformas, cuyos textos dirán:

"Artículo 8.-- Gastos deducibles Son deducibles de la renta bruta:

- a) El costo de los bienes y servicios vendidos, tales como la adquisición de bienes y servicios objeto de la actividad de la empresa; las materias primas, partes, piezas y servicios para producir los bienes y servicios vendidos; los combustibles, la fuerza motriz y los lubricantes y similares; y los gastos de las explotaciones agropecuarias necesarias para producir la renta.
- b) Los sueldos, los sobresueldos, los salarios, las bonificaciones, las gratificaciones, las regalías, los aguinaldos, los obsequios y cualquier otra remuneración por servicios personales efectivamente prestados, siempre y cuando proceda y se hayan hecho las retenciones y enterado los impuestos a que se refiere el título II de esta Ley.

Además, podrá deducirse una cantidad igual, adicional a la que se pague por los conceptos mencionados en el párrafo anterior a personas lisiadas que presenten limitaciones físicas graves, de acuerdo con los requisitos, condiciones y normas que se fijan en el Reglamento de esta Ley.

- c) Los impuestos y tasas que afecten los bienes, servicios y negociaciones del giro habitual de la empresa, o las actividades ejercidas por personas físicas, con las excepciones contenidas en el inciso c) del artículo 9.
- ch) Las primas de seguros contra incendio, robo, hurto, terremoto u otros riesgos, contratados con el Instituto Nacional de Seguros o con otras instituciones aseguradoras autorizadas.
- d) Los intereses y otros gastos financieros, pagados o incurridos por el contribuyente durante el año fiscal, directamente relacionados con el manejo de su negocio y la

obtención de rentas gravables en este impuesto sobre las utilidades, siempre que no hayan sido capitalizados contablemente.

Las deducciones por este concepto estarán sujetas a las limitaciones establecidas en los párrafos siguientes:

No serán deducibles, por considerarlos asimilables a dividendos o participaciones sociales, los intereses y otros gastos financieros pagados en favor de socios de sociedades de responsabilidad limitada.

No será deducible la parte de los intereses atribuible al hecho de que se haya pactado una tasa que exceda las usuales de mercado.

No serán deducibles los intereses cuando no se haya retenido el impuesto correspondiente a ellos.

Cuando el monto de los intereses que el contribuyente pretenda deducir sea superior al cincuenta por ciento (50%) de la renta líquida, el contribuyente deberá completar un formulario especial que le suministrará la Administración Tributaria y, además, brindar la información y las pruebas complementarias que en él se especifiquen.

Para los efectos del párrafo anterior, se entenderá por renta líquida la suma de la renta neta, definida en el artículo 7 de esta Ley, menos el total de ingresos por intereses del período, más las deducciones correspondientes a los intereses financieros deducibles, según se definen en este artículo.

El Poder Ejecutivo podrá establecer, por decreto, una vez al año y antes de iniciarse el período fiscal, un porcentaje superior al cincuenta por ciento (50%), como condición que obliga al contribuyente a presentar el formulario especial mencionado en el párrafo trasanterior.

El deber impuesto a los contribuyentes en el primer párrafo de este inciso no limita las potestades de la Administración de requerir información y pruebas y de practicar las inspecciones necesarias para verificar la legalidad de la deducción de los intereses, de acuerdo con las facultades otorgadas en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

En todo caso, el contribuyente deberá demostrar a la Administración Tributaria el uso de los préstamos cuyos intereses pretende deducir, a fin de establecer la vinculación con la generación de la renta gravable, lo cual deberá evidenciarse en los documentos que deban acompañar la declaración.

Sin perjuicio de los supuestos previstos en los incisos anteriores, cualquier otra circunstancia que revele desconexión entre los intereses pagados y la renta gravable en el período respectivo dará pie para que la deducción de los intereses no sea admisible.

- e) Las deudas manifiestamente incobrables, siempre que se originen en operaciones del giro habitual del negocio y se hayan agotado las gestiones legales para su recuperación, a juicio de la Administración Tributaria y de acuerdo con las normas que se establezcan en el Reglamento de esta Ley.
- f) Las depreciaciones para compensar el desgaste, el deterioro o la obsolescencia económica, funcional o tecnológica de los bienes tangibles productores de rentas gravadas, propiedad del contribuyente, así como la depreciación de las mejoras con carácter permanente o las revaluaciones, conforme se establece para este caso en el inciso b) del artículo sexto. No se admitirá depreciación del valor de la tierra.

En el Reglamento se determinarán los porcentajes máximos que prudencialmente puedan fijarse por concepto de depreciación o los años de vida útil de los bienes; se tomará en consideración la naturaleza de los bienes y la actividad económica en la cual estos son utilizados.

En todos los casos, cuando el contribuyente enajene bienes tangibles, sujetos a depreciación, por cualquier título, y por un valor diferente del que les corresponda a la fecha de la transacción, de acuerdo con la amortización autorizada, tal diferencia se incluirá como ingreso gravable o pérdida deducible, según corresponda, en el período en el que se realice la operación.

El valor de la patente de invención propiedad del contribuyente, podrá amortizarse con base en el tiempo de su vigencia.

Cuando se trate de bienes semovientes -específicamente el ganado dedicado a leche y cría-, así como de determinados cultivos, tendrán concederse depreciaciones o amortizaciones, conforme se establezca en el Reglamento de esta Ley. Los cultivos que, por su ciclo de eficiencia productiva, no puedan catalogarse como permanentes a juicio de la Administración Tributaria, podrán ser amortizados en un número de años que tenga relación directa con su ciclo productivo.

- g) Cuando en un período fiscal una empresa industrial obtenga pérdidas, estas se aceptarán como deducción en los tres siguientes períodos. En el caso de empresas agrícolas, esta deducción podrá hacerse en los siguientes cinco periodos.

Las empresas industriales que inicien actividades después de la vigencia de esta Ley también podrán deducir dichas pérdidas en los siguientes cinco períodos, pero después de cumplidos estos se regirán por la norma contenida en el primer párrafo de este inciso.

La determinación de las pérdidas quedará a juicio de la Administración Tributaria y esta las aceptará siempre que estén debidamente contabilizadas como pérdidas diferidas. Aquellas empresas que, por su naturaleza, realicen actividades agrícolas o industriales combinadas con actividades comerciales, deberán llevar cuentas separadas de cada actividad para poder hacer esta deducción.

El saldo no compensado en los términos indicados no dará derecho al contribuyente a reclamar devoluciones o créditos sobre el impuesto.

- h) La parte proporcional por concepto de agotamiento de los bienes explotables de recursos naturales no renovables, incluidos los gastos efectuados para obtener la concesión, cuando corresponda. Esta deducción deberá relacionarse con el costo del bien y con la vida útil estimada, según la naturaleza de las explotaciones y de la actividad, y de acuerdo con las normas que sobre el particular se contemplen en el Reglamento de esta Ley.

En ningún caso el total de las deducciones por concepto de agotamiento de recursos naturales no renovables podrá sobrepasar el valor de la adquisición del bien.

En este inciso quedan comprendidas las explotaciones de minas y canteras, y de depósitos de petróleo, de gas y de cualesquiera otros recursos naturales no renovables. i) Las cuotas patronales que se establezcan en las leyes.

- j) Las remuneraciones, sueldos, comisiones, honorarios o dietas que se paguen o acrediten a miembros de directorios, de consejos o de otros órganos directivos que actúen en el extranjero.

- k) Los pagos o créditos otorgados a personas no domiciliadas en el país por asesoramiento técnico, financiero o de otra índole, así como por el uso de patentes, suministro de fórmulas, marcas de fábrica, privilegios, franquicias, regalías y similares.

Cuando los pagos o créditos indicados sean a favor de casas matrices de filiales, sucursales, agencias o establecimientos permanentes ubicados en el país, la deducción total por los conceptos señalados no podrá exceder del diez por ciento (10%) de las ventas brutas obtenidas durante el período fiscal correspondiente. Para ello deberán haberse hecho las retenciones del impuesto establecido en esta Ley.

- l) Los pagos o créditos otorgados a personas no domiciliadas en el país por el suministro de noticias, por la producción, la distribución, la intermediación o cualquier otra forma de negociación en el país, de películas cinematográficas y para televisión, "videotapes", radionovelas, discos fonográficos, tiras de historietas, fotonovelas, y todo otro medio similar de proyección, transmisión o difusión de imágenes o sonidos.
- m) Los gastos de representación y similares en que se incurra dentro o fuera del país, los viáticos que se asignen o se paguen a dueños, socios, miembros de directorios u otros organismos directivos o a funcionarios o empleados del contribuyente, siempre que las deducciones por estos conceptos no representen más del uno por ciento (1%) de los ingresos brutos declarados.

Asimismo, serán deducibles los gastos en que se incurra por la traída de técnicos al país o por el envío de empleados del contribuyente a especializarse en el exterior.

- n) Los gastos de organización de las empresas, los cuales podrán deducirse en el período fiscal en que se paguen o acrediten, o, si se acumularan, en cinco períodos fiscales consecutivos, a partir de la fecha del inicio de su actividad productiva, hasta agotar el saldo.

Se considerarán gastos de organización todos los costos y gastos necesarios para iniciar la producción de rentas gravables que, de acuerdo con esta Ley, sean deducidos de la renta bruta.

- ñ) Las indemnizaciones, las prestaciones y las jubilaciones, limitado su monto al triple del mínimo establecido en el Código de Trabajo.
- o) Los gastos de publicidad y de promoción, incurridos dentro o fuera del país, necesarios para la producción de ingresos gravables.
- p) Los gastos de transporte y de comunicaciones, los sueldos, los honorarios y cualquier otra remuneración pagada a personas no domiciliadas en el país.
- q) Las donaciones debidamente comprobadas que durante el período tributario respectivo hubieren sido hechas al Estado, a sus instituciones autónomas y semiautónomas, a las corporaciones municipales, a las universidades del Estado, a las juntas de protección social, a las juntas de educación, a las instituciones docentes del Estado, a la Cruz Roja Costarricense y a otras instituciones como asociaciones o fundaciones para obras de bien social, científicas o culturales; así como las donaciones realizadas en favor de las asociaciones civiles y deportivas que hayan sido declaradas de utilidad pública por el Poder Ejecutivo al amparo del artículo 32 de la Ley de Asociaciones, o de los comités nombrados oficialmente por la Dirección

General de Deportes en las zonas definidas como rurales, según el Reglamento de esta Ley, durante el período tributario respectivo.

La Dirección General de la Tributación Directa tendrá amplia facultad en cuanto a la apreciación y calificación de la veracidad de las donaciones a que se refiere este inciso, y podrá calificar y apreciar las donaciones solamente, cuando se trate de las dirigidas a obras de bien social, científicas o culturales, y a los comités deportivos nombrados oficialmente por la Dirección General de Deportes en las zonas definidas como rurales, según el Reglamento de la presente Ley. En este Reglamento se contemplarán las condiciones y controles que deberán establecerse en el caso de estas donaciones, tanto para el donante como para el receptor.

Como beneficiarios de las donaciones a que este inciso se refiere, a los centros infantiles creados en la Ley de Promoción Social de la Igualdad de la Mujer.

- r) Las pérdidas por destrucción de bienes, por incendio, por delitos en perjuicio de la empresa, debidamente comprobadas y en la parte no cubierta por los seguros.
- s) Los profesionales o técnicos que presten sus servicios sin que medie relación de dependencia con sus clientes, así como los agentes vendedores, agentes comisionistas y agentes de seguros, podrán deducir los gastos necesarios para producir sus ingresos gravables de acuerdo con las normas generales, o bien, podrán acogerse a una deducción única, sin necesidad de prueba alguna, del veinticinco por ciento (25%) de los ingresos brutos de la actividad o de las comisiones devengadas, según corresponda.
- t) Todas las deducciones contempladas en la Ley de Fomento de la Producción Agropecuaria, N° 7064 del 29 de abril de 1987.

La Administración Tributaria aceptará todas las deducciones consideradas en este artículo, excepto la del inciso q) siempre que, en conjunto, se cumpla con los siguientes requisitos:

- 1.-- Que sean gastos necesarios para obtener ingresos, actuales o potenciales, gravados por esta Ley.
- 2.-- Que se haya cumplido con la obligación de retener y pagar el impuesto fijado en otras disposiciones de esta Ley.
- 3.-- Que los comprobantes de respaldo estén debidamente autorizados por la Administración Tributaria. Quedará a juicio de esta exceptuar casos especiales, que se señalarán en el Reglamento de la presente Ley.

La Administración Tributaria está facultada para rechazar, total o parcialmente, los gastos citados en los incisos b), j), k), l), m), n), o), p), s), y t) anteriores, cuando los considere excesivos o improcedentes o no los considere indispensables para obtener rentas gravables, según los estudios fundamentados que realice esa Administración.

Para que puedan deducirse los gastos causados y no pagados en el año, será menester que hayan sido contabilizados en una cuenta especial, de manera que cuando se paguen realmente se imputen a dicha cuenta. No se aceptará deducción de gastos pagados si en un ejercicio anterior se hubieren deducido esos mismos gastos como simplemente causados."

Artículo 13.-- Se modifica el artículo 13 de la Ley del impuesto sobre la renta N° 7092, del 21 de abril de 1988, y sus reformas, cuyo texto dirá:

"Artículo 13.-- Otras rentas presuntivas Para los contribuyentes que sean personas físicas, independientemente de la nacionalidad y el lugar de celebración de los contratos, así como para las empresas individuales de responsabilidad limitada y las empresas individuales que actúen en el país, se presumirá que, salvo prueba directa o indirecta en contrario, obtienen una renta mínima anual por los conceptos siguientes:

- a) Prestación de servicios en forma liberal: todo profesional o técnico que preste servicios sin que medie relación de dependencia con sus clientes, que no presente declaración sobre la renta cuando corresponda y, por ende, no cancele el impuesto correspondiente o no emita los recibos o comprobantes debidamente autorizados por la Administración Tributaria, como lo establece esta Ley, o que incurra en alguna de las causales establecidas en los incisos 1) y 2), del presente artículo, se presumirá que obtiene una renta neta mínima anual de acuerdo con la clasificación siguiente:
 - i) Médicos, odontólogos, arquitectos, ingenieros, abogados y notarios, agrimensores, contadores públicos, profesionales de las ciencias económicas, y corredores de bienes raíces, el monto equivalente a trescientos treinta y cinco (335) salarios base.
 - ii) Peritos, contadores privados, técnicos y, en general, todos los profesionales y técnicos, colegiados o no, que no se contemplen en el numeral anterior, el monto equivalente a doscientos cincuenta (250) salarios base. En ningún caso, esas rentas de presunción mínima se podrán prorratear entre el tiempo que el profesional o el técnico dedique a prestar otros servicios, sean estos en relación de dependencia, o bien, por el desarrollo de otras actividades sujetas a este impuesto.
- b) Para explotar el transporte terrestre remunerado de personas y carga, si no se presentan declaraciones o si se ha incurrido en alguna de las causales establecidos los incisos 1) y 2) de este artículo, la renta neta mínima anual presuntiva será el monto equivalente a:

Vehículos de carga con un peso bruto vehicular igual o mayor a cuatro mil (4 000) kilos... ciento diecisiete (117) salarios por cada vehículo.

Autobuses ciento diecisiete (117) salarios base Microbuses ochenta y cuatro (84) salarios base Taxis ochenta y cuatro (84) salarios base Para calcular el impuesto no se permitirá fraccionar esa renta. El cálculo debe efectuarse antes de repartir dividendos o cualquier otra clase de utilidades entre socios, accionistas o beneficiarios y antes de separar las reservas legales o las especiales. Las presunciones establecidas en este artículo se aplicarán si ocurre alguna de las siguientes causales:

1. Que no presenten la declaración de la renta.
2. Que no lleven las operaciones debidamente registradas en los libros legales y amparadas por comprobantes fehacientes y timbrados, cuando corresponda.

Las presunciones establecidas en este artículo no limitan las facultades de la Administración Tributaria para establecer las rentas netas que realmente , correspondan, por aplicar las disposiciones de esta Ley y del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

La denominación "salario base" utilizada en este artículo, debe entenderse como la contenida en el artículo 2 de la Ley N° 7337."

Artículo 14.-- Se modifican los artículos 20 y 21 de la Ley del impuesto sobre la renta, N° 7092, del 21 de abril de 1988, y sus reformas, cuyos textos dirán:

"Artículo 20.-- Plazo para presentar declaraciones y cancelar el impuesto

Los sujetos pasivos mencionados en el artículo 2 de esta Ley deberán presentar la declaración jurada de sus rentas y, simultáneamente, cancelar el impuesto respectivo, en los lugares que designe la Administración Tributaria, dentro de los tres meses siguientes al término del período fiscal, cualquiera sea la cuantía de las rentas brutas obtenidas y aun cuando estas estén total o parcialmente exentas, o no estén sujetas por disposición legal a pagar el impuesto.

Junto con la declaración, deberán presentarse los estados financieros y económicos, así como las notas explicativas donde se justifiquen todos y cada uno de los rubros consignados en aquella. Estos rubros deberán coincidir con los registros de los libros de contabilidad y con los comprobantes que respaldan los asientos. Los contribuyentes que tengan actividades referidas a un período menor de cuatro meses, comprendido entre el día en que se iniciaron los negocios y la fecha del cierre del período fiscal, estarán exentos de presentar la declaración respectiva, pero, el movimiento referente a ese lapso deberá adjuntarse a la declaración siguiente. Además, deberá efectuarse por separado la liquidación de cada período.

En el caso de que un contribuyente cese sus actividades y por ese motivo no esté obligado a presentar la declaración jurada de sus rentas, deberá dar aviso, por escrito, a la Administración Tributaria y adjuntar una última declaración y el estado o balance final, dentro de los treinta días siguientes al término de sus negocios, fecha en que deberá pagar el impuesto correspondiente, si lo hubiere.

Cuando se trate de las empresas a las que se refiere el artículo 2 de esta Ley. La obligación de presentar la declaración jurada de sus rentas subsiste, aun cuando se extingan legalmente, si continúan ejerciendo actividades de hecho.

Los contribuyentes, afectos al impuesto único sobre las rentas de trabajo dependiente, no estarán obligados a presentar la declaración exigida en este artículo.

La obligación de presentar la declaración subsiste aun cuando no se pague el impuesto."

"Artículo 21.-- Liquidación y pago del impuesto e impuesto sobre la renta disponible El impuesto resultante de la liquidación de las declaraciones presentadas en el término deberá pagarse dentro de los tres meses siguientes a la terminación del período fiscal respectivo, salvo la situación prevista en el párrafo tercero del artículo 20 de esta Ley.

El impuesto liquidado, así como los recargos, intereses o multas, en el caso de declaraciones presentadas después de las fechas indicadas, deberá pagarse en el Banco Central de Costa Rica, sus agencias o en las tesorerías autorizadas.

El recibo oficial cancelado por la oficina recaudadora correspondiente será suficiente como comprobante del pago de las sumas en él indicadas.

El impuesto a que aluden los artículos 18 y 19 de esta Ley deberá ser enterado al Fisco, dentro de los primeros diez días hábiles del mes siguiente a aquel en que se efectuó el pago, retiro o acreditación de la renta disponible.

Cuando el pago se efectúe mediante cheque, la validez del recibo queda condicionada a que el cheque no sea rechazado por el banco contra el que se ha girado. "

Artículo 15.-- Se modifican el inciso c) y el párrafo final del artículo 22, cuyos textos dirán:

"Artículo 22.-- Pagos parciales del impuesto Los contribuyentes a que se refiere el artículo 2 de esta Ley están obligados a efectuar pagos parciales a cuenta del impuesto de cada periodo fiscal, conforme con las reglas siguientes:

- a) Servirá de base para calcular las cuotas de pagos parciales el impuesto determinado en el año inmediato anterior, o el promedio aritmético de los tres últimos períodos fiscales, el que fuere mayor.

En el caso de contribuyentes que por cualquier circunstancia no hubieren declarado en los tres períodos fiscales anteriores, la base para calcular las cuotas de los pagos parciales se determinará utilizando las declaraciones que hubieren presentado y, si fuere la primera, mediante estimación fundada que al efecto deberá proporcionar a la Administración Tributaria el contribuyente de que se trate. Dicha estimación deberá presentarse a más tardar en el mes de enero de cada año. Si no se presentare, la Administración Tributaria establecerá de oficio la cuota respectiva.

- b) Determinado el monto del pago a cuenta, el setenta y cinco por ciento (75%) de ese monto deberá fraccionarse en tres cuotas iguales, las que deberán pagarse sucesivamente a más tardar el último día hábil de los meses de marzo, junio y setiembre de cada año.
- c) Del impuesto total que se liquide al presentar la declaración jurada, deberán deducirse los pagos parciales que correspondan a ese periodo fiscal. El saldo resultante deberá pagarse dentro de los tres meses siguientes al término del período fiscal respectivo. Las empresas que obtengan sus ingresos de actividades agropecuarias exclusivamente, podrán pagar el impuesto del período fiscal en una sola cuota, dentro de los tres meses siguientes a la terminación del periodo fiscal que corresponda.

La Administración Tributaria podrá rectificar las cuotas de los pagos parciales cuando los contribuyentes lo soliciten por escrito, antes de la fecha de su vencimiento y demuestren satisfactoriamente, ante esa dependencia, que la base del cálculo está afectada por ingresos extraordinarios o cuando se prevean pérdidas para el período fiscal del que se trate."

Artículo 16.-- Se adiciona un inciso g) al artículo 23 de la Ley del impuesto sobre la renta, N° 7092, del 21 de abril de 1988, cuyo texto dirá:

"Artículo 23.-- Retención en la fuente Toda empresa pública o privada, sujeta o no al pago de este impuesto, incluidos el Estado, los bancos del Sistema Bancario Nacional, el Instituto Nacional de Seguros y las demás instituciones autónomas o semiautónomas, las municipalidades y las asociaciones e instituciones a que se refiere el artículo 3 de esta Ley, está obligado a actuar como agente de retención o de percepción del impuesto, cuando pague o acredite rentas afectas al impuesto establecido en esta Ley. Para estos fines, los indicados sujetos deberán retener y enterar al Fisco, por cuenta de los beneficiarios de las rentas que a continuación se mencionan, los importes que en cada caso se señalan:

- a) Salarios y cualquier otra remuneración que se pague en ocasión de trabajos personales ejecutados en relación de dependencia. En estos casos el pagador o patrono deberá calcularle el impuesto mensual que corresponda a cada uno de los beneficiarios de las rentas indicadas.

Si el beneficiario fuere una persona no domiciliada en Costa Rica, sobre el monto pagado o acreditado se retendrán las sumas del impuesto que procedan, de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de esta Ley. En el Reglamento se incluirán las disposiciones a que se refiere este inciso.

- b) Dietas, gratificaciones y otras prestaciones por servicios personales, en ocasión del trabajo en relación de dependencia. En estos casos, si los beneficiarios de tales rentas fueren personas domiciliadas en el país, el pagador deberá retener el diez por ciento (10%) sobre los importes que pague o acredite a dichas personas; si los receptores de la renta fueren personas no domiciliadas en Costa Rica, se retendrán las sumas que correspondan, según lo estipulado en el artículo 54 de esta Ley.

c)

1.-- Los emisores, agentes pagadores, sociedades anónimas y otras entidades públicas o privadas que, en función de captar recursos del mercado financiero, paguen o acrediten intereses o concedan descuentos sobre pagarés y toda clase de títulos valores, a personas domiciliadas en Costa Rica, deberán retener el quince por ciento (15%) de dicha renta por concepto de impuesto.

Si los títulos valores se inscribieren en una bolsa de comercio reconocida oficialmente, o hubieren sido emitidos por entidades financieras debidamente registradas en la Auditoría General de Bancos, al tenor de la Ley N° 5044 del 7 de setiembre de 1972 y sus reformas, por el Estado y sus instituciones, por los bancos integrados al Sistema Bancario Nacional, por las cooperativas, o cuando se trate de letras de cambio y aceptaciones bancarias, el porcentaje por aplicar será el ocho por ciento (8%).

Cuando los bancos y las entidades financieras mencionadas en el párrafo anterior avalen letras de cambio o aceptaciones bancarias, la retención se aplicará sobre el valor de descuento que, para estos casos, se equiparará a la tasa de interés pasiva fija por el Banco Central de Costa Rica, para el plazo correspondiente, más tres puntos porcentuales.

No estarán sujetas al impuesto sobre la renta ni al establecido en este inciso, las rentas derivadas de títulos valores en moneda extranjera, emitidos por el Estado o por los bancos del Estado y los títulos emitidos en moneda nacional por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal y por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, al amparo de la Ley N° 7052 del 13 de noviembre de 1986. Las inversiones de fideicomiso sin fines de lucro, creado mediante el artículo 6 de la Ley N° 7044 del 29 de setiembre de 1986, Ley de creación de la Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda.

Asimismo, no están sujetas a esta retención, únicamente, las entidades enumeradas que se encuentren en las condiciones señaladas en el inciso a) del artículo 3 de la presente Ley y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, cuando inviertan en títulos valores emitidos por el Ministerio de Hacienda.

Las sumas retenidas se considerarán como impuesto único y definitivo.

Se faculta a la Dirección General de la Tributación Directa para que, en aquellos casos en que por la naturaleza del título se dificulte la retención en la fuente, pueda autorizar, con carácter general, otra modalidad de pago.

2.-- Las retenciones de los impuestos a que se refieren los incisos anteriores deberán practicarse en la fecha en la que se efectúe el pago o crédito, según el acto que se realice primero. Asimismo, deberán depositarse en el Banco Central de Costa Rica o en sus tesorerías auxiliares, dentro de los primeros diez días hábiles del mes siguiente a aquella fecha.

- ch) Excedentes pagados por las cooperativas y las asociaciones solidaristas y similares.

Estas entidades deberán enterar al Fisco, como impuesto único y definitivo, por cuenta de sus asociados, un monto equivalente al cinco por ciento (5%) de los excedentes o utilidades distribuidas.

- d) Remesas o créditos a favor de beneficiarios domiciliados en el exterior. En estos casos, el pagador retendrá, como impuesto único y definitivo, las sumas del impuesto que correspondan de acuerdo con lo señalado en el artículo 54 de esta Ley.
- e) Transporte, comunicaciones, reaseguros, películas cinematográficas, noticias internacionales y los otros servicios mencionados en los incisos a), b), c) y ch) del artículo 11 de esta Ley, prestados por empresas no domiciliadas en el país. En estos casos, si las empresas que suministran los servicios tienen representante permanente en Costa Rica, las empresas usuarias deberán retener, como pago a cuenta del impuesto establecido en el artículo 15 de esta Ley, el tres por ciento (3%) sobre los importes pagados o acreditados

Cuando dichas empresas no tengan representantes permanentes en el país, las empresas usuarias de los servicios deberán retener, como impuesto único, las sumas que a continuación se mencionan:

- i) El ocho punto cinco por ciento (8.5%) sobre el monto pagado o acreditado, tratándose de servicios de transporte y comunicaciones.
- ii) El cinco punto cinco por ciento (5.5%), tratándose de reasegurados, reafianzamientos y primas cedidas de cualquier clase. iii) El veinte por ciento (20%) sobre el importe pagado o acreditado en el caso de prestación de los otros servicios indicados en el inciso e).
- f) Utilidades, dividendos y participaciones sociales. En estos casos se deberán aplicar las disposiciones a que se refieren los artículos 18 y 19 de esta Ley.

Las personas que actúen como agentes de retención o percepción del impuesto, deberán depositar el importe de las retenciones practicadas en el Banco Central de Costa Rica, sus agencias, o en las tesorerías auxiliares autorizadas, dentro de los primeros diez días hábiles del mes siguiente a la fecha en que se efectuaron. En el Reglamento se establecerán, en cada caso, los requisitos que deberán cumplir los agentes de retención o percepción, así como lo relativo a los informes que deberán proporcionar a la Administración Tributaria, y a los comprobantes que deberán entregar a las personas a quienes se les hizo la retención de que se trate.

Los requisitos que deberán cumplir y la forma de las retenciones que establece este artículo serán fijados en el Reglamento de esta Ley.

- g) El Estado o sus instituciones, autónomas o semiautónomas, las municipalidades, las empresas públicas y otros entes públicos, en los casos de licitaciones públicas o privadas, contrataciones, negocios u otras operaciones realizadas por ellas, que paguen o acrediten rentas a personas físicas o jurídicas con domicilio en el país, deben retener el dos por ciento (2%) del producto bruto sobre las cantidades mencionadas, aun cuando se trate de pagos a cuenta o adelanto de esas operaciones.

El contribuyente podrá solicitar que los montos de las retenciones efectuadas con base en la presente disposición, se acrediten a los pagos parciales citados en el artículo 22 de esta Ley.

Esas retenciones deben practicarse en las fechas en que se efectúen los pagos o los créditos que las originen. Las sumas retenidas deberán depositarse en los bancos del Sistema Bancario Nacional o en sus agencias o sucursales, que cuenten con la autorización del Banco Central, dentro de los primeros diez (10) días del mes siguiente a la fecha de la retención; se utilizará el formulario que proporcionará la Administración Tributaria o, si este documento no está disponible, los enteros corrientes para pagos al Gobierno

Artículo 17.-- Se modifican los incisos c) y ch) del artículo 27 y el párrafo primero del artículo 28 de la Ley del impuesto sobre la renta, N° 7092, del 21 de abril de 1988, cuyos textos dirán:

"Artículo 27.-- Ingresos afectos A las personas físicas domiciliadas en el país se les aplicará, calculará y cobrará un impuesto mensual, de conformidad con la escala que se señalará sobre las rentas que a continuación se detallan y cuya fuente sea el trabajo personal dependiente o la jubilación o pensión:

- a) Sueldos, sobresueldos, salarios, premios, bonificaciones, gratificaciones, comisiones, pagos por horas extraordinarias de trabajo, regalías y aguinaldos, siempre que superasen lo establecido en el inciso b) del artículo 30, que les paguen los patronos a los empleados por la prestación de servicios personales.
- b) Dietas, gratificaciones y participaciones que reciban los ejecutivos, directores, consejeros y miembros de sociedades anónimas y otros entes jurídicos.
- c) Otros ingresos o beneficios similares a los mencionados en los incisos anteriores, incluyendo el salario en especie.
- ch) Las jubilaciones y las pensiones de cualquier régimen.

Cuando los ingresos o beneficios mencionados en el inciso c) no tengan la representación de su monto, será la Administración Tributaria la encargada de evaluarlos y fijarles su valor monetario, a petición del obligado a retener.

Cuando este caso no se dé, la Dirección General de Tributación Directa podrá fijar de oficio su valor."

"Artículo 28.-- Escala de tarifas El empleador o el patrono retendrá el impuesto establecido en el artículo anterior y lo aplicará sobre la renta total percibida mensualmente por el trabajador. En los casos de los incisos a), b) y c) del artículo anterior lo aplicará el Ministerio de Hacienda y, en el caso del inciso ch) de ese mismo artículo, todas las demás entidades, públicas o privadas, pagadoras de pensiones. La aplicación se realizará según la siguiente escala progresiva de tarifas:

- a) Las rentas de hasta ¢ 96.000,00 mensuales no estarán sujetas al impuesto.
- b) Sobre el exceso de ¢ 96.000,00 mensuales y hasta ¢ 144.000,00 mensuales, se pagará el diez por ciento (10%).
- c) Sobre el exceso de ¢ 144.000,00 mensuales se pagará el quince por ciento (15%).
- ch) Las personas que obtengan rentas de las contempladas en los incisos b) y c) del artículo 27 pagarán sobre el ingreso bruto, sin deducción alguna, el diez por ciento (10%).

El impuesto establecido en este artículo, que afecta a las personas que solamente obtengan ingresos por su trabajo personal dependiente o por concepto de jubilación o pensión, tendrá el carácter de único, respecto a las cantidades a las cuales se aplica. Los excesos de dicho monto deberán ser tratados conforme se establece en el párrafo segundo del artículo 41 de esta Ley.

Artículo 18.-- Se modifica el artículo 38 de la Ley del impuesto sobre la renta, N° 7092, del 21 de abril de 1988, cuyo texto dirá:

"Artículo 38.-- Certificación de las retenciones En cada período fiscal, el empleador, el patrono o el pagador deberá entregar a sus empleados, pensionados o jubilados, un estado donde conste el total de las remuneraciones pagadas y de los impuestos retenidos y pagados.

Igualmente, en el Reglamento de esta Ley podrán fijarse otros requisitos que los retenedores deberán cumplir, o los documentos que deberán presentar en la Dirección General de la Tributación Directa."

Artículo 19.-- Se modifica el artículo 46 de la Ley del impuesto sobre la renta, N° 7092, del 21 de abril de 1988, cuyo texto dirá:

"Artículo 46.-- Libros contables En el Reglamento de la presente Ley se fijarán los requisitos y las condiciones en cuanto a los libros de contabilidad y otros que deberán llevar los contribuyentes. También, en cuanto a los sistemas especiales que ellos puedan solicitar.

Las disposiciones de esta Ley, que afecten la contabilidad de los contribuyentes, tienen el carácter de ajustes a los resultados mostrados por aquella, necesarios para determinar la renta imponible; pero, no son principios de contabilidad a que deban sujetarse. La Administración Tributaria prescribirá los registros que requiera para llevar, en cuentas de memorándum, los ajustes señalados en este párrafo."

MODIFICACIONES Y ADICIONES A LA LEY DEL IMPUESTO GENERAL SOBRE LAS VENTAS, N° 6826, DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 1982, Y SUS REFORMAS

Artículo 20.-- Se modifica el inciso c) del artículo 2 de la Ley del impuesto general sobre las ventas, N° 6826, del 8 de noviembre de 1982 y sus reformas, cuyo texto dirá:

"Artículo 2.-- Venta Para los fines de esta Ley se entiende por venta:

- a) La transferencia del dominio de mercadería.
- b) La importación o internación de mercancías en el territorio nacional.
- c) La venta en consignación, el apartado de mercancías, así como el arrendamiento de mercancías con opción de compra
- ch) El retiro de mercancías para uso o consumo personal del contribuyente.
- d) La prestación de los servicios a que se refiere el artículo anterior.
- e) Cualquier acto que involucre o que tenga por fin último la transferencia del dominio de mercancías, independientemente de su naturaleza jurídica y de la designación, así como de las condiciones pactadas por las partes."

Artículo 21.-- Se modifica el inciso c) y se adiciona un inciso d) al artículo 3 de la Ley general sobre las ventas, N° 6826, del 8 de noviembre de 1982 y sus reformas, cuyos textos dirán:

"Artículo 3.-- Hecho generador El hecho generador del impuesto ocurre:

- a) En la venta de mercancías, en el momento de la facturación o entrega de ellas, en el acto que se realice primero.
- b) En las importaciones o internaciones de mercancías en el momento de la aceptación de la póliza o del formulario aduanero, según corresponda.
- c) En la prestación de servicios, en el momento de la facturación o de la prestación del servicio, en el acto que se realice primero.
- ch) En el uso o consumo de mercancías por parte de los contribuyentes, en la fecha en que aquellas se retiren de la empresa.
- d) En las ventas en consignación y los apartados de mercaderías, en el momento en que la mercadería queda apartada, según sea el caso."

Artículo 22.-- Se modifica el artículo 4 y el párrafo primero del artículo 5 de la Ley general sobre las ventas, N° 6826, del 8 de noviembre de 1982 y sus reformas, cuyos textos dirán:

"Artículo 4.-- Contribuyentes y declarantes Las personas físicas o jurídicas, de derecho o de hecho, públicas o privadas, que realicen ventas o presten servicios en forma habitual, son contribuyentes de este impuesto. Asimismo, las personas de cualquier naturaleza, que efectúen importaciones o internaciones de bienes, están obligadas a pagar el impuesto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de esta Ley.

Además, son declarantes de este impuesto las personas, físicas o jurídicas, de derecho o de hecho, públicas o privadas, que realicen ventas por exportaciones.

Todos los exportadores, contribuyentes o no contribuyentes de este impuesto, están obligados a presentar declaraciones. Se crea el régimen de tributación simplificada para pequeños contribuyentes, conforme se establece en los artículos 27, 28, 29 y 30 de esta Ley. Estos contribuyentes deberán llevar registros contables especiales, en la forma y las condiciones que se determinen en el Reglamento de la presente Ley."

"Artículo 5.-- Inscripción Al iniciar sus actividades gravadas, las personas o las entidades a las que se refiere el artículo anterior deben inscribirse en el registro de contribuyentes que deberá llevar la Administración Tributaria. Las personas o las entidades que no hayan solicitado la inscripción serán inscritas de oficio por esa Administración Tributaria.

Sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderles, las personas que no cumplan con las obligaciones de inscribirse quedan obligadas, de todas maneras, al pago del impuesto, y no tendrán derecho a devolución o crédito por el impuesto pagado sobre la existencia de mercancías que mantengan en inventario a la fecha de su inscripción como contribuyentes."

Artículo 23.-- Se modifica el párrafo primero y se adiciona un párrafo segundo en el artículo 8, cuyos textos dirán:

"Artículo 8.-- Obligaciones de los contribuyentes y declarantes En todos los casos, los contribuyentes y los declarantes están obligados a extender facturas o documentos equivalentes,

debidamente autorizados por la Administración Tributaria, en las ventas de mercancías o por los servicios prestados. En esos documentos, deben consignar su número de inscripción y anotar, por separado, el precio de venta, el impuesto correspondiente y los demás datos que se establezcan en el Reglamento de esta Ley. No obstante, la Administración Tributaria queda facultada para eximir de esta obligación a los contribuyentes y declarantes, en casos debidamente justificados por los interesados, siempre que se trate de ventas a personas que no sean contribuyentes de este impuesto.

Los contribuyentes y los declarantes deberán llevar registros contables en la forma y las condiciones que se determinen en el Reglamento.

Asimismo, los contribuyentes deben consignar su número de inscripción en toda declaración, comprobante de depósito y comunicación que presenten o dirijan a la Administración Tributaria."

Artículo 24.-- Se modifica el último párrafo del artículo 11, de la Ley genera sobre las ventas, N° 6826, del 8 de noviembre de 1982 y sus reformas, cuyo texto dirá:

"Artículo 11.-- Base imponible en venta de mercancías En las ventas de mercancías el impuesto se determina sobre el precio neto de venta, que incluye para estos efectos el monto del impuesto selectivo de consumo, cuando las mercancías de que se trate estén afectas a este impuesto.

No forman parte de la base imponible:

- a) Los descuentos aceptados en las prácticas comerciales, siempre que sean usuales y generales y se consignen por separado del precio de venta en la factura respectiva.
- b) El valor de los servicios que se presten con motivo de las ventas de mercancías gravadas, siempre que sea o suministrados por terceras personas y se facturen y contabilicen por separado.
- c) Los gastos financieros que se facturen y contabilicen por separado.

Se faculta a la Administración Tributaria, para determinar la base imponible y ordenar la recaudación del impuesto en el nivel de las fábricas, mayoristas y aduanas, sobre los precios de venta al consumidor final, en el nivel del detallista, en las mercancías en las cuales se dificulte percibir el tributo.

El procedimiento anterior deberá adoptarse mediante resolución razonada, emitida por la Administración Tributaria y deberá contener los parámetros y los datos que permitan a los contribuyentes aplicar correctamente el tributo.

Para determinar la base imponible, la Administración Tributaria estimará la utilidad con base en un estudio que realizará a las empresas líderes en el mercado de los respectivos productos."

Artículo 25.-- Se modifica el artículo 13, el último párrafo del artículo 14 y el artículo 15. de la Ley general sobre las ventas, N° 6826, del 8 de noviembre de 1982 y sus reformas, cuyos textos dirán:

"Artículo 13.-- Base imponible en importaciones En la importación o la internación de mercancías, el valor sobre el cual se determina el impuesto se establece adicionando al valor CIF, aduana de Costa Rica, lo pagado efectivamente por concepto de derechos de importación, impuesto selectivo de consumo o específicos y cualquier otro tributo que incida sobre la importación o la internación, así como los demás cargos que figuren en la póliza o en el formulario aduanero, según

corresponda. El impuesto así determinado debe liquidarse separadamente en esos documentos y el pago deberá probarse antes de desalmacenar las mercancías respectivas."

"Artículo 14.-- Determinación del impuesto El impuesto que debe pagarse al Fisco se determina por la diferencia entre el débito y el crédito fiscales que estén debidamente respaldados por comprobantes y registrados en la contabilidad de los contribuyentes. El débito fiscal se determina aplicando la tarifa de impuesto a que se refiere el artículo 10 de esta Ley al total de ventas gravadas del mes correspondiente.

El crédito fiscal se establece sumando el impuesto realmente pagado por el contribuyente sobre las compras, importaciones o "internaciones" que realice durante el mes correspondiente. El crédito fiscal procede en el caso de adquisición de mercancías que se incorporen físicamente en la elaboración de bienes exentos del pago de este impuesto, así como sobre la maquinaria y equipo que se destinen directamente para producir los bienes indicados. Asimismo, el crédito fiscal se otorgará sobre la adquisición de mercancías que se incorporen físicamente en la producción de bienes que se exporten exentas o no del pago de este impuesto.

Cuando el crédito fiscal sea mayor que el débito, la diferencia constituye un saldo del impuesto a favor del contribuyente.

El crédito fiscal por compras locales debe estar respaldado por facturas o comprobantes debidamente autorizados por la Administración Tributaria."

"Artículo 15.-- Liquidación y pago Los contribuyentes citados en el artículo 4 de esta Ley, deben liquidar el impuesto a más tardar el último día de cada mes mediante declaración jurada de las ventas correspondientes al mes anterior. En el momento de presentarla, debe pagarse el impuesto respectivo. La obligación de presentar la declaración subsiste aun cuando no se pague el impuesto o cuando la diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal represente un saldo en favor del contribuyente.

El impuesto o, en su caso, las declaraciones deben pagarse o presentarse en los lugares que designe la Administración Tributaria a los contribuyentes. Mientras no se haya efectuado la desinscripción de un contribuyente, la obligación de presentar la declaración se mantiene, aun cuando por cualquier circunstancia no exista la obligación de pagar el impuesto. Los contribuyentes, que tengan agencias o sucursales dentro del país, deben presentar una sola declaración que comprenda la totalidad de las operaciones realizadas por tales establecimientos, y las correspondientes a sus casas matrices."

Artículo 26.-- Se modifica el artículo 20 y se adiciona un artículo 20 bis a la Ley general sobre las ventas, N° 6826, del 8 de noviembre de 1982 y sus reformas, cuyos textos dirán:

"Artículo 20.-- Cierre del negocio La Administración Tributaria queda facultada para ordenar el cierre de los establecimientos, por un plazo de quince días, así como para aplicar otras sanciones administrativas o penales, establecidas en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, con observancia del debido proceso, a aquellos contribuyentes o a sus representantes o dependientes, según sea el caso, que incurran en cualquiera de las siguientes causales:

1.-- No emitir la factura o el comprobante, debidamente autorizado por la Administración Tributaria o no entregarlos al cliente en el mismo acto de la compra, venta o la prestación del servicio.

2.-- No percibir el tributo correspondiente o no retenerlo.

3.-- Atrasarse por más de un mes, en la presentación de la declaración o el pago del impuesto correspondiente.

4.-- No enterar al Fisco, los tributos retenidos o percibidos.

El procedimiento administrativo para cerrar el negocio se preverá en el Reglamento de esta Ley.

Las disposiciones anteriores serán aplicables al impuesto sobre la renta y al impuesto selectivo de consumo.

En cuanto al impuesto sobre la renta, de no existir establecimiento, se aplicarán únicamente las sanciones correspondientes según el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

En cualesquiera de los casos citados, la causal del cierre de un establecimiento se hará constar por medio de sellos oficiales colocados en puertas, ventanas u otros lugares del negocio.

Constituyen infracciones tributarias la ruptura, la destrucción o la alteración de esos sellos provocadas o instigadas por el propio contribuyente, sus representantes, los administradores, los socios o su personal.

En todos los casos de cierre, el contribuyente deberá asumir siempre la totalidad de las obligaciones laborales con sus empleados, así como las demás cargas sociales. En todo momento, el incumplimiento se sancionará de conformidad con la legislación aplicable."

"Artículo 20 bis.-- Pena por ruptura de sellos Será sancionado con una multa de veinticinco mil (¢ 25.000,00) a cien mil colones (¢ 100.000,00) quien provocado o instigado por el propio contribuyente, sus representantes, los administradores, los socios o su personal, rompa, destruya o altere los sellos oficiales. Para el conocimiento de esta infracción, se seguirá el procedimiento establecido en los artículos 148 y siguientes del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Artículo 27.-- Se modifica el párrafo segundo del artículo 29 de la Ley del impuesto general sobre las ventas, N° 6826, del 8 de noviembre de 1982 y sus reformas, cuyo texto dirá:

"Artículo 29.-- Obligaciones impuestas por el régimen Los vendedores o prestadores de servicios que tributen de acuerdo con el régimen simplificado establecido, quedarán sujetos a todas las normas y obligaciones que afectan a los restantes contribuyentes, en lo que corresponda.

Excepto lo dispuesto en el párrafo anterior, los contribuyentes que se acojan al régimen establecido en el artículo 27 de esta Ley, no estarán obligados a otorgar facturas por sus ventas, pero sí a exigírselas a sus proveedores."

Artículo 28.-- Sustitución de timbres Se sustituyen los timbres creados mediante las leyes citadas a continuación, por timbres fiscales del mismo valor. Lo recaudado se destinará a la Caja Unica del Estado:

1.-- Ley del Timbre Policial, N° 6594, del 6 de agosto de 1981.

2.-- Creación del Timbre de Ayuda al Niño Abandonado, Ley N° 4320, del 28 de enero de 1969 y sus reformas.

3.-- Ley del Timbre Hospitalario, N° 2854, del 6 de noviembre de 1961 y sus reformas, en su artículo 3."

El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Hacienda definirá, de común acuerdo con las instituciones afectadas por este artículo, los recursos necesarios para el funcionamiento de ellas."

Artículo 29.-- Modificación de la Ley General de Aviación Civil Se modifica el encabezado del artículo 152 de la Ley General de Aviación Civil, N° 5150, del 14 de mayo de 1973; el texto dirá:

"Artículo 152.-- Para que se le otorguen certificados de explotación de servicios aéreos internacionales, la empresa deberá demostrar el cumplimiento de los siguientes requisitos: ..."

Artículo 30.-- Derogaciones Se derogan las siguientes normas:

- a) El inciso ch) del artículo 15, el párrafo segundo del artículo 20 y los artículos 12 y 25, todos de la Ley del impuesto sobre la renta, N° 7092, del 21 de abril de 1988 y sus reformas.
- b) Todo lo correspondiente a las constancias o las certificaciones tributarias establecidas en el inciso 5) del artículo 11 de la Ley N° 1155, del 29 de abril de 1950; en el inciso c) del artículo 7 de la Ley N° 14, del 2 de diciembre de 1935; en el inciso ch) del artículo 10 de la Ley N° 1922, del 5 de agosto de 1955 y sus reformas y en los incisos a), c) y d) del artículo 48 de la Ley N° 7293, del 31 de marzo de 1992 y la certificación para la titulación de vivienda campesina Ley N° 6154 reformada por Ley N° 6244 del 2 mayo de 1978.

Artículo 31.-- Reforma del artículo 8 de la Ley N° 7210 Se reforma el artículo 28 de la Ley N° 7210, del 23 de noviembre de 1990, cuyo texto dirá:

"Artículo 28.-- Una vez publicado el acuerdo ejecutivo, la empresa beneficiaria deberá suscribir con la Corporación un contrato de operaciones, cumplido lo cual, entrarán en vigor los beneficios del régimen.

Si, pasados tres meses desde la publicación del acuerdo ejecutivo, el contrato de operaciones no hubiere sido suscrito por la empresa beneficiaria, la corporación le formulará una prevención final y le otorgará un plazo perentorio de cinco días hábiles. Vencido este plazo, si la empresa no ha suscrito el contrato, caducará la concesión del régimen de zona franca."

Artículo 32.-- Autorización para contratar Se autoriza a la Administración Tributaria para contratar contadores públicos autorizados, de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley de la Contratación Administrativa, para que realicen auditorías fiscales.

Artículo 33.-- Sanción a funcionarios públicos El funcionario público de la Administración Tributaria que incurra en el delito previsto en el artículo 317 del Código Penal, será sancionado con tres a diez años de prisión.

Artículo 34.-- Normas reglamentarias Salvo disposición en contrario, el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente Ley en el plazo de noventa días, contados a partir de su publicación.

VIGENCIAS

Artículo 35.-- Fechas de vigencia Las disposiciones de esta Ley son de orden público y derogan toda disposición legal, general o especial, que se le oponga. Las reformas de su artículo 2, en lo referente a sanciones, entrarán en vigencia en el plazo de seis meses a partir de la publicación, siempre y cuando el Ministerio de Hacienda haya cumplido con las siguientes obligaciones:

- a) Promulgar los reglamentos generales de fiscalización, gestión tributaria y recaudación.
- b) Publicar los criterios objetivos de selección de los contribuyentes para la fiscalización.
- c) Implementar un sistema o programa de información y educación, dirigido al contribuyente para que conozca los alcances de la presente Ley.

Las reformas citadas en el artículo 2 de esta Ley rigen a partir del período fiscal siguiente a su publicación; sus artículos 4 y 5 rigen a partir del ejercicio económico de 1996; las demás disposiciones de esta Ley, rigen a partir de su publicación.

Artículo 36.-- Autorización al Poder Ejecutivo Se autoriza al Poder Ejecutivo para que mediante decreto, publique íntegramente el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755, del 3 de mayo de 1971 y sus reformas, con el propósito de ordenar y armonizar la nomenclatura y la concordancia de su articulado. TRANSITORIO I.-- La Corte Suprema de Justicia deberá crear los despachos judiciales mencionados en el artículo 65 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en el plazo de seis meses a partir de la vigencia de esta Ley.

TRANSITORIO II.-- El Ministerio de Hacienda, en un plazo no mayor de un año, deberá:

- a) Depurar el Registro único de contribuyentes.
- b) Validar la Cuenta integral tributaria.

TRANSITORIO III.-- Los incrementos injustificados de patrimonio e ingresos, que se presenten en la primera declaración del impuesto sobre la renta posterior a la vigencia del artículo 1 de esta Ley, no requerirán justificación de origen ni servirán como base para aplicar sanciones administrativas o penales.

A las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores se inicien antes de la vigencia de la presente Ley, no se les podrán aplicar sus disposiciones.

En los tributos cuyo pago esté sujeto a la presentación de una declaración jurada, esta Ley se aplicará en relación con los hechos generadores que se produzcan a partir del período fiscal posterior a la vigencia.

A partir de la vigencia de la presente Ley, los contribuyentes de impuestos administrados por el Ministerio de Hacienda contarán con un período de tres meses para cancelar sus obligaciones tributarias contraídas con anterioridad a la vigencia de esta Ley, pendientes de pago, con exoneración total de recargos, sanciones e intereses.

TRANSITORIO IV.-- La caducidad a que se refiere el artículo 28 de la Ley N° 7210, del 23 de noviembre de 1990, no se aplicará a las empresas que a la vigencia de esta Ley, ya se encuentren acogidas al Régimen de Zona Franca, independientemente de la fecha en que hayan sido suscritos los respectivos contratos de operaciones.

TRANSITORIO V.-- La Administración Tributaria estará facultada para que, por medio de resolución razonada y de aplicación general a todos los contribuyentes, deje sin efecto las causas iniciadas antes de la vigencia del artículo 1 de esta Ley, referentes a cada una de las infracciones

tributarias previstas en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios y las leyes especiales vigentes.

TRANSITORIO VI.-- Se condonan los adeudos en favor del Estado, remitidos a la Oficina de Cobros judiciales de la Dirección General de Hacienda, originados en tributos de períodos fiscales anteriores a 1991, salvo aquellos en los que haya sentencia firme o se hubiera operado causa alguna causa interruptora de la prescripción.

(Reformado por ley 7543 de 14/09/95)

Asamblea Legislativa.-- San José, a los treinta y un días del mes de julio de mil novecientos noventa y cinco.

Comuníquese al Poder Ejecutivo

Antonio Alvarez Desanti, Presidente.-- Alvaro Azofeifa Astúa, Primer Secretario.-- Manuel Ant. Barrantes Rodríguez, Segundo Secretario.

Dado en la Presidencia de la República.-- San José, al primer día del mes de agosto de mil novecientos noventa y cinco.

Ejecútese y publíquese

JOSE MARIA FIGUERES OLSEN.-- El Ministro de Hacienda, Fernando Herrero Acosta.-- 1 vez.-- C-1500.-- (44116).

"AUTO DE CORRECCION DE ERROR MATERIAL RESULTANDO:

1-- Que después de su aprobación en primer debate, la Comisión de Redacción reestructuró el articulado del Proyecto de Ley de Justicia Tributaria; de forma tal que los 12 artículos que lo componían fueron subdivididos en 36 artículos.

2-- Que en razón de dicha reestructuración, y en lo que interesa, el artículo 1 del Proyecto, que comprendía todas las reformas al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, se subdividió en los artículos I al II de la ley.

Las reformas al régimen sancionatorio quedaron comprendidas en el artículo 2° de la ley.

El artículo 2, que comprendía todas las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, se subdividido en los artículos 12 a 19 de la Ley.

Los artículos 4 y 5, relativos a la sustitución de timbres menores, se refundieron en un solo artículo, que lleva el número 28.

4-- Que el Plenario Legislativo aprobó el Proyecto de Ley de Justicia Tributaria, conforme a la redacción final propuesta por la Comisión de Redacción.

5-- Que el artículo 35 y los Transitorios III y V de la Ley contienen referencias a los artículos 1, 2, 4 y 5, las cuales debieron ser corregidas, en la forma indicada, al reestructurarse su texto Que al no realizarse tal corrección, se produjo un error material en la Ley.

CONSIDERANDO

Que de conformidad con los Principios Generales de Derecho, incorporados al Ordenamiento Jurídico en el Título Preliminar de Código Civil y en la Ley General de la Administración Pública, los errores materiales son corregibles en cualquier momento. Por tanto, Se procede a corregir las referencias al articulado, contenidas en el artículo 35 y los Transitorios III y V de la Ley de Justicia Tributaria, de la siguiente forma:

Artículo 35:

Donde dice "artículo 1" debe leerse "artículo 2".

Donde dice "artículo 2" debe leerse artículos 12 a 19".

Donde dice "artículos 4 y 5" debe leerse "artículo 28".

Transitorios III y V.

Donde dice "artículo 1" debe leerse "artículos 1 al 11".

Procédase de conformidad.

Dado en la Presidencia de la Asamblea Legislativa, a las catorce horas del diez de agosto de mil novecientos noventa y cinco".

Antonio Alvarez Desanti, Presidente--- Alvaro Azofeifa Astúa, Primer Secretario.-- Manuel Antonio Barrantes Rodríguez, Segundo Secretario.

**CREACION DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y DE LA
PROMOTORA DEL COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA**

N° 7638

**LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA
DE COSTA RICA
DECRETA:**

**CAPITULO I
Del Ministerio de Comercio Exterior**

Artículo 1°-Creación

Créase el Ministerio de Comercio Exterior, cuyo acrónimo será COMEX, como órgano del Poder Ejecutivo.

Artículo 2°-Atribuciones

Las atribuciones del Ministerio de Comercio Exterior serán:

- a) Definir y dirigir, la política comercial externa y de inversión extranjera incluso la relacionada con Centroamérica. Para los efectos anteriores, el Ministerio de Comercio Exterior establecerá mecanismos de coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y los ministerios y entidades públicas que tengan competencia legal sobre la producción y comercialización de bienes y la prestación de servicios en el país.
- b) Dirigir las negociaciones comerciales y de inversión, bilaterales y multilaterales, incluido lo relacionado con Centroamérica, y suscribir tratados y convenios sobre esas materias.

Mediante acuerdo el Poder Ejecutivo, podrá autorizar que los tratados y convenios, así como sus modificaciones sean firmados por los jefes de otros ministerios o entidades públicas del Estado que tengan competencia legal específica sobre la materia objeto del tratado o convenio.

- c) Participar, con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el de Agricultura y Ganadería y el de Hacienda, en la definición de la política arancelaria.
- d) Representar al país en la Organización Mundial del Comercio y en los demás foros comerciales internacionales donde se discutan tratados, convenios y, en general, temas de comercio e inversión.
- e) Establecer mecanismos reguladores de exportaciones, cuando sea necesario por restricciones al ingreso de bienes costarricenses a otros países. En estas circunstancias, las regulaciones deberán ser motivadas, claras, equitativas y no discriminatorias. Para ejecutar los mecanismos, el Ministerio de Comercio Exterior podrá apoyarse en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y el de Agricultura y Ganadería, según el caso; asimismo, podrá ejecutarlos por medio de otras instituciones, públicas o privadas, que se relacionen con el sector productivo correspondiente. Estas instituciones podrán cobrar a los usuarios por los servicios prestados.

- f) Determinar, en consulta con el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto y los Ministros rectores de la producción nacional, las represalias comerciales que se deriven de los acuerdos internacionales suscritos por Costa Rica, que serán ejecutadas en el país por los organismos competentes, según los procedimientos de ley y la materia en cuestión.
- g) Dictar las políticas referentes a exportaciones e inversiones.
- h) Otorgar el régimen de zonas francas, los contratos de exportación y el régimen de admisión temporal o perfeccionamiento activo y, cuando corresponda, revocarlos; según lo dispuesto en esta y en otras leyes o reglamentos aplicables.
- i) Dirigir y coordinar planes, estrategias y programas oficiales vinculados con exportaciones e inversiones.
- j) Evaluar las políticas de comercio exterior e inversiones por lo menos una vez cada dos años. Para esos efectos, se formará una Comisión mixta de evaluación de las políticas de comercio exterior e inversiones, integrada por un representante del Ministerio de Comercio Exterior, uno del Ministerio de Planificación, dos del sector privado y dos investigadores especialistas en la materia, provenientes de universidades públicas.

Artículo 3°-Apoyo interinstitucional

Conforme a las leyes respectivas, los Ministerios vinculados con la producción de determinados productos y las instituciones públicas relacionadas con servicios específicos, participarán en la administración y aplicación nacional de los tratados, convenios e instrumentos del comercio o la inversión, en armonía con las políticas, directrices y reglamentos dictados por el Ministerio de Comercio Exterior en consulta con esos Ministerios e instituciones.

Artículo 4°-Consejo Consultivo de Comercio Exterior

Establécese un Consejo Consultivo de Comercio Exterior, que asesorará al Poder Ejecutivo en la definición de las políticas de comercio exterior e inversión extranjera, y para promover mecanismos de coordinación y cooperación con el sector privado, a fin de ejecutar esas políticas y las negociaciones comerciales internacionales. Estará integrado por los siguientes miembros:

- a) El Ministro de Comercio Exterior, quien lo presidirá y, en su ausencia, será sustituido por su Viceministro.
- b) El Ministro de Economía, Industria y Comercio o, en su ausencia, el Viceministro.
- c) El Ministro de Agricultura y Ganadería o, en su ausencia, el Viceministro.
- d) El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto o un representante suyo especialmente designado al efecto.
- e) El Presidente o, en su ausencia, el Vicepresidente designado al efecto, de cada uno de los siguientes organismos: Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada, Cámara de Industrias, Cámara de Comercio, Cámara de Exportadores y Cámara de Agricultura, quienes no devengarán dietas.

- f) Dos representantes de pequeños y medianos productores y empresarios, designados por organizaciones legitimadas.

El Ministro de Comercio Exterior podrá invitar a participar en las sesiones de este Consejo a los Ministros de otras carteras, los representantes de otras organizaciones públicas y privadas cuya actividad incida sobre las políticas de comercio exterior e inversión, o a otras personas relacionadas con el tema.

Artículo 5º-Delegación Permanente ante la Organización Mundial del Comercio

La Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio formará parte del Ministerio de Comercio Exterior y dependerá de él para todos los efectos. Con el fin de dotarla de las plazas y los servicios necesarios, se creará un programa específico dentro del presupuesto de este Ministerio. A los miembros de la Delegación se les aplicarán, en lo conducente, las disposiciones del Estatuto del Servicio Exterior de la República, Ley N° 3530, de 5 de agosto de 1965, de conformidad con el reglamento que el Poder Ejecutivo dictará por medio de dicho Ministerio.

Artículo 6º-Diplomáticos de otras misiones encargados de asuntos comerciales

Los diplomáticos encargados de asuntos comerciales de las otras misiones diplomáticas seguirán formando parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y dependerán de él para efectos administrativos y presupuestarios. Serán nombrados con criterios eminentemente técnicos, profesionales y de experiencia.

En asuntos de comercio e inversión, estarán sujetos a programas de trabajo que aprobarán, en forma conjunta, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el Ministerio de Comercio Exterior. Ambos deberán preparar tales programas, actualizarlos periódicamente y evaluar su ejecución y desempeño. Asimismo, los Ministerios citados establecerán los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar el ejercicio adecuado de sus funciones. Las comunicaciones sobre comercio e inversión que provengan de estos diplomáticos, deberán cursarse simultáneamente a ambos Ministros.

CAPITULO II De la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica

Artículo 7º-Creación

Créase la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, cuyo acrónimo será PROCOMER, como entidad pública de carácter no estatal.

Artículo 8º -Objetivos y funciones

Serán objetivos y funciones de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica los siguientes:

- a) Diseñar y coordinar programas relativos a exportaciones e inversiones, con sujeción a las directrices que dicte el Poder Ejecutivo. La ejecución de estos programas se coordinará con las entidades privadas, sin fines de lucro, relacionadas con las exportaciones y las inversiones.

- b) Apoyar técnica y financieramente al Ministerio de Comercio Exterior para administrar los regímenes especiales de exportación, promover los intereses comerciales del país en el exterior y defenderlos.
- c) Administrar un sistema de ventanilla única de comercio exterior, que centralice y agilice los trámites de importación y exportación. Para ello, las instituciones públicas que intervengan en tales trámites estarán obligadas a prestar su colaboración a la Promotora y acreditar representantes, con suficientes facultades de decisión. En lo pertinente, estas entidades podrán delegar sus atribuciones, en forma temporal o permanente, en los funcionarios de la ventanilla única.
- d) Dar seguimiento a las estadísticas del comercio exterior, en coordinación con las instituciones competentes.
- e) Administrar bienes en fideicomiso y, en general, celebrar todos los contratos permitidos por las leyes, necesarios para cumplir con los objetivos y funciones de la Promotora.

Artículo 9° -Financiamiento

La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica financiará sus operaciones con los siguientes recursos:

- a) Un aporte inicial del Estado, consistente en el patrimonio final que resulte de la liquidación de la Corporación de la Zona Franca de Exportación S.A. y del Centro para la Promoción de las Exportaciones y de las Inversiones.
- b) Aportes de los sectores exportadores e importadores, constituidos por las contribuciones obligatorias, establecidas por esta ley, las cuales serán recaudadas por la Promotora, directamente o mediante convenios con los bancos del Sistema Bancario Nacional o con otros organismos públicos o privados. Estas contribuciones serán:
 - i) Una suma que el Poder Ejecutivo fijará mediante decreto, hasta por un máximo equivalente á tres dólares, moneda de los Estados Unidos de América (US\$3,00), por cada declaración aduanera de exportación e importación.
 - ii) El pago de un derecho por el uso del régimen de zona franca, por parte de las empresas acogidas a él. Será fijado por decreto ejecutivo, dentro de los siguientes límites máximos: las empresas procesadoras de exportación pagarán el equivalente a cincuenta centavos de dólar, moneda de los Estados Unidos de América como máximo, por cada metro cuadrado de techo industrial; las demás empresas acogidas al régimen pagarán, como máximo, el equivalente al cero coma cincuenta por ciento (0,50%) del volumen de las ventas mensuales. En todo caso, el monto mínimo mensual por pagar, por este concepto, no será inferior al equivalente a doscientos dólares, moneda de los Estados Unidos de América (US\$200,00).
- c) El producto de créditos, donaciones o legados, previa autorización de la Junta Directiva de la Promotora.

Artículo 10.-Junta Directiva

La dirección de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica corresponderá a una junta directiva, integrada por los siguientes nueve miembros:

- a) El Ministro de Comercio Exterior quien presidirá y, en su ausencia, el Viceministro.
- b) Tres personas de libre designación y remoción por el Consejo de Gobierno, nombradas por plazos coincidentes con el período constitucional del Presidente de la República.
- c) El Presidente o, en su ausencia, el Vicepresidente, de cada uno de los siguientes organismos: Cámara de Industrias, Cámara de Comercio, Cámara de Exportadores y Cámara de Agricultura.
- d) Un representante de los pequeños y medianos exportadores nombrado por el Consejo de Gobierno de una terna que le será presentada por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada. Ese representante ejercerá su cargo por el mismo plazo establecido en el inciso b) de este artículo.

Artículo 11.-Atribuciones de la Junta Directiva Serán atribuciones de la Junta Directiva:

- a) Dictar las normas y los reglamentos relativos a la organización y el funcionamiento de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica. Los reglamentos sobre contratación de esta Promotora no estarán sujetos a los procedimientos de la Ley de Contratación Administrativa, N° 7494, de 2 de mayo de 1995, ni a su reglamento; pero se subordinarán a los principios generales de contratación y a las prohibiciones contenidas en esa ley.
- b) Aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones, a los cuales deberán ajustarse los gastos de la Institución.
- c) Nombrar y remover al gerente general y al auditor interno, por mayoría de, al menos, dos tercios de la totalidad de sus miembros. Para remover al auditor interno, la junta deberá recabar, previamente, la opinión de la Contraloría General de la República.
- d) Delegar, en comisiones integradas por sus miembros o por funcionarios de la Institución, la adopción de decisiones relativas a las áreas de competencia de la Promotora, conforme a las normas que la junta dicte.
- e) Aprobar la creación de plazas por mayoría de, al menos, dos tercios de la totalidad de sus miembros. La misma mayoría calificada se requerirá para aprobar la venta de activos de la Institución. El nombramiento la remoción y el régimen de empleo de la Promotora se regirán por las disposiciones del Código de Trabajo.
- f) Contratar una auditoría externa, dependiente de la Junta, para que audite en forma periódica los estados financieros de la Promotora. Al finalizar cada ejercicio económico, la auditoría presentará a la Junta Directiva un informe con una opinión razonada sobre el cierre contable-financiero del período y las recomendaciones que considere pertinente formular. Una copia de ese informe será enviada a la Contraloría General de la República para los fines legales correspondientes.

CAPITULO III Disposiciones Finales

Artículo 12.-Marco Jurídico

La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica no estará sujeta a las siguientes disposiciones legales:

- a) Estatuto de Servicio Civil, Ley N° 1581, de 30 de mayo de 1953 y sus reformas.
- b) Artículos 9 y 10 de la Ley de Planificación Nacional, N° 5525, de 2 de mayo de 1974.
- c) Libro II de la Ley General de la Administración Pública, N° 6227, de 2 de mayo de 1978.
- d) Ley que crea la Autoridad Presupuestaria, N° 6821, de 19 de octubre de 1982.
- e) Ley para el equilibrio financiero del sector público para el año 1984, N° 6955, de 24 de febrero de 1984.
- f) Artículos 18 y 20 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 7428, de 7 de setiembre de 1994.
- g) Reglamentos o directrices fundados en las leyes anteriores.

Artículo 13.-Derogaciones

Deróganse las siguientes disposiciones:

- a) Los artículos 2, 3, 6, 8, 9, 10, 28 y 29 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, N° 7210, de 23 de noviembre de 1990. En esa ley y en cualquier otra ley o reglamento, las citas de la Corporación de la Zona Franca de Exportación, deberán entenderse referidas a la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.
- b) La Ley de creación del Centro para la Promoción de las Exportaciones y de las Inversiones, N° 4081, de 27 de febrero de 1968. En cualquier ley o reglamento, las citas del Centro para la Promoción de las Exportaciones y de las Inversiones deberán entenderse referidas a la Promotora.
- c) El artículo 67 de la Ley de Impuesto sobre la Renta N° 7092, de 21 de abril de 1988. Las funciones otorgadas al Consejo Nacional de Inversiones en los artículos 65 a 69 de esa ley se entenderán referidas al Ministerio de Comercio Exterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso b) de este artículo y de las actividades de apoyo que realice la Promotora, según lo dispuesto en esta ley.

Transitorio I. -Los nombramientos de los primeros miembros de la Junta Directiva de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica mencionados en el inciso b) del artículo 10 regirán hasta el 8 de mayo de 1998. A partir de esta fecha, los siguientes nombramientos regirán por el mismo período constitucional del Presidente de la República.

Transitorio II. -A partir de la entrada en vigencia de esta ley, la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica dispondrá de un plazo de tres meses, para formalizar y documentar el traspaso,

a su favor, de los activos, pasivos y patrimonio del Centro para la Promoción de las Exportaciones y de las Inversiones y de la Corporación de la Zona Franca de Exportación.

Transitorio III.-Los empleados del Centro para la Promoción de las Exportaciones y de las Inversiones y de la Corporación de la Zona Franca de Exportación, a quienes les sean liquidados los derechos laborales por el cierre de estas instituciones a que se refiere esta ley, podrán ser contratados por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, sin que les sea aplicable la prohibición del artículo 27 de la Ley para el equilibrio financiero del sector público para el año 1984, N° 6955, de 24 de febrero de 1984, y sin perjuicio de que, para el pago de prestaciones legales en el futuro, al recontractarlos se les acumule el tiempo de servicio anterior, si no se les han liquidado los derechos laborales correspondientes.

Transitorio IV.-La administración tributaria girará, a la Corporación de la Zona Franca de Exportación, S. A. y al Centro para la Promoción de las Exportaciones y de las Inversiones, los montos completos correspondientes a las partidas del Presupuesto Ordinario solo para el ejercicio económico de 1996.

Rige a partir de su publicación.

Asamblea Legislativa.-San José, a los tres días del mes de octubre de mil novecientos noventa y seis.

Comuníquese al Poder Ejecutivo

Víctor Julio Brenes Rojas
VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA

Gerardo Humberto Fuentes	González María Luisa Ortiz Messeguer
SEGUNDO SECRETARIO	PRIMERA PROSECRETARIA

Dado en la Presidencia de la República.-San José, a los treinta días del mes de octubre de mil novecientos noventa y seis.

Ejecútese y publíquese

JOSE MARIA FIGUERES OLSEN.-El Ministro de Comercio Exterior, José Rossi U.-1 vez.-C-300.-(65367).

**REGLAMENTO PARA EL MANEJO DE DIVISAS
POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS DEL REGIMEN DE ZONA FRANCA
ESTABLECIDO EN LA LEY N° 7210 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 1990
(LEY DEL REGIMEN DE ZONA FRANCA)**

No. 4924

CAPITULO I

Definiciones y ámbito de aplicación

Artículo 1°-Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:

- a) Reglamento para las Operaciones Cambiarias: el Reglamento para la aplicación del Régimen Cambiario establecido por el Banco Central de Costa Rica.
- b) Ley: Ley de Régimen de Zona Franca N°7210 del 14 de diciembre de 1990.
- c) Beneficiario: Persona física o jurídica que goza del Régimen de Zona Franca.
- d) Corporación: La Corporación de la Zona Franca de Exportación , S.A.

Artículo 2°-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, inciso j) de la Ley, los actos y contratos celebrados en moneda extranjera entre los beneficiarios, entre éstos y la Corporación, o aquellos referentes a sus transacciones internacionales, así como cualquier transacción que de ellos se derive, estarán exentos de la aplicación del Reglamento para las Operaciones Cambiarias.

CAPITULO II

Del uso y manejo de divisas

Artículo 3°-Los beneficiarios y la Corporación gozarán de la libre tenencia y manejo de divisas que adquieran de las transacciones contempladas en el artículo 2 anterior, y de aquellas que se deriven de su actividad ordinaria, por lo que no están obligados a liquidarlas en alguno de los entes autorizados o demostrar su ingreso al país de las divisas o monedas extranjeras que perciban por concepto de las transacciones mencionadas.

Artículo 4°-Los actos, contratos y obligaciones en moneda extranjera serán válidos, eficaces y exigibles; pero podrán ser pagados a opción del deudor, en colones computado según el valor comercial efectivo que, a la fecha del pago, tuviera la moneda extranjera adeudada. Se entenderá como valor comercial el tipo de cambio promedio calculado por el Banco Central de Costa Rica, para las operaciones del mercado cambiario.

Artículo 5°-Las exportaciones o importaciones que efectúen personas físicas o jurídicas establecidas en el territorio aduanero nacional sujetas a lo establecido en el Régimen de Zonas Francas, con Beneficiarios o la Corporación, de conformidad con los artículos 22 y 23 de la Ley, quedarán sujetas a lo dispuesto en el Reglamento para las Operaciones Cambiarias vigente.

CAPITULO II

Del uso y manejo de divisas

Artículo 3°- Los beneficiarios y la Corporación gozarán de la libre tenencia y manejo de divisas que adquieran de las transacciones contempladas en el artículo 2 anterior, y de aquellas que se deriven de su actividad ordinaria, por lo que no están obligados a liquidarlas en alguno de los entes autorizados o demostrar su ingreso al país de las divisas o monedas extranjeras que perciban por concepto de las transacciones mencionadas.

Artículo 4°- Los actos, contratos y obligaciones en moneda extranjera serán válidos, eficaces y exigibles; per podrán ser pagados a opción del deudor, en colones computado según el valor comercial efectivo que, a la fecha del pago, tuviera la moneda extranjera adeudada. Se entenderá como valor comercial el tipo de cambio promedio calculado por el Banco Central de Costa Rica, para las operaciones del mercado cambiario.

Artículo 5°- Las exportaciones o importaciones que efectúen personas físicas o jurídicas establecidas en el territorio aduanero nacional sujetos a lo establecido en el Régimen de Zonas Francas, con beneficiarios o la Corporación, de conformidad con los artículos 22 y 23 de la Ley, quedarán sujetas a lo dispuestos en el Reglamento para las Operaciones Cambiarias vigente.

CAPITULO III

Disposiciones Finales

Artículo 6°- la negociación de divisas en el territorio nacional se realizará por medio del Banco Central, de las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras y por otras que autorice la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica.

Artículo 7°-Cualquier violación a lo dispuesto en este Reglamento dará lugar a la aplicación de las sanciones que se prevé en los artículos 31 y 32, así como la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.

Artículo 8 °- Este reglamento deroga los anteriores y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario oficial “ La Gaceta”

Atentamente,

Lic. Jorge Monge Bonilla, Secretario General a.i.- 1 vez- (O.P. 34792) – C 5050 – (5855)

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, mediante artículo 5, numeral 1) ; del acta de la sesión 4920-97 celebrada el 13 de agosto de 1997 acordó:

Reglamento Para las Operaciones Cambiarias

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1° Del objetivo

El presente reglamento tiene como objetivo establecer las normas que regulan las operaciones con divisas del Mercado Cambiario en el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica Ley 7558, del 27 de noviembre de 1995.

CAPITULO II

De la Intermediación en el Mercado Cambiario

Podrán participar en el Mercado Cambiario, por cuenta y riesgo propio, las entidades financieras supervisadas y registradas ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y los puestos activos de la Bolsa Nacional de Valores (BNV) y de la Bolsa Electrónica de Valores (BEVCR) a nombre y por encargo exportadores, importadores y otros negociadores de divisas, en los términos y condiciones contemplados en el Capítulo VI de este reglamento.

Los otros entes o empresas que la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica autorice a participar en el Mercado Cambiario, deberán cumplir los siguientes requisitos:

- a) Presentar por escrito una solicitud de autorización para participar en el mercado de cambios ante la SUGEF, la cual deberá emitir a la Junta Directiva podrá solicitar a los interesados toda la información financiera y de cualesquiera otra índole que requiera.
- b) Someterse a la supervisión que establezca SUGEF para verificar el cumplimiento de lo establecido en la reglamentación cambiaria.
- c) Participar exclusivamente bajo la modalidad de Casa de Cambio, en los términos y condiciones y contemplados en el artículo VII de este reglamento.

Todas las entidades autorizadas para participar en el Mercado Cambiario deberán mantener en un sistema contable que permita identificar las operaciones correspondientes al Mercado Cambiario de conformidad con lo que establezca el órgano regulador correspondiente.

La SUGEF según corresponda incluirá dentro de su catálogo de cuentas lo concerniente para lo aquí indicado.

Artículo 3°- Tipo de Cambio de Referencia

El Banco de Costa Rica calculará diariamente un tipo de Cambio de Referencia para la compra y otra para la venta, los cuales serán utilizados, según, corresponda, para todos los efectos que contemplen las diferentes leyes, reglamentos, normas y disposiciones generales.

Los tipos de cambio de compra y venta de referencia de cada día serán calculados por el Banco Central de Costa Rica con base en un promedio ponderado de las transacciones cambiarias de compra y venta efectuadas por una de las entidades autorizadas es día hábil trasanterior ajustados por la variación en el tipo de cambio promedio del sistema MONED para el día anterior. Para estos efectos se utilizarán respectivamente, los tipos de cambio de compra y venta promedios ponderados de la totalidad de las transacciones de divisas con el público.

Artículo 4°- Margen de Intermediación Cambiaria

El margen de Intermediación cambiaria, definido como la diferencia entre el tipo de cambio de compra y venta, será determinado por las entidades autorizadas para participar en el Mercado Cambiario.

De conformidad con el artículo 97 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, por cada dólar vendido, las entidades autorizadas deberán trasladar, a más tardar el día hábil siguiente, un 15% del margen de intermediación cambiaria promedio ponderado por el total de transacciones efectuadas por cada una de las entidades durante el día. El resto corresponderá a la entidad vendedora.

Artículo 5°- De las entidades autorizadas a participar en el Mercado Cambiario deberán suministrar al Banco Central de Costa Rica la siguiente información sobre operaciones cambiarias:

- A) Comunicar diariamente, de conformidad con el instructivo que remitirá el Banco Central de Costa Rica, el monto en moneda nacional y extranjera de compras y ventas de divisas realizadas en el Mercado Cambiario, en las formas y detalles, y medios que se establezcan.
- B) Calcular e informar diariamente su posición autorizada y real en divisas, con excepción de aquellos entes o empresas que participen a nombre y por encargo de exportadores, importadores y otros negociadores de divisas.
- C) Comunicar diariamente por el sistema electrónico disponible o cualquier otro medio que acepte el Banco Central de Costa Rica, los tipos de cambio para la compra y venta de vigentes en ventanilla para la apertura y cierre del día.

Artículo 6°- Regulación de la Posición Autorizada en Divisas

La posición autorizada de divisas que se define como la diferencia entre la totalidad de activos y pasivos en moneda extranjera, podrá oscilar entre el cero y el ciento por ciento del Patrimonio de la entidad autorizada para participar en el mercado cambiario. La información sobre el Patrimonio será suministrada por la SUGEF. Para efectos de cálculo de la posición autorizada en divisas se utilizará el tipo de cambio de compra a fin de mes que establezca cada entidad.

La posición autorizada en divisas podrá ser modificada automáticamente por operaciones que no afecten el mercado cambiario, tales como intereses y comisiones pagados o cobrados, pago o retención de dividendos, pérdidas por préstamos incobrables, aportes de capital y modificaciones originadas por fluctuaciones en los tipos de cambio con respecto al dólar, siempre y cuando la posición autorizada en divisas se mantenga en el rango establecido en el párrafo anterior. Las entidades deberán informar a la SUGEF y a la Gerencia del Banco Central, a más tardar el día hábil siguiente, sobre la variación en la posición autorizada en divisas por estos conceptos.

La posición autorizada en divisas podrá variar diariamente, por concepto de operaciones cambiarias, hasta un margen máximo de uno por ciento (1%) con respecto al saldo del día anterior.

Artículo 7°- Fiscalización

La SUGEF fiscalizará directamente o por medio de otra entidad que autorice expresamente, las operaciones de las entidades financieras, los puestos de bolsa y los otros entes o empresas que participen en el mercado de cambios y verificará el cumplimiento de la ley y de este reglamento, pudiendo para tal efecto realizar las inspecciones que considere oportunas, así como requerir todos los informes que sean necesarios.

CAPITULO III

Operaciones con otras monedas

Artículo 8°- Autorización para transar otras monedas

Las entidades autorizadas podrán comprar y vender por su cuenta y riesgo todo tipo de divisas diferentes al dólar de los Estados Unidos de América, a cambio de colones costarricenses en estricto apego a lo dispuesto por este reglamento. Cada entidad autorizada podrá cobrar al cliente la comisión que considere pertinente cada transacción.

Artículo 9°- Compra de monedas por parte del Banco Central de Costa Rica

El Banco Central de Costa Rica podrá adquirir de las entidades que así lo soliciten, billetes y cheques de viajero de las siguientes divisas:

Libras esterlinas, Franco Francés, Franco Suizo, Marco Alemán, Florín Holandés, Dólar Canadiense, Y en Japonés.

Para estos efectos se utilizará el tipo de cambio que fija el Banco Central de Costa Rica para el día que se realice la transacción. La entidad financiera deberá reportar, por los medios que el Banco Central de Costa Rica determine, los tipos de divisas compradas y los montos en billetes y cheque de viajero. El mismo día en que se recibe la liquidación, el Banco Central de Costa Rica reintegrará a la entidad interesada los colones equivalentes, mediante un crédito a su cuenta corriente en el Banco Central de Costa Rica.

Artículo 10°- Referencia de Conversión

Las entidades interesadas en vender al Banco Central de Costa Rica divisas contempladas en el artículo 8 deberán utilizar los tipos de cambio de esas monedas respecto al dólar de los Estados Unidos, los cuales serán suministrados diariamente por el Banco Central de Costa Rica. Para la conversión a colones deberán aplicar el tipo de cambio de referencia al día de la operación.

CAPITULO IV

De las Exportaciones y otros ingresos de divisas.

Artículo 11° - Ingreso o reporte de divisas

Conforme a lo establecido en Artículo 91 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, toda persona física o jurídica que haya obtenido divisas por la exportación de bienes, servicios, y turismo, deberá liquidarlas en alguno de los entes autorizados o demostrar su ingreso al país ante el Banco Central de Costa Rica dentro de los 90 días siguientes, cierre del año fiscal, o en fecha anterior si el Banco Central de Costa Rica así lo requiere.

Los exportadores deberán rendir un informe certificado por un contador público sobre las exportaciones realizadas, así como de las divisas liquidadas o ingresadas por ese concepto. Para estos efectos el Banco Central de Costa Rica emitirá un instructivo con requisitos indispensables de información, donde se especifique el procedimiento a seguir en estos casos.

Para efectos de este Artículo, el exportador puede liquidar las divisas bajo una de las siguientes modalidades:

- a) El exportador efectivamente está cumpliendo con lo establecido en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica Ley 7588, y no viola lo indicado en el Artículo 92 de la misma ley, al presentar una certificación de Contador Público Autorizado, u otra prueba fehaciente, en la que se haga constar que las divisas fueron vendidas en una entidad autorizada para operar en el mercado cambiario. Lo anterior, fundamentado en que esto puede entenderse como una forma de ingreso jurídico, contable, y real de las divisas en los registros del exportador, en tanto se trate de personas físicas o jurídicas costarricenses debidamente registradas, en operación y con domicilio social y fiscal en Costa Rica, situaciones que el Banco Central o los agentes autorizados pueden ratificar en cualquier momento.

CAPÍTULO V

De las operaciones de divisas al Sector Público

Artículo 12°- Compra y venta de divisas al Sector Público

Las instituciones del sector público no Bancario efectuarán sus transacciones de compra – venta de divisas por medio de cualesquiera de los bancos comerciales del Estado, a los tipos de cambio de referencia del día.

Con respecto a estas transacciones los bancos comerciales del Estado, trasladarán a más tardar el día hábil siguiente las divisas compradas y solicitarán el reintegro de las divisas vendidas, al Banco Central de Costa Rica, el cual realizará la transacción al mismo tipo de cambio que usó el banco comercial estatal.

El Banco Central de Costa Rica podrá autorizar y definir los límites que las entidades del Sector Público pueden mantener divisas para aquellos casos que puedan ser ampliamente justificados.

Artículo 13°- Divisas correspondientes a endeudamiento

El tratamiento otorgado a las divisas provenientes de endeudamiento externo, así como los requerimientos para el servicio de la deuda externa se regirán en las condiciones y términos contemplados en el reglamento para el Registro y Control de la Deuda Externa de las instituciones del Sector Público Costarricense.

CAPITULO VI

Normativa para la operación de los puestos de bolsa por encargo de terceros

Artículo 14°- Objeto

El presente capítulo tiene como objeto regular el funcionamiento y enumerar los requisitos que deben observar los Puestos de Bolsa con base en lo establecido en la Ley en el artículo 2 de este reglamento.

Artículo 15°- Puestos de Bolsa

Sólo podrán operar en el mercado de cambios por encargo de los terceros los puestos activos de la Bolsa Nacional de Valores(BNV) y de la Bolsa Electrónica de Valores de Costa Rica (BEVCR)

Artículo 16° - Autorización

Los puestos de Bolsa que cumplan lo establecido en el artículo anterior deberán solicitar por escrito ante la SUGEF la autorización de participar en el Mercado Cambiario. Para cumplir con este cometido la SUGEF podrá solicitar a los interesados toda la información financiera y de cualesquiera otra índole que requiera. Los puestos de Bolsa deberán manifestar su aceptación a someterse a la fiscalización y supervisión por parte de la SUGEF o por la entidad que ésta autorice expresamente, en lo que compete a las operaciones que efectúen.

Artículo 17°- Requisitos adicionales

Para operar en el Mercado Cambiario los Puestos de Bolsa deberán cumplir, además, con los siguientes requisitos:

- a) Rendir una garantía mediante títulos de Propiedad o Bonos de Estabilización Monetaria por un valor de mercado de 5.000.000,00 colones, los cuales deberán ser depositados en el Banco Central de Costa Rica. El valor de los títulos valores se determinará según las cotizaciones más recientes en una de las bolsas de valores autorizadas para negociar esa clase de activos; queda entendido que si sobreviene un precio menor para los títulos depositados o se requiere un aumento de la garantía, es obligación del garante reponer las sumas necesarias para completar el valor establecido. El monto de dicha garantía será revisado y, si corresponde, aumentado en cada caso por la SUGEF en función del volumen de transacciones cambiarias, a más tardar durante los primeros seis meses de operación y posteriormente al final de cada año calendario. Dicha garantía responderá por eventuales daños y perjuicios que pudieran causar los Puestos de Bolsa a terceros en sus operaciones, determinados éstos por la Autoridad Judicial competente. La garantía rendida se mantendrá en custodia del Banco Central de Costa Rica, cuando así corresponda a su forma.
- b) Contar con las instalaciones adecuadas para su funcionamiento
- c) Exhibir permanentemente y en forma visible:
 - i. La ratificación de la SUGEF para operar en el Mercado cambiario
 - ii. Los precios que ofrezcan para la compra y venta de divisas
 - iii. La normativa emitida por el Banco Central de Costa Rica en materia cambiaria.
- d) Destacar claramente en la papelería su condición de Puesto de Bolsa con su respectiva razón social

Artículo 18°- Información que deben suministrar los puestos Activos de la BNV y de la BEVCR

Los puestos de Bolsa que indiquen a la SUGEF su intención de participar en el mercado de cambios por encargo de terceros tendrán que adecuarse a los requerimientos de información estipulados en el artículo 5, inciso a y c, de este reglamento.

Artículo 19°- Fiscalización

La SUGEF fiscalizará, directamente o por medio de otra entidad que autorice expresamente, las operaciones cambiarias de Puestos de Bolsa y verificará el cumplimiento de la ley de este reglamento, pudiendo para tal efecto realizar las inspecciones que considere oportunas, así como requerir todos los informes que sean necesarios.

CAPITULO VII

Normativa para la operación de las casas de cambio

Artículo 20° - Objeto

El presente capítulo tiene como objeto regular el funcionamiento y los requisitos que deben observar las Casas de Cambio con base en lo establecido en la Ley y en el artículo 2 de este reglamento.

Artículo 21°- Casa de cambio

Sólo podrá operar como casa de cambio, la Sociedad Mercantil que constituya para estos fines y expresamente contemple en su escritura constitutiva, que su único objeto será la compra y la venta

de moneda extranjera en billetes, giros bancarios, cheques de viajero y otros instrumentos de pago expresados en divisas.

Este tipo de sociedad deberá expresar claramente en su razón social la leyenda “ Casa de Cambio”

Artículo 22° - Autorización

- a) Las sociedades mercantiles constituidas conforme al Artículo anterior deberán solicitar por escrito ante la SUGEF la autorización para que se le permita participar en el Mercado Cambiario. La SUGEF deberá rendir ante la junta directiva del Banco Central de Costa Rica su opinión al respecto, para que dicho Cuerpo Colegiado tome la decisión correspondiente. Para cumplir con este cometido la SUGEF podrá solicitar a los interesados toda la información financiera y de cualesquiera otra índole que requiera. Dichas sociedades deberán manifestar su aceptación a someterse a la fiscalización y supervisión por parte de la SUGEF.

Artículo 23° - Requisitos Adicionales

Para operar en el Mercado Cambiario las Casas de Cambio deberán cumplir, además, con los siguientes requisitos:

- a) Al constituirse, los socios deberán aportar un capital social mínimo de ¢10.000.000 (diez millones de colones)
- b) Rendir una garantía mediante Títulos de Propiedad o Bonos de Estabilización Monetaria por un valor de mercado de ¢30.000.000 (treinta millones de colones) los cuales deberán ser depositados en el Banco Central de Costa Rica. El valor de los títulos valores se determinará según las cotizaciones más recientes en una de las bolsas de valores autorizadas para negociar esa clase de activos; queda entendido que si sobreviene un precio menor para los títulos depositados o se requiere un aumento de la garantía, es obligación del garante reponer las sumas necesarias para completar el valor establecido. El monto de dicha garantía será revisado y, si corresponde, aumentando en cada caso por la SUGEF en función del volumen de transacciones cambiarias, a más tardar durante los primeros seis meses de operación y posteriormente al final de cada año calendario.

Dicha garantía responderá por eventuales daños y perjuicios que pudieren causar las Casas de Cambios a terceros en sus operaciones, determinados éstos por la Autoridad Judicial competente. La garantía rendida se mantendrá en custodia del Banco Central de Costa Rica, cuando así corresponda a su forma.

En caso de que la Casa de Cambio dejare de prestar sus servicios al público por decisión propia, por acto administrativo o por acto judicial, la garantía rendida permanecerá vigente, por un plazo no menor de seis meses.

- c) Presentar y mantener actualizada la información relativa a la honorabilidad, solvencia, y experiencia de cada uno de los socios y miembros del Consejo Administrativo y funcionarios ejecutivos, conteniendo lo siguiente:
 - i. Nombres, calidades, números de identidad, y sus domicilios.

- ii. Constancia emitida por la autoridad competente relativa ala carencia de antecedentes penales.
- iii. Referencias bancarias comerciales
- d) Llevar a cabo una publicación de circulación nacional que permita oír oposiciones para un mejor resolver de la Junta Directiva del Banco Central, las cuales deberán presentarse dentro de un plazo de diez días naturales posteriores a la publicación.
- e) Contar con las instalaciones adecuadas para su funcionamiento
- f) Exhibir permanentemente y en forma visible:
 - i. un rótulo colocado en la parte exterior del establecimiento que indique que se trata de una “Casa de Cambio”
 - ii. La autorización para operar en el Mercado Cambiario
 - iii. Los precios que ofrezcan para la compra y venta de divisas
 - iv. La normativa emitida por el Banco Central de Costa Rica
- g) Destacar claramente en la papelería su condición de Casa de cambio.

Artículo 24° Participación

Las casas de cambios participarán en el Mercado Cambiario por cuenta y riesgo propio.

Artículo 25° Regulación de la Posición Autorizada en Divisas

La posición autorizada en divisas de las casas de cambio, podrá oscilar entre el cero y cien por cien del monto de la garantía exigida. La información sobre la garantía exigida. La información sobre la garantía sobre la garantía suministrada por la SUGEF. La posición autorizada en divisas podrá variar diariamente hasta un margen máximo de uno por ciento (1%) con respecto a saldo del día anterior.

Artículo 26°- Información que deben suministrar las Casas de Cambio

Las casas de Cambio tendrán las mismas obligaciones de información que las demás entidades autorizadas a participar en el Mercado Cambiario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de este reglamento.

Artículo 27 Fiscalización

La SUGEF fiscalizará, directamente o por medio de otra entidad que autorice expresamente, las operaciones de las Casas de Cambio y verificará el cumplimiento de la Ley y de este reglamento, pudiendo para tal efecto realizar las inspecciones que considere oportunas, así como requerir todos los informes que sean necesarios.

CAPITULO VIII

Sanciones

Artículo 28° - Sanciones

La infracción a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica y a este reglamento en Materia cambiaria, será sancionada conforme a lo dispuesto en los artículos 92,93,156 y concordantes de esa ley, sin perjuicio de otras sanciones civiles o penales que correspondan.

Vigencia y derogatoria

Este Reglamento rige a partir de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta” y deroga el Reglamento para las Operaciones Cambiarias aprobado por l Junta Directiva del Banco Central en su sesión 4848-95 Artículo 6 celebrada el 15 de diciembre de 1995, y sus reformas, (4864-96 artículo 8 del 13 de marzo de 1996; 4868-96 artículo 7, numeral 1 del 24 de abril de 1996 y 4898-96 artículo 7 de 13 de noviembre de 1996) así como las demás normas jurídicas dictadas por este directorio en materia cambiaria, que se opongan a las disposiciones de esta reglamentación

REFORMAS DE LA LEY DE RÉGIMEN DE ZONAS FRANCAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA

No. 7830

REFORMAS DE LA LEY DE RÉGIMEN DE ZONAS FRANCAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA.

DECRETA:

Artículo 1 .- Modificase la Ley de Régimen de Zonas Francas, No. 7210, de 23 de noviembre de 1990, en las siguientes disposiciones:

a) El artículo 1, cuyo texto dirá:

"Artículo 1º. - El Régimen de Zonas Francas es el conjunto de incentivos y beneficios que el Estado otorga a las empresas que realicen inversiones nuevas en el país, siempre y cuando cumplan los demás requisitos y las obligaciones establecidos en esta ley y sus reglamentos. El reglamento determinará qué se entenderá por inversiones nuevas en el país. Las empresas beneficiadas con este Régimen se dedicarán a la manipulación, el procesamiento, la manufactura, la producción, la reparación y el mantenimiento de bienes y la prestación de servicios destinados a la, exportación o reexportación, excepto lo previsto en los artículos 22 y 24 de esta ley. El lugar donde se establezca un grupo de empresas beneficiadas con este Régimen, se denomina "una franca" y será un área delimitada, sin población residente, autorizada por el Poder Ejecutivo para funcionar como tal. El Régimen de Zonas Francas se otorgará solo a empresas con proyectos cuya inversión nueva inicial en activos fijos sea de al menos ciento cincuenta mil dólares estadounidenses (US\$150.000,00) o su equivalente en moneda nacional.

Las pequeñas empresas que se asocien para realizar, conjunta y directamente, actividades procesadoras para la exportación, podrán alcanzar el monto mínimo de inversión indicado en este artículo, sumando el monto de la inversión de cada empresa asociada, conforme lo disponga el reglamento de esta ley. Para estos efectos, se entenderá por pequeñas empresas las que empleen a un máximo de veinte trabajadores.

Las empresas que califiquen en el Régimen de Zonas Francas tendrán que cumplir todas las normas de protección del medio ambiente que la legislación costarricense y la internacional disponen para el desarrollo sostenible de las actividades económicas."

b) El inciso c) del artículo 4, cuyo texto dirá:

Artículo 4"

[...]

c) Asumir, excepcional y temporalmente, la administración de las zonas francas, cuando el otorgamiento del Régimen de Zonas Francas le sea suspendido o revocado a una empresa administradora."

c) El primer párrafo del artículo 13; cuyo texto dirá:

"Artículo 13.-

Declárase Zona Aduanera Primaria, las áreas donde se ubiquen las empresas acogidas al Régimen de Zonas Francas.

[...]"

- d) El artículo 16, cuyo texto dirá:

La propiedad de las mermas, los subproductos y desperdicios que desechen las empresas acogidas al Régimen de Zonas Francas, corresponderá prioritariamente a la municipalidad del cantón donde dichas empresas se ubiquen, siempre que puedan ser tratados a nivel local o nacional y no causen peligro a la población; en estos casos, las municipalidades quedan autorizadas para venderlos de modo directo. Si las mermas, los subproductos y desperdicios no pueden tratarse a nivel local o nacional, será responsabilidad de la empresa darles el tratamiento debido.

Cuando algún productor o vendedor de bienes similares a los desechados por las empresas acogidas al Régimen de Zonas Francas, se sienta lesionado en sus intereses por el manejo de las mermas, los subproductos y desperdicios por parte de la municipalidad, podrá presentar reclamo ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Este Ministerio resolverá el conflicto a favor del reclamante, si determina que él se encuentra en una situación de evidente desventaja. Para resolver estos conflictos, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio dictará, vía reglamento, el procedimiento que debe seguirse."

- e) El primer párrafo del artículo 17, así como sus incisos c) y ch). Los textos dirán:

Artículo 17. Las empresas que se acojan al Régimen de Zonas Francas se clasificarán de la siguiente manera:

[...1

- c) Industrias y empresas de servicios que los exporten a personas físicas y jurídicas, domiciliadas en el exterior o que los provean a compañías beneficiarias del Régimen de Zonas Francas; siempre y cuando, en este último caso, los servicios estén directamente -vinculados con el proceso de producción de4as compa5ias beneficiarias del Régimen de Zonas Francas

Las entidades bancarias, financieras y aseguradoras que se instalen en las zonas francas, no podrán acogerse a los beneficios de este Régimen. Tampoco podrán acogerse al Régimen las personas físicas o jurídicas dedicadas a prestar servicios profesionales.

- ch) Empresas administradoras de parques destinadas a la instalación de empresas bajo el Régimen, de Zonas Francas, siempre que" los parques cumplan condiciones mínimas de infraestructura y disponibilidad de servicios, según el reglamento de esta ley. Estas empresas gozarán de las exoneraciones indicadas en el artículo 20, siempre que en el parque industrial que, desarrollen se instalen únicamente empresas acogidas al Régimen de Zonas Francas. De llegar a Instalarse en el parque empresas no acogidas al Régimen de Zonas Francas, la empresa administradora perderá, a partir de ese momento, la exoneración indicada en el inciso g) del artículo 20 y, en cuanto a las demás exoneraciones, se reducirán en la proporción correspondiente como si se tratara de ventas en el territorio aduanero nacional en los términos del artículo 22.

- f) El inciso ch) del artículo 18, cuyo texto dirá:

"Artículo 18.

- ch) Excepcionalmente, solo cuando las características del proceso productivo o la naturaleza del proyecto impidan desarrollarlo dentro de un parque industrial, podrá otorgarse el Régimen de Zonas Francas a empresas procesadoras de exportación, para que se establezcan fuera de un parque industrial, siempre y cuando la inversión inicial en activos fijos sea al menos de dos millones de dólares estadounidenses (US\$2.000.000,00) O su equivalente en moneda nacional, y se cumplan los demás requisitos reglamentarios. Para otorgar el Régimen de Zonas Francas fuera de un parque industrial, el Ministerio de Comercio Exterior deberá contar con el dictamen favorable del Ministerio de Hacienda. Este último deberá pronunciarse dentro de los quince días hábiles siguientes al recibo de la copia de la solicitud respectiva. Transcurrido este plazo sin respuesta, el dictamen del Ministerio de Hacienda se entenderá como favorable.

Asimismo, excepcionalmente, por razones de disponibilidad de mano de obra, transporte o manejo de materia prima por otro motivo, calificados vía reglamento y previa autorización expresa de PROCOMER, las empresas acogidas al Régimen de Zonas Francas ubicadas en un parque industrial, podrán instalar fuera de él plantas satélite, las que se acogerán a los términos del Acuerdo Ejecutivo que autoriza a la empresa. La planta instalada en el parque deberá realizar una proporción significativa de su producción total en relación con el número de plantas que se instalen fuera del parque y deberá sujetarse a los criterios que PROCOMER emita para el efecto. Igualmente, todas las importaciones de materia prima, maquinaria y otros, así como la exportación del producto final, deberán tramitarse desde la planta establecida en el parque industrial, salvo casos especiales debidamente justificados que autorice PROCOMER.

No podrá otorgarse el Régimen de Zonas Francas en los dos casos mencionados en los párrafos anteriores, si las empresas no cuentan con los controles fiscales ni aduaneros pertinentes."

- g) El inciso d) del artículo 19, cuyo texto dirá:

"Artículo 19.

- d) Proporcionar los informes con respecto a los niveles de empleo, inversión, valor agregado nacional u otros que se indiquen en el Acuerdo Ejecutivo de otorgamiento del Régimen. El cumplimiento de esta obligación será requisito esencial para gozar de los incentivos contemplados en esta ley.
- h) El primer párrafo del artículo 20, el inciso c), el inciso g) y el primer párrafo del inciso k). Los textos dirán:

Las empresas acogidas al Régimen de Zonas Francas gozarán de los siguientes incentivos, con las salvedades que a continuación se indican:

1...]

c) Exención de todo tributo y derecho consular que pese sobre la importación de los combustibles, aceites y lubricantes requeridos para la operación de estas empresas. Tal exención se otorgará únicamente cuando estos bienes no se produzcan dentro del país en la calidad, cantidad y oportunidad necesarias. Para importarlos, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio deberá otorgar la autorización previa y pronunciarse, mediante resolución razonada, en un plazo máximo de quince días hábiles.

g) Exención de todos los tributos a las utilidades, así como de cualquier otro, cuya base imponible se determine en relación con las ganancias brutas o netas, los dividendos abonados á los accionistas o ingresos o ventas, de conformidad con las siguientes diferenciaciones:

1° Para las empresas ubicadas en zonas de "mayor desarrollo relativo", la exención será de un ciento por ciento (100%) hasta por un período de ocho años y de un cincuenta por ciento (50%) en los siguientes cuatro años.

2° Para las empresas ubicadas en zonas de "menor desarrollo relativo", la exención será de un ciento por ciento (100%) hasta por un período de doce años y de un cincuenta por ciento (50%) en los siguientes seis años.

Los plazos se contarán a partir de la fecha de inicio de las operaciones productivas de la empresa beneficiaria, siempre que dicho plazo no exceda de dos años a partir de la publicación del respectivo acuerdo ejecutivo.

Las exenciones contempladas en este inciso no se aplicarán cuando los beneficiarios potenciales puedan descontar, en su país de origen, los impuestos exonerados en Costa Rica.

Para definir "zona de mayor o de menor desarrollo relativo" la Corporación deberá acatar lo dispuesto por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica para tal efecto.

["1

k) Las empresas que se establezcan en las zonas francas ubicadas en las zonas de "menor desarrollo relativo", según la calificación del Ministerio de Comercio Exterior, previo informe del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, tendrán derecho a recibir una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) de la suma pagada por salarios durante el año inmediato anterior, una vez deducido el monto pagado a la Caja Costarricense de Seguro Social sobre esos salarios, y conforme a la certificación de la planilla reportada a la Caja. Estas empresas podrán solicitar acogerse al beneficio de esta ley, dentro de los cinco años posteriores a la entrada en vigencia de lo dispuesto en este inciso. El beneficio se otorgará por cinco años y decrecerá dos puntos porcentuales hasta su liquidación en el último año. Esta bonificación se emitirá contra el presupuesto nacional en las condiciones que determine el reglamento de esta ley.

[...1"

1) El artículo 22, cuyo texto dirá:

artículo 22 . Las empresas acogidas al Régimen de Zonas Francas, salvo las indicadas en el inciso b) del artículo 17, podrán introducir en el territorio aduanero nacional hasta un veinticinco por ciento (25%) de sus ventas totales, previo cumplimiento de los requisitos señalados en el reglamento de esta ley. En el caso de las empresas indicadas en el inciso c) del artículo 17 el porcentaje máximo será del cincuenta por ciento (50%).

A los bienes y servicios que se introduzcan en el mercado nacional les serán aplicables los tributos y procedimientos aduaneros propios de cualquier importación similar proveniente del exterior. Además, el porcentaje de exoneración de los tributos sobre importación de maquinaria, equipo y materias primas y los tributos sobre utilidades se reducirá en la misma proporción que represente el valor de los bienes y servicios introducidos en el territorio aduanero nacional, en relación con el valor total de las ventas y los servicios de la empresa, conforme al reglamento de esta ley."

j) El artículo 32, cuyo texto dirá:

"Artículo 32.

El Ministerio de Comercio Exterior podrá imponer una multa hasta de trescientas veces el salario base, de acuerdo con la definición del artículo 2 de la Ley No. 7337, de 5 de mayo de 1993, podrá suprimir, por un plazo desde un mes hasta un año, uno o varios incentivos de los indicados en el artículo 20 de esta ley, o podrá revocar el Régimen de Zonas Francas sin responsabilidad para el Estado, a las empresas beneficiarias que incurran en alguna de las siguientes infracciones:

- a) Haber suministrado datos falsos en su solicitud para acogerse al Régimen.
- b) Iniciar operaciones fuera del plazo previsto en el Acuerdo Ejecutivo.
- c) Incumplir los nuevos niveles de inversión, empleo, valor agregado nacional u otros contemplados en el respectivo Acuerdo Ejecutivo.
- d) Rendir, fuera de los plazos reglamentarios, el informe anual de actividades cualesquiera otros informes que soliciten PROCOMER el Ministerio de Comercio Exterior. La no presentación del informe anual dentro del plazo establecido para el efecto implicará la suspensión automática, de todos los beneficios del Régimen, hasta que el informe se presente completo.

Realizar ventas en el mercado local sin cumplir los requisitos indicados en el artículo 22 de esta ley.

- f) Pagar a destiempo, el derecho por el uso del Régimen.
- g) No realizar el depósito de garantía previsto en esta ley o no renovarlo antes de su vencimiento.
- h) Cesar operaciones o abandonar sus instalaciones sin haber obtenido autorización previa, en la forma que indique el reglamento de esta ley.
- i) Haber sido sancionados la empresa, sus accionistas, directores, empleados o personeros, en relación con actividades de la empresa, mediante resolución firme en vía administrativa, por haber incurrido en infracciones administrativas, aduaneras, tributarias o tributaria adunera. En este caso, no procederá la imposición de multas, pero sí la revocatoria del Régimen, cuando se trate de infracciones graves o reiteradas a juicio del Ministerio de Comercio Exterior.
- j) Haber sido condenados los accionistas, directores, empleados o personeros de la empresa beneficiaria, en relación con las actividades de la, empresa, mediante resolución firme en la vía judicial, por haber incurrido en delitos aduaneros o tributarios. En este caso no procederá la imposición de multas, pero sí la revocatoria del Régimen, cuando se trate de infracciones graves o reiteradas a juicio del Ministerio de Comercio Exterior.
- k) Haber cesado la empresa sus pagos o haber sido declarada en quiebra, concurso, convenio preventivo o administración por intervención judicial.
- l) Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones que les correspondan según la ley, los reglamentos y los contratos de operaciones.

- m) Manejar las mermas, los subproductos y desperdicios sin cumplir lo establecido en el artículo 16 de esta ley y su reglamento.
- n) Usar o destinar, en forma distinta de la especificada en el Acuerdo Ejecutivo correspondiente, la maquinaria, el equipo, los vehículos, las materias primas, los productos semielaborados y cualesquiera otros artículos adquiridos por las empresas al amparo de los incentivos otorgados.
- ñ) Incumplir las empresas desarrolladoras de parques las normas de seguridad y control establecidas en el reglamento de esta ley.

Para determinar la sanción aplicable, se tomará en cuenta la gravedad de la falta, el grado de culpa o la existencia de dolo por parte de los empleados o personeros de la empresa, la reincidencia y, cuando se trate de multas, el volumen de ingresos de la empresa.

El Ministerio de Comercio Exterior podrá ordenar, por un plazo máximo de seis meses, la suspensión precautoria de los incentivos y beneficios contemplados en esta ley, durante la tramitación de procedimientos administrativos o investigaciones en sede judicial que cuestionen la legalidad de la actividad de una empresa beneficiaria del Régimen de Zonas Francas, de empresas relacionadas o de sus accionistas, directores, gerentes o personeros. Ni la suspensión precautoria ni su levantamiento prejuzgarán sobre la resolución final del respectivo procedimiento administrativo o proceso judicial.

El Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Hacienda determinarán los mecanismos de coordinación necesarios para la más correcta y eficiente aplicación de los controles y las sanciones a las empresas beneficiarias del Régimen de Zonas Francas.

El producto de las multas fijadas en este artículo se distribuirá de la siguiente manera: un cincuenta por ciento (50%) a PROCOMER y un cincuenta por ciento (<50%) a la municipalidad del cantón donde se ubique la empresa beneficiaria.

Contra la imposición de las sanciones previstas en este artículo cabrá recurso de reposición dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la resolución correspondiente, con lo cual se dará por agotada la vía administrativa.

La, resolución que imponga una multa constituirá título ejecutivo contra el infractor y PROCOMER estará legitimada para cobrarla."

Artículo 2. Adiciónanse a la Ley de Régimen de Zonas Francas, No 7210, de 23 de noviembre de 1990, las siguientes disposiciones:

- a) Al artículo 14, un segundo párrafo cuyo texto dirá:

artículo 14

[...]

Igualmente, esos administradores suministrarán al Ministerio de Comercio Exterior y a PROCOMER las facilidades y la asistencia que estas entidades requieran para ejercer sus funciones relativas a las empresas beneficiarias del Régimen de Zonas Francas."

- b) Al artículo 19 los incisos e) y 1). Consecuentemente, se corre la enumeración para que el anterior inciso e) pase a ser g). Los textos dirán:

"Artículo 19.

(...1

- e) Utilizar las declaraciones aduaneras, los precintos y demás instrumentos exigidos, legal o reglamentariamente, para la documentación o el control de sus operaciones.
- f) Las empresas administradoras de parques, las empresas a las que se les otorgue el Régimen de Zonas Francas fuera del parque industrial y las plantas satélite, deberán establecer los controles necesarios en relación con el ingreso y la salida de mercancías, contrataciones y demás normas que establezcan las leyes y los reglamentos aplicables."
- c) Al artículo 20, un inciso 1) y un párrafo final. Los textos dirán:

"Artículo 20.

1) Las empresas procesadoras de exportación beneficiarias del Régimen de Zonas Francas que al cumplir cuatro años de operar bajo dicho Régimen reinviertan en el país, podrán recibir una exención adicional del pago del impuesto sobre la renta, de conformidad con los parámetros siguientes:

1° Si la reinversión excede del veinticinco por ciento (25%) de la inversión original, la exención será por un año adicional.

2° Si la reinversión excede del cincuenta por ciento (50%) de la inversión original, será por dos años adicionales.

3° Si la reinversión excede del setenta y cinco por ciento (75%) de la inversión original, será por tres años adicionales.

4° Si la reinversión excede del ciento por ciento (100%) de la inversión original, será por cuatro años adicionales.

Las exenciones adicionales serán del setenta y cinco por ciento (75%) del impuesto sobre la renta por pagar. Las exenciones adicionales aquí otorgadas regirán después de cumplido el octavo año de operaciones, sin perjuicio de las exenciones correspondientes al período final de cuatro años otorgado originalmente, el cual regirá una vez que venza el período de la exención adicional aquí regulado. Cuando se trate de empresas instaladas en zonas de "menor desarrollo relativo", la exención adicional otorgada regirá una vez cumplido el decimosegundo año de operaciones, sin perjuicio de las exenciones correspondientes al período final de seis años otorgado originalmente, el cual regirá cuando venza el período de esta exención adicional. La reinversión que da lugar a la exención adicional deberá completarse luego de cumplido el cuarto año y antes de iniciarse el octavo año de operaciones al amparo del Régimen de Zonas Francas.

La exención adicional solo podrá otorgarse a empresas cuya inversión original inicial en activos fijos haya sido al menos de dos millones de dólares estadounidenses (US\$2.000.000,00)."

"Las empresas indicadas en el inciso b) del artículo 17 no gozarán de las exoneraciones establecidas en los incisos f) y g) de este artículo. Cuando una empresa de las indicadas en otros incisos del artículo 17, distintos del inciso b), realice actividades de comercialización en la misma proporción en que las efectúe se le reducirá la exoneración del impuesto sobre la renta, según lo

establezca el reglamento de esta ley. La realización de actividades de comercialización por parte de las empresas no comercializadoras acogidas al Régimen, únicamente podrá ser complementaria, no principal y, requerirá la autorización previa de PROCOMER."

d) El artículo 20 bis, cuyo texto dirá:

"Artículo 20 bis No se otorgará el Régimen de Zonas Francas a personas físicas ni jurídicas para operar ni desarrollar una empresa o proyecto de inversión ya beneficiado de los incentivos del Régimen, aunque haya sido al amparo de una persona física o jurídica distinta, salvo que se demuestre que es un proyecto nuevo o, en casos excepcionales, cuando la naturaleza y magnitud de las inversiones adicionales lo justifiquen; todo a juicio del Ministerio de Comercio Exterior y de conformidad con lo dispuesto, en el reglamento de esta ley."

e) Al artículo 24, un párrafo final, cuyo texto dirá:

1...]

El reglamento de esta ley establecerá los requisitos, las condiciones y normas de control referente a la venta de bienes y servicios entre las empresas beneficiarias del Régimen de Zonas Francas y las empresas beneficiarias de otros regímenes especiales de importación y exportación."

f) Un nuevo artículo 37; en consecuencia, se corre la numeración. El texto dirá:

Artículo 37. Las empresas administradoras de parques destinarán un local para que los trabajadores realicen reuniones y asambleas; asimismo, lo mantendrán en buenas condiciones. Para asistir a tales actividades, se permitirá el libre acceso de los representantes de los trabajadores al parque."

Artículo 3.-

Deroganse las siguientes disposiciones de la Ley de Régimen de Zonas Francas, N° 7210, de 23 de noviembre de 1990.

a) El inciso g) del artículo 4.

b) El artículo 31.

Artículo 4-

El Ministerio de Hacienda, mediante reglamento dictado conjuntamente con el Ministerio de Comercio Exterior, podrá eximir de determinados trámites propios de los regímenes definitivos y temporales de importación y exportación, a las empresas que operen bajo el Régimen de Zonas Francas, considerando las particularidades de este Régimen, con el fin de adecuar las operaciones de las zonas francas a las necesidades de los usuarios del servicio.

Rige a partir de su publicación.

Comunicase al Poder

Asamblea Legislativa San José, a los diez días del mes de setiembre de mil novecientos noventa y ocho. Rina Contreras López, Vicepresidenta en Ejercicio de la Presidencia. Manuel Ant. Bolaños Salas, Primer Secretario. Irene Urpí Pacheco, Segunda Secretaria.

Dado en la Presidencia de la República. San José, a los veintidós días del mes de setiembre de mil novecientos noventa y ocho.

Ejecútese y publíquese.

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ECHEVERRIA. El Ministro de Comercio Exterior,
Samuel Guzowski R.1 vez.(Solicitud N° 12718) C42800. (62678).

No 27329-H-COMEX

**EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y LOS MINISTROS DE HACIENDA
Y COMERCIO EXTERIOR,**

En uso de las facultades que les confieren el artículo 140, incisos 3) y 18) de la Constitución Política, el artículo 28, inciso b) de la Ley General de la Administración Pública, el Código Aduanero Uniforme Centroamericano III, la Ley General de Aduanas No 7557, el Reglamento No 2527O~H, Reglamento 26285-H-COMEX y la Ley del Impuesto sobre la Renta No 7092,

Considerando:

1. Que la ley 7092 del 21 de abril de 1988 y sus reformas, Ley de Impuesto sobre la Renta, en su Título Y, Capítulo XXVII, estableció una serie de incentivos a las actividades dedicadas a la exportación de productos no tradicionales.
2. Que igualmente en la citada Ley se creó el Régimen de Admisión Temporal, cuyos aspectos fundamentales y administrativos requieren ser reglamentados para que cumplan a cabalidad con la promoción de las exportaciones.
3. Que la Ley General de Aduanas No .7557 publicada en "La Gaceta" No 212-del jueves 8 de noviembre de 1995, con vigencia a partir del primero de Julio de 1996, en su artículo 179 y subsiguientes, estableció la normativa básica del Régimen de Perfeccionamiento Activo y que comprende el Régimen de Admisión Temporal, reconociendo los derechos adquiridos por los beneficiarios de dicho régimen.
4. Que mediante decreto ejecutivo N0 26285-H-COMEX publicado en "La Gaceta" N° 170 del 4 de setiembre de 1997, se creó entre otros, el Reglamento al Régimen de Perfeccionamiento Activo.
5. Que en las disposiciones transitorias del anterior cupo normativo, específicamente en el transitorio III, se establecieron directrices respecto al Título de Prenda Aduanera.
6. Que en aras de legislar, en estricto apego a lo que tipifica el Ordenamiento Jurídico vigente. Por tanto, -

Decretan:

Artículo 1°-Modifícase el Transitorio III del decreto ejecutivo No 26285-H-COMEX,- del 4 de setiembre de 1997, en la forma que se indica a continuación:

"Transitorio III. -Los beneficiarios contarán con un plazo de tres meses, para que su representante legal presente declaración jurada ante la aduana de control, el inventario de mercancías, debidamente certificado por un contador público autorizado, que hayan ingresado bajo el régimen de admisión temporal.

Dicha declaración debe contener los respectivos números de prenda aduanera".

Artículo 2°-Vigencia.

Rige a partir del primero de setiembre de 1998.

Dado en la Presidencia de la República. San José, a los veintiséis días del mes de agosto de mil novecientos noventa y ocho.

MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ ,ECHEVERIRA.-Los Ministros de Hacienda, Leonel Baruch y el de Comercio Exterior, Samuel Guzowski.-1 vez.-Solicitud N17 163).-C-6750.
(61952).

PODER EJECUTIVO
DECRETOS
Nº 29055-H-COMEX
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y LOS MINISTROS DE HACIENDA
Y COMERCIO EXTERIOR

En ejercicio de las atribuciones que les confieren los incisos 3) y 18) del artículo 140 de la Constitución Política, y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 190 de la Ley General de aduanas y transitorio V de esa misma Ley.

Considerando:

1. Que el artículo 179 de la Ley General de Aduanas, Ley N° 7557 del 20 de octubre de 1995, publicada en *La Gaceta* N° 212 del 8 de noviembre de ese mismo año, define el régimen de perfeccionamiento activo como “... *el régimen aduanero que permite recibir mercancías en el territorio aduanero nacional con suspensión de toda clase de tributos y bajo rendición de garantía. Estas mercancías deben ser reexportadas dentro de los plazos que determinen los reglamentos, después de ser sometidas a un proceso de transformación, reparación, reconstrucción, montaje ensamblaje o incorporadas en conjuntos, maquinaria, equipo de transporte en general o aparatos de mayor complejidad tecnológica y funcional o utilizadas para otros fines análogos, en las condiciones establecidas reglamentariamente y en las disposiciones que al efecto emita el órgano administrador competente.*”
2. Que el artículo 3° del Decreto ejecutivo N° 26285-H-COMEX de fecha 19 de agosto de 1997 y publicado en *La Gaceta* N° 170 del 4 de setiembre de ese mismo año, que es el “Reglamento de las Regímenes de Perfeccionamiento Activo y Devolutivo de Derechos”, definió el concepto de ventas al mercado local para los efectos de dicho régimen como” aquéllas que se realicen a territorio costarricense o a Centroamérica”.
3. Que dicha definición incorpora una limitación, no establecida por la Ley, en lo que se refiere a las empresas que deseen acogerse al régimen de perfeccionamiento activo, toda vez que les impide exportar -disfrutando de los beneficios del régimen- sus productos a Centroamérica. Esta limitación, aparte de no estar contemplada por la Ley, restringe sin justificación técnica ninguna la aplicación de una herramienta legal para los exportadores costarricenses, como lo es sin duda el régimen de perfeccionamiento activo.
4. Que esa misma limitación aparece consignada en los artículos 12 y 18, párrafo primero, del Reglamento antes citado.
5. Que ante el vencimiento de los contratos de exportación, el sector exportador del país requiere de herramientas sustitutivas idóneas que les permitan competir internacionalmente en condiciones de igualdad.
6. Que una de tales herramientas lo constituye justamente el régimen de perfeccionamiento activo que contempla la Ley General de Aduanas, el cual -como se dijo- fue significativamente limitado con la definición de mercado local que contemplan los artículos 3°, 12 y 18 del Reglamento antes relacionado.
7. Que ante las nuevas circunstancias que se presentan a raíz del aludido vencimiento de los contratos de exportación, resulta indispensable adecuar al régimen mencionado al concepto que

contiene la Ley General de Aduanas, para lo cual deviene como necesario redefinir el concepto de ventas al mercado local que contiene los numerales supracitados. **Por tanto,**

DECRETAN:

Artículo 1°—Refórmase la definición de “mercado local” que contiene el artículo 3° del Decreto Ejecutivo N° 26285-H-COMEX de fecha 19 de agosto de 1997, publicado en *La Gaceta* N° 170 del 4 de setiembre de ese mismo año, para que diga lo siguiente:

“Artículo 3°—Definiciones. Para los efectos del presente Reglamento se entiende por:
... Mercado local: Serán ventas a mercado local todas aquéllas que se realicen a territorio costarricense”.

Artículo 2°—Refórmanse los artículos 12 y 18, párrafo primero, del Decreto Ejecutivo N° 26285-H-COMEX de fecha 19 de agosto de 1997, publicado en *La Gaceta* N° 170 del 4 de setiembre de ese mismo año, cuyo textos dirán:

“Artículo 12.—Destino de la Producción. Las empresas que se acojan a esta modalidad no podrán vender sus productos en el mercado local. La planta de producción deberá estar dedicada únicamente a la producción para la reexportación.”

“Artículo 18.—Para la venta de productos en el mercado local, el beneficiario de esta modalidad deberá pagar la totalidad de los impuestos correspondientes a la importación definitiva de las mercancías.

...”

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil.

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA.—Los Ministros de Hacienda, Leonel Baruch Goldberg y de Comercio Exterior, F. Tomás Dueñas.—1 vez.—(Solicitud N° 30062-Comex).—C-13320.—(74513).
